

Periferias (Año 13 no. 18 2009)	Titulo
FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas - Compilador/a o Editor/a	Autor(es)
Buenos Aires	Lugar
FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas	Editorial/Editor
2009	Fecha
	Colección
Política económica; Cooperativismo de trabajo; Democracia; Golpes de Estado; Política exterior; Soberanía; Militalización; Universidades; Revolución Cubana; América Latina; Estados Unidos; Honduras;	Temas
Revista	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/fisyp/20100410033229/Periferias18.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

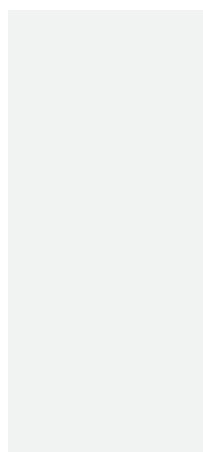
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences





PERIFERIAS

Revista de Ciencias Sociales

Año 13 - N° 18
Segundo semestre de 2009



FISYP

Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas

www.fisyp.org.ar



**Revista Periferias**

FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
Av. Corrientes 1515, 6to "B"
(CP1042AAB) Buenos Aires - Argentina

Tel Fax:

4371-0538

mail:

fisyp@fisyp.org.ar

web:

periferias@fisyp.org.ar
www.fisyp.org.ar

Coordinación editorial:

Darío Stukalsky y José Luis Bournasell

Diseño editorial:

Gabriel Macarol / Alfredo Stambuk
www.mzms.com.ar

Composición y armado:

José Luis Bournasell

Producción editorial:

Tomás Manoukian

Corrección:

Julián Sánchez

Periferias es una publicación semestral

La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas es una entidad sin fines de lucro, dedicada a la actividad de investigación, docencia y difusión en diversas áreas de Ciencias Sociales.

Promover la edición de Periferias, Revista de Ciencias Sociales, es una iniciativa asumida como parte integrante de su actividad académica.

ISSN: 1514-559X



PERIFERIAS

COMITÉ EDITORIAL

Daniel Campione
Alberto Fortunato
Julio Gambina
Oscar Martínez
Miguel Mazzeo
Beatriz Rajland

COLECTIVO DE REDACCIÓN

Mariana Carroli
Floencia Martínez
Martín Unzué
José Luis Bournasell

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Giorgio Baratta (Universidad de Urbino, Italia)
Javier Arzuaga (Universidad Autónoma del Estado de México)
Manuel Monereo (Fund. de Investigaciones Marxistas-España)
Raúl Zibecchi (Revista Brecha, Uruguay)
† Georges Labica (Universidad Paris X-Francia)
Tomás Moulian (Univeridad Arcis.Chile)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Julio C. Gambina	Presidente
Daniel Campione	
Beatriz Rajland	
Oscar Yankelevich	
Santiago Lizuain	Secretario Ejecutivo







SUMARIO

Editorial

Crisis capitalista y desafíos para el pensamiento crítico	7
---	---

Dossier: EEUU y la militarización de América Latina

La administración Obama y el “gobierno permanente” de Estados Unidos <i>Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic</i>	13
Soberanía y democracia. A propósito de las bases militares norteamericanas <i>Alfonso Conde Cotes</i>	21
Las interrogantes sobre el golpe de Estado en Honduras. ¿Quién maneja la política exterior de EEUU? <i>Marco A. Gandásegui, hijo</i>	35
Honduras: Golpe de Estado y alteración de los escaques del ajedrez político en América latina <i>Robinson Salazar Pérez</i>	47

Investigaciones de la FISyP

Notas sobre la post-convertibilidad. Los límites a las mejoras en las condiciones de vida de los sectores populares <i>Juan Fal, Germán Pinazo y Juan F. Lizuáin</i>	65
Universidad y mercantilización. Una mirada a las condiciones de producción de conocimiento en América latina <i>Adrián Pulleiro</i>	89
Aproximaciones al cooperativismo de trabajo del siglo XXI. Límites y desafíos <i>Vanesa Ciolli y Gabriela Roffinelli</i>	115
Estado y política en Argentina. Algunas notas teórico-políticas a propósito de los hechos del 2001 <i>Marcelo Barrera, Gonzalo Cáceres y Leandro Gielis</i>	139

Colaboraciones

La cincuentenaria proyección externa de la Revolución Cubana: <i>nuestroamericanismo</i> vs. panamericanismo <i>Luis Suárez Salazar</i>	155
---	-----







EDITORIAL

CRISIS CAPITALISTA Y DESAFÍOS PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

El dato relevante de la contemporaneidad es la *crisis de la economía mundial*, con sus manifestaciones en las finanzas y en la producción, convergente con las existentes en materia alimentaria, energética y ambiental, las que están subordinadas al modelo productivo imperante, sustentado en la acumulación de riquezas, ganancias y poder. Nos encontramos por tanto, ante un proceso integral que afecta y pone en discusión el orden global capitalista y su manifestación singular en los países de América Latina y el Caribe.

Es una crisis del orden civilizatorio contemporáneo.

La crisis capitalista es un desafío para las ciencias sociales y el pensamiento crítico, en la integralidad definida en sus partes y en las consecuencias sociales que genera, especialmente en materia de desempleo, precariedad y empobrecimiento creciente de grandes franjas de la población.

El tema de la pobreza ha vuelto a instalarse con centralidad, incluso es parte de la campaña de los organismos internacionales y es también la expresión del temor a la agudización de los conflictos sociales. Al mismo tiempo, se subsidia con millonarios recursos el salvataje de corporaciones transnacionales para asegurar la continuidad del régimen del capital.

En EEUU se publicitaron los datos de crecimiento de su economía para el tercer trimestre del año en curso, dejando atrás un año de recesión. La información fue comentada con mesura por Barack Obama, pues en simultáneo se espera





que el dato del desempleo supere próximamente el 10% de la población económicamente activa de EEUU, donde el 30% de la población es pobre. Este país, potencia mundial y ejemplo de capitalismo, nos devuelve el cuadro de la pobreza y el desempleo, al mismo tiempo que empiezan a conocerse los datos del crecimiento económico y la recuperación de las ganancias en los balances de las empresas, lo que también se expresa en las bolsas de valores, especialmente en Wall Street. La superación de datos recesivos es simultánea con referencia al empeoramiento de las condiciones sociales de la mayoría de la población.

Por su parte, en Argentina se establecen subsidios a menores empobrecidos y se reinstala la discusión sobre la pobreza, la que se acrecentó en las últimas décadas, producto de la reestructuración regresiva del capitalismo local. Se generalizó la denominación de nuevos pobres, de pobres por ingresos, como categoría diferencial respecto de los pobres estructurales. La pobreza por ingresos se extendió como expresión de la pauperización de una parte importante de la población. Eran momentos en que la estabilidad era transformada en valor supremo de la sociedad, mientras familias enteras pasaban a la categoría de pobres, de la mano del desempleo. Resultaba insuficiente tener empleo para salir de pobre.

Más allá de los datos del INDEC sobre la pobreza, en cada una de las décadas pasadas creció el piso de la pobreza en el país. El gran crecimiento de la economía entre 2003 y 2008 no alcanzó para sacar de la pobreza al 30% de la población argentina. En cambio se profundizó la desigualdad.

Claro que es un asunto convergente con lo que ocurre a escala mundial, pues el capitalismo construido en los últimos 40 años se caracteriza por una mayor asimetría entre quienes concentran riqueza y poder y una abrumadora mayoría que sufre el deterioro de su calidad de vida, en aras de relanzar el régimen del capital, en crisis explícita durante los dos últimos años. El poder económico se preocupa y opina de la pobreza, sí, pero cuestionando y criminalizando la organización de los pobres, los desempleados y los propios trabajadores, acusándolos de entorpecer la voluntad inversora de esos inversores empresarios. Todo por reclamar ingresos, salarios, en definitiva, la capacidad de hacer realidad los derechos a la salud, la educación, el trabajo y otros que, de tan ausentes, se eliminan ya de la agenda de derechos conquistados y consagrados constitucionalmente. Es curioso cómo algunos sectores del poder económico y político se rasgan las vestiduras con el tema de la pobreza, pero alarmados por la organicidad popular condenan la lucha de los pobres por sus reivindicaciones y derechos. Se mantiene y profundiza así la cultura de las clases dominantes para victimizar la protesta social y la organización popular.





El problema de la pobreza es resultado del modelo de producción, distribución y consumo que las clases dominantes pretenden perpetuar, por eso agreden a los trabajadores y a los movimientos sindicales y sociales en todo el mundo. Esto se está manifestando en estos días en la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales en el país vasco, en la “extinción” de la empresa estatal de electricidad en México (afectando el accionar del sindicato mexicano de electricistas, animador de la resistencia a la privatización del petróleo azteca), o en Argentina contra la nueva institucionalidad sindical y la organicidad del movimiento popular.

Por ello, el desafío para el pensamiento crítico se concentra en el estudio de las causas de la crisis, las formas que asume la explotación de la fuerza de trabajo, las modificaciones en las relaciones sociales de producción, de subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital, y en las posibilidades de superar la crisis en beneficio de las clases subalternas. ¿Qué orden se necesita? ¿Qué sujetos lo piensan, construyen y luchan? ¿Con qué programa y rumbo? Se trata de pensar en ciencias sociales que puedan hacer síntesis de prácticas transformadoras en curso y que coadyuven a sugerir hipótesis de anticipación del orden social.

Pero junto con la crisis, el fenómeno del *cambio político*, especialmente en la región latinoamericana, constituye parte de la realidad en nuestro territorio y con pretensión de alcance global. Aludimos a procesos políticos críticos del orden y discurso hegemónico en los 80 y sobre todo en los 90, de cuño neoliberal, sustentador del ajuste estructural, con secuelas de asimetría social por ingresos y riqueza, generando una profunda concentración y extranjerización (transnacionalización) de capitales de la mano de la liberalización económica generalizada. La primera década del Siglo XXI hizo evidente el estado de movilización social y organización popular para discutir el orden existente. El FSM convocado desde comienzos del 2001 en Porto Alegre, un conjunto de campañas contra el ALCA, el pago de la deuda o la militarización, los levantamientos populares contra gobiernos desprestigiados, o enfrentando golpes de Estado, son parte de la acumulación de poder popular por el cambio político en estos años.

Ambas cuestiones yuxtapuestas, *la crisis de la economía mundial y el cambio político*, constituyen la base del desafío para el pensamiento crítico regional. La crisis debe ser considerada una oportunidad para potenciar las demandas y la experiencia de las clases subalternas por transformar la realidad. Es cierto que es también una oportunidad para relanzar el programa de las clases dominantes, lo que queda claro con las recomendaciones del G20 sobre la liberalización de la economía mundial, el aliento a las negociaciones por la ronda de Doha, y el





fortalecimiento del FMI y el Banco Mundial como eje de sustentación del orden financiero y económico mundial. Las experiencias nacionales de cambio político y la incipiente práctica de integración alternativa, especialmente el ALBA, dan cuenta de una base material de acción colectiva con sentido transformador que anima a la búsqueda de síntesis teóricas.

Pensar América Latina requiere profundizar en el análisis de la crisis capitalista y en el carácter capitalista en la crisis del desarrollo de la región, con sus secuelas graves en materia social: desempleo, precariedad, superexplotación, marginación y empobrecimiento de vastos sectores sociales. Pensar la región supone discutir la inserción en el mundo y su articulación integrada en la división internacional del trabajo. Supone interrogarse sobre las posibilidades de resolución nacional o integrada de la crisis; pone en discusión las estrategias sobre las alianzas de gobiernos que alientan la contestación al modelo hegemónico de los 80 y los 90, pero que al mismo tiempo protagonizan estrategias y discusiones con los responsables de la crisis.

¿Qué de nuevo pueden aportar las ciencias sociales al debate sobre la integración y el cambio político nacional? ¿Qué se puede recoger sobre el debate en torno a la identidad de la región? ¿Cuánto de singular y de general existe en la configuración de la identidad en la región? ¿Qué aportes pueden realizarse para sistematizar y generalizar las prácticas sociales de desmercantilización que hoy se ensayan en el ALBA o en las reformadas constituciones, especialmente en Bolivia y Ecuador con la categoría del “buen vivir”?

Interrogantes desafiantes sin duda, no solo para el pensamiento crítico. Hacen al debate sobre el presente y el futuro cercano de la región. Está claro que la discusión hoy pasa más por la crisis capitalista que por la derrota de los 70; sin embargo, el clima de época puede retrotraerse si no se avanza en la profundización del cambio político. El imaginario conservador imperante a finales del Siglo XX puede retornar hegemónico de la mano de la coerción y la manipulación del consenso, de que da cuenta tanto la militarización creciente en la región y el mundo, como la realidad del golpismo con pretensión restauradora. Colombia y Honduras remiten a la posibilidad de un retroceso sobre el camino de cambio en construcción en parte de la región durante esta primera década del Siglo XXI.

Si a comienzos de 2001 emergía la potencia del mensaje por otro mundo posible, al cierre de ese año se instaló la concepción tributaria de una teorización por la seguridad. Del optimismo por el cambio social se transitó al escenario de la guerra y la militarización de la sociedad mundial, contribuyendo a exacerbar las asimetrías de ingreso y riqueza entre países y personas. Azorados leemos





EDITORIAL

el mensaje de la FAO indica que en la actualidad hay más de mil millones de personas con problemas de alimentación. No es solo una cuestión intelectual, sino un imperativo del orden social. Es una cuestión coherente con el reclamado compromiso de los intelectuales con la sociedad de los de abajo, con los pueblos y su demanda por la emancipación. Pero también señalemos que si entre 1989-91 se desmoronaba un imaginario de cambio social, en forma convergente se inauguraba un ciclo de luchas populares que habilitaron la expectativa presente en los procesos de cambio que transita la experiencia de los pueblos de nuestra América.

Octubre de 2009







DOSSIER: EEUU Y LA MILITARIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

LA ADMINISTRACIÓN OBAMA Y EL “GOBIERNO PERMANENTE” DE ESTADOS UNIDOS*

Atilio A. Boron** y Andrea Vlahusic***

El prólogo escrito para la edición argentina de este libro tiene por fecha 12 de junio de 2009. Transcurridas apenas dos semanas, un nuevo suceso, el golpe en Honduras, vino a ratificar nuestro pesimismo acerca de los cambios que se podían esperar de la nueva administración estadounidense. Y, poco después, el mundo fue informado de otra belicosa y provocadora decisión tomada por la Casa Blanca: instalar siete nuevas bases militares en Colombia, acción que representa un atropello a la soberanía de ese país y una grave amenaza para toda la región, sólo posible gracias a la incondicional sumisión del gobierno de Álvaro Uribe a los dictados del imperio. A causa del vértigo de los acontecimientos nuestro prólogo envejeció prematuramente y debe ser actualizado.

* Este trabajo es el Posfacio de nuestro libro: *El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos humanos por los Estados Unidos* (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009). Agradecemos a Ediciones Luxemburg por habernos concedido la autorización para publicar este fragmento del mencionado libro.

** Sociólogo y politólogo. Investigador Superior del CONICET y profesor titular regular de Teoría Política y Social I y II en la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan: *Socialismo Siglo XXI* (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2008); *Crisis civilizatoria y agonía del capitalismo* (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009) y *El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos humanos por Estados Unidos* (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009).

*** Abogada, especialista en cuestiones de derecho Internacional público y derechos humanos. Se desempeña como profesora de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es co-autora del *El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos humanos por Estados Unidos* (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009).



En términos teóricos no tenemos nada que agregar: la tesis fundamental de nuestro trabajo es que detrás de los transitorios ocupantes de la Casa Blanca existe un “gobierno permanente” consolidado a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que, con el transcurso del tiempo, ha adquirido una casi total independencia respecto de los avatares y fluctuaciones que caracterizan la escena electoral. Es ese gobierno el que, desde las sombras y a través de una densa cadena de mediaciones, y echando mano a numerosos agentes y estructuras organizacionales, establece las principales directivas y orientaciones de política a ser implementadas tanto dentro como fuera de Estados Unidos; en la república y a la vez en el imperio. Por eso los datos idiosincrásicos relativos al ocupante de la Casa Blanca tienen escasa importancia. En todo caso podemos decir que, cuando este amaga con distanciarse de las políticas establecidas por los poderes fácticos permanentes, se ingresa en una zona de inestabilidad y de conflictos que puede, en algunos casos, culminar con el asesinato del presidente (tal como ocurriera con John F. Kennedy), o con la completa neutralización de la iniciativa considerada como inaceptable, y su responsable condenado a una especie de limbo político, algo que Hillary Clinton sufrió en carne propia cuando naufragaron sus intentos de reformar el sistema de salud durante los primeros meses de la administración Clinton. No muy distinta fue la suerte corrida por James Carter, aplastado por la reacción neoconservadora encolumnada detrás de Ronald Reagan, furiosamente opuesta a su política de derechos humanos y la devolución del Canal de Panamá¹.

Dadas estas condiciones, al cabo de poco más de doscientos días de gobierno, un hombre visceralmente inclinado al equilibrio y la moderación y poco amante de adoptar posturas categóricas, ha quedado completamente sometido a los poderes fácticos del imperio. Sobre esto hay un llamativo consenso entre analistas de distinta orientación ideológica: Noam Chomsky, por ejemplo, ante una pregunta acerca de la política exterior de George W. Bush y Barack Obama, manifestó que la actual “es una continuación de las mismas políticas [de su predecesor]. De hecho, volviendo a Condoleezza Rice, raramente estoy de acuerdo con ella pero en algunas cosas sí lo estoy. Recientemente ella escribió un artículo en el cual predijo que la política exterior de la administración de Obama sería como

1 En el caso de la política exterior y, especialmente, del golpe de estado en Honduras, esta disonancia entre las políticas impulsadas por el “gobierno permanente” y aquellas promovidas por la Casa Blanca se puso claramente de manifiesto. Ver el artículo de Mark Weisbrot, “¿Quién manda en la política exterior de Obama?”, publicado en ALAI América Latina en Movimiento el 21 de julio de 2009, en <<http://alainet.org/active/31844>>. Este autor señala correctamente las flagrantes contradicciones entre las declaraciones de Obama y las de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre la situación hondureña. A pocos meses de producido el golpe, la línea política adoptada por la Casa Blanca puso en evidencia que la postura que había prevalecido era la de la secretaria de Estado, alineada con el “complejo militar-industrial”, y no la del presidente.





la segunda administración Bush [...] No hay indicación alguna de que Obama va a cambiar estas políticas. De hecho en algunas instancias él ha tomado una posición más agresiva, como con Afganistán y Pakistán². Otros analistas hablan inclusive de un "tercer turno" de Bush o de las grandes similitudes que existen entre los dos mandatarios³.

Esto significa, en pocas palabras, que Obama tiene un escaso control sobre las distintas agencias que componen el aparato estatal norteamericano. El presidente Rafael Correa lo dejó claramente establecido cuando afirmó: "Yo confío en Obama, creo [que] es un buen hombre, pero creo que no controla los Estados Unidos, ni [creo] que conozca lo que haga el Pentágono o la CIA"⁴. Agregáramos nosotros: tampoco parece controlar lo que hace el Departamento de Estado ni las políticas que impulsan su embajador y el personal militar destacados en Tegucigalpa.

Admitamos que el golpe en Honduras no fue un rayo en un día sereno. Cuando el 24 de abril de 2008 Washington anunció oficialmente la reactivación de la Cuarta Flota –una decisión insólita e inamistosa que no fue revisada ni revertida por Obama– dio el primer paso en la contraofensiva del imperio encaminada a "normalizar" la situación sociopolítica de sus "revoltosas provincias interiores".

La serie de reiteradas victorias electorales de Chávez, Morales y Correa en sucesivos referendos, elecciones constituyentes, plebiscitos ratificatorios y elecciones presidenciales ordinarias amenazaba con modificar irreversiblemente el panorama regional. Además, la heroica resistencia de Cuba a cincuenta años de bloqueo y agresiones de todo tipo se había convertido en una preocupante fuente de inspiración para los pueblos latinoamericanos y caribeños, algo que los administradores imperiales no podían ver sino con muy malos ojos. Contradicciones objetivas impedían afianzar los lazos con los países del extremo sur del continente que, si bien no compartían el celo revolucionario de Venezuela, Bolivia y Ecuador, para ni hablar de Cuba, demostraron no estar dispuestos a seguir siendo dóciles peones de los designios imperiales. La derrota del ALCA en Mar del Plata fue un revés traumático que precipitó la búsqueda de correctivos radicales. Para colmo, en fechas recientes, el cuadro

2 Ver la entrevista de Miguel Vera a Noam Chomsky titulada "La política exterior de Obama será como la segunda administración Bush", publicada en *Rebelión* el 11 de agosto de 2009.

3 Ver el artículo de Michael Barone, "Obama's foreign policy is very much a continuation of the Bush policies", publicado en *US News & World Report* el 8 de abril de 2009. Y, en la misma línea, ver el artículo de James Joyner, "Bush's third term", publicado en *The National Interest on line* el 22 de julio de este mismo año, en <www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=21888>.

4 Entrevista concedida a Radio Marejada, ciudad de Manta. Reproducida en un cable de Telesur del 21 de julio de 2009.





político centroamericano reveló la creciente ascendencia del bolivarianismo en una región cuyos gobiernos tradicionalmente se disputaban entre sí para ver quién se sometía más rápido e incondicionalmente a los mandatos de la Casa Blanca. En los últimos tiempos el panorama había cambiado y el ALBA (y los diversos proyectos de cooperación internacional que sin cesar se originaban en Venezuela) hacía que cuatro de los cinco gobiernos centroamericanos mirasen cada vez con más simpatía las señales emanadas desde La Habana, Caracas, Quito y La Paz: salvo por el caso de Costa Rica, cuyo presidente (dudosamente triunfador en comicios plagados de irregularidades) es un leal vasallo del imperio, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras el clima ideológico se mostraba cada vez más predispuesto a apoyar —si bien con diversos grados de radicalidad— las políticas antiimperialistas promovidas por lo que, en un alarde de moralina barata, los publicistas de la Casa Blanca bautizaron como “el eje del mal”.

La sedición de los militares hondureños, que no es de ninguna manera casual, marca el comienzo de la segunda etapa de esta contraofensiva. Los oficiales de ese país fueron alumnos predilectos de la tenebrosa Escuela de las Américas desde los años setenta, cuando Honduras se convirtió en una impresionante plataforma contrarrevolucionaria de Estados Unidos, desde la cual se desestabilizó al gobierno sandinista en Nicaragua, se apoyó el accionar de los “contra” y se buscó por todos los medios impedir la derrota del ejército salvadoreño a manos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esos mismos militares, teledirigidos desde la base norteamericana de Soto Cano (ex Palmerolas), son los que, en un operativo comando, secuestraron al presidente legítimo de Honduras y, previa escala en esa guarnición militar, lo desterraron del país⁵.

El golpe en esa nación centroamericana pone fin a las ilusiones, acunadas por muchos, que sostenían que el imperialismo había cambiado y que la rapiña desenfrenada de los recursos naturales y los métodos brutales de dominación eran cosa del pasado. Quienes así piensan se olvidan del activo papel que Washington jugó en el golpe militar venezolano de abril de 2002, y del no menos protagónico papel desempeñado en el *lock out* petrolero de finales de ese mismo año; o subestiman (o ignoran) lo que están haciendo diversas agencias del gobierno norteamericano junto con ONG de ese país supuestamente independientes para desestabilizar la Revolución Bolivariana o el gobierno de Evo Morales y provocar la secesión de la Media Luna Oriental; o desconocen el modo en que se está fomentando el renacimiento del separatismo del

⁵ Pocos días atrás, Zelaya le confesó al presidente Lula que, cuando lo sacaron de su residencia, lo transportaron primero a la base norteamericana y recién después lo trasladaron a Costa Rica. Ver el artículo de Eleonora Gosman, “Luego del golpe, Zelaya fue llevado a la base estadounidense en Honduras”, publicado en *Clarín* el 16 de agosto de 2009.





Guayas, en Ecuador, para ni hablar de la incesante campaña mundial de mentiras y calumnias lanzada en contra de Hugo Chávez Frías.

Transcurridos casi dos meses, la complicidad del gobierno norteamericano con el golpe es tan irrefutable como censurable: duplicidad discursiva; condescendencia con el régimen golpista y sus personeros; tibias condenas más retóricas que reales; mantenimiento del embajador en Tegucigalpa; ausencia de cualquier medida efectiva de presión sobre los usurpadores; revelación de las vinculaciones entre el *lobby* golpista en Washington y abogados estrechamente vinculados con Bill Clinton; marginación de la OEA y su reemplazo por su peón costarricense, Oscar Arias, para tratar de llegar a un acuerdo entre las partes tratando por igual al legítimo presidente de Honduras y al ilegítimo usurpador; y silencio total ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos que viene cometiendo la pandilla que tomó el poder por asalto desde su instalación. Washington ha exhibido una obscena pasividad e indiferencia ante la censura de prensa y la persecución, silenciamiento y clausura de cualquier medio de comunicación que no se pliegue incondicionalmente a los comunicados oficiales. Ya hay sangre derramada, y mucha; y hay desaparecidos, torturados, encarcelados sin proceso, represión indiscriminada de la policía, exiliados, familias amenazadas. Y Estados Unidos sigue sin condenar lo ocurrido. Como dice el refrán, "quien calla otorga".

Obama pretendió contraatacar a sus críticos señalando lo que a su juicio era una contradicción, cuando el 7 de agosto declaró: "No puedo apretar un botón y reinstalar al señor Zelaya", al paso que subrayaba que era una ironía que "algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América Latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente"⁶. Lo que Obama no dijo es que Estados Unidos ha estado interviniendo desde hace más de un siglo en Honduras, que desde los años ochenta su presencia militar, política y económica en ese país centroamericano tiene una gravitación sencillamente abrumadora, y que la misma Constitución de 1982 que Zelaya quiere reformar fue poco menos que dictada por John Negroponte cuando era embajador de Estados Unidos en Honduras. Añádase a lo anterior que: el golpe fue posible porque fue previamente negociado y acordado día a día con las autoridades civiles y militares estadounidenses radicadas en ese país; y que el respaldo de su administración al régimen *de facto* —o su indiferencia ante las violaciones de la institucionalidad vigente en Honduras y los crímenes perpetrados por sus actuales gobernantes— es lo único que sostiene a los golpistas en el poder, en medio de un repudio universal. Por eso le asiste toda la razón al

6 Ver el cable de la Agencia Notimex, "No puedo apretar un botón y reinstalar a Zelaya", del 7 de agosto de 2009, en <http://noticias.aol.com/articulos/_a/no-puedo-apretar-un-boton-y-reinstalar-a/n20090807165209990008>.





presidente Hugo Chávez Frías cuando en el *Aló Presidente* del 16 de agosto sostuvo que “Obama anda perdido en la nebulosa. Creo que está entrando en un laberinto terrible. Obama no entiende. Él tiene que estudiar un poco más, es un hombre joven, lleno de intenciones buenas. Obama, no le estamos pidiendo que intervenga en Honduras. Todo lo contrario. Le estamos pidiendo que retire el imperio su mano de Honduras y que retire el imperio sus garras de América Latina”.

¿Qué podría hacer Obama? Muchas cosas: en primer lugar, dejar de lavarse las manos y posar de “neutral” en un conflicto entre legitimidad y violencia que lesiona gravemente su credibilidad internacional. Segundo: retirar de inmediato su embajador de Tegucigalpa. Tercero, congelar las cuentas bancarias de los nuevos gobernantes de Honduras en Estados Unidos y establecer un embargo sobre sus propiedades, concentradas fuertemente en Miami. Cuarto, amenazar con bloquear las remesas de los inmigrantes hondureños a su país de origen. Finalmente, comunicar a la opinión pública de Honduras que se lanzará una advertencia a las empresas estadounidenses radicadas en ese país para que preparen un plan de contingencia a fin de abandonar Honduras si el legítimo presidente del país no reasume sus funciones en un plazo perentorio. Con una sola de estas medidas los gorilas hondureños caerían en cuestión de horas. Se requiere, eso sí, voluntad para frenar el golpe y, por lo visto, hasta ahora Obama no la ha tenido.

El remate de esta contraofensiva reaccionaria, acentuada bajo la administración Obama, ha sido el anuncio de la instalación de siete nuevas bases militares en Colombia. No una sino siete, en reemplazo de la base de Manta recuperada por el patriótico gobierno de Rafael Correa.

La justificación que Uribe esgrime en apoyo de su decisión de conceder a las fuerzas armadas de Estados Unidos esas bases militares es que así se amplía la cooperación con el país del Norte para librar un eficaz combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Excusa insostenible porque, tal como hemos demostrado en este libro, un informe de la agencia de las Naciones Unidas especializada en la lucha contra la droga y el crimen, la UNODC, sostiene que los dos países donde más crecieron la producción y exportación de amapola y coca son Afganistán y Colombia, ambos sometidos a una suerte de ocupación militar norteamericana. Y si algo evidencia la historia del último medio siglo de Colombia es la total incapacidad de sus sucesivos gobiernos para resolver el desafío planteado por las FARC por la vía militar, como oportunamente lo recordara Luiz Inácio Lula da Silva en la reunión de la UNASUR en Bariloche⁷.

⁷ Dijo el presidente brasileño que “el compañero Uribe intenta mostrar que las bases estadounidenses ya existen en Colombia desde 1952; yo le quiero decir de manera muy cariñosa, que si todavía no solucionaron





Es evidente que con la entrega de estas bases Venezuela queda completamente rodeada, sometida al acoso permanente de las tropas del imperio estacionadas en Colombia, amén del ejército colombiano y los "paramilitares"⁸. A ello habría que agregar el apoyo que aportan en esta ofensiva las bases norteamericanas localizadas en Aruba y Curaçao, ambas a pocos kilómetros de la costa venezolana; la de Guantánamo; la de Palmerolas, en Honduras; la que está ubicada en el aeropuerto de Comalapa, en El Salvador; y la Cuarta Flota, que dispone de recursos suficientes para patrullar efectivamente todo el litoral venezolano. Pero no sólo Chávez está amenazado; también Correa y Morales quedan en la mira del imperio si se tiene en cuenta que Alan García, en Perú, arde en deseos de ofrecer "una prueba de amor" al ocupante de la Casa Blanca otorgándole facilidades para movilizar sus tropas desde territorio peruano.

Pero el panorama es mucho más amenazante. En Paraguay, Estados Unidos se aseguró el control de la gigantesca base de Mariscal Estigarribia, situada a menos de cien kilómetros de la frontera con Bolivia, que cuenta con una de las pistas de aviación más extensas y resistentes de Sudamérica, apta para recibir los gigantes aviones de transporte de tanques, aviones y armamento pesado de todo tipo que utiliza el Pentágono. En ese país también dispone de una enorme base en Pedro Juan Caballero, ¡localizada a 200 metros de la frontera con Brasil!, pero, según Washington, pertenece a la DEA y tiene como finalidad luchar contra el narcotráfico. Hay que recordar que en 2005 la Casa Blanca se aseguró la total inmunidad para las tropas estadounidenses estacionadas en ese país: en esa concesión legal, garantizada por el Congreso de Paraguay, cualquier violación de los derechos humanos o de la legalidad vigente estaría únicamente sujeta a la decisión que pudiera adoptar Estados Unidos y no las autoridades paraguayas. Si bien esa norma no fue prorrogada a su vencimiento, el 31 de diciembre de 2006, el cambio en el *modus operandi* de las tropas estadounidenses convirtió en innecesaria la concesión de un nuevo permiso dado que desde entonces todas

el problema (la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico) debemos repensar qué otras cosas podemos hacer en UNASUR para solucionar el problema". Ver el artículo de Daniel Míguez, "Una UNASUR con bases firmes", en *Página/12*, 29 de agosto de 2009. Asimismo, ver la brillante conversación imaginaria entre el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el presidente de Estados Unidos: "Dime Barack –pregunta Pérez Esquivel–, ¿para qué quiere EE.UU. poner tres bases militares más en Colombia? No me digas que es para luchar contra el narcotráfico; eso no lo cree tú, ni nadie". Ver Adolfo Pérez Esquivel, "Conversación virtual con Mr. Obama", publicada en *ALAI América Latina en Movimiento* el 7 de agosto de 2009.

8 Ver el artículo de Luis Britto García, "Enemigo a la puerta", del 16 de agosto de 2009, en <www.luis-brittogarcia.blogspot.com>. Ver también el artículo de Ana Esther Ceceña, "Honduras y la ocupación del continente", publicado en *ALAI América Latina en Movimiento* el 17 de agosto de 2009, en <www.alainet.org/active/32415>.





ellas ingresan al país como parte del personal diplomático de la embajada de Estados Unidos, con lo cual gozan de la misma inmunidad que en el pasado.

La amenaza que representa esta proyección sin precedentes del poder militar norteamericano en Sudamérica afecta además a Brasil, consciente de las ambiciones que Estados Unidos guarda con relación a la Amazonía, región que “puertas adentro” los estrategas imperiales consideran un territorio vacío, de libre acceso, y que será ocupado por quien, tecnológicamente, tenga la capacidad para hacerlo. No está de más recordar que Sudamérica cuenta con aproximadamente la mitad del agua dulce del planeta y con la gran reserva de oxígeno de la humanidad; contiene inestimables depósitos de petróleo, gas y minerales estratégicos; y aproximadamente la mitad de la biodiversidad de la tierra habita su territorio. Este rosario de bases que se extiende por su dilatada geografía, unido al control de las aguas que garantiza la Cuarta Flota, hace que esta parte del globo se encuentre militarmente encerrada en un círculo cada vez más amenazante y cuya última preocupación consiste en combatir al narcotráfico. El objetivo esencial es el control territorial y político, disponiendo de fuerzas preparadas para acudir en ayuda de algún aliado en apuros o para desestabilizar y tumbar gobiernos considerados como enemigos del imperio. Con base en las notables investigaciones que sobre este tema realizara Chalmers Johnson, el analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme concluía recientemente que, sumando las siete nuevas bases militares establecidas en Colombia, Estados Unidos elevó su número total a 872, “lo cual no tiene equivalente con ninguna potencia pasada y presente: ¡EUA invadió literalmente al mundo!”⁹. Estas bases, sin considerar el personal que vaya a destinarse a las siete de Colombia, comprenden una fuerza de 190 mil efectivos a un costo anual de 250 mil millones de dólares. ¿Alguien puede creer que tamaño esfuerzo tenga como único objetivo la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo? Su objetivo, como reiteradamente lo recuerda Noam Chomsky, es garantizar la viabilidad de un plan de dominación mundial, y América Latina y el Caribe constituyen la presa más codiciada, inmediata y urgente de esa política de anexión imperialista. Con sus actos y omisiones, Obama confirma que no es sino una pequeña rueda en el criminal engranaje del imperio y que, por más que emplee una retórica diferente a la de su predecesor, sus actos no hacen sino confirmar el irremplazable rol conservador que Estados Unidos y su presidencia juegan en el mantenimiento de la estructura imperialista a escala mundial.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2009

⁹ Ver su artículo “¿Más siete de Colombia? Las 865 bases militares de EE.UU. en 40 países”, publicado en *Rebelión* el 10 de agosto de 2009.





SOBERANÍA Y DEMOCRACIA

A PROPÓSITO DE LAS BASES MILITARES
NORTEAMERICANAS

*Alfonso Conde Cotes**

La soberanía del pueblo, sinónimo de democracia, sólo se ejerce en una sociedad de iguales en la cual las libertades y los derechos ciudadanos sean prioridad indiscutida.

No es sociedad de iguales aquella en la cual cerca del 18% de los ciudadanos sobrevive con hambre. No priman los derechos y las libertades donde cerca de la mitad de la población de 44 millones no tiene acceso a una vida digna, donde dos millones setecientos mil no tienen ocupación y ocho y medio millones son subempleados. No es sociedad de iguales aquella con un índice Gini de inequidad en la distribución de los ingresos cercano a 0.6, el segundo más alto de América.

En esta Colombia, el derecho al trabajo se dosifica por etapas, cuando se ejerce, para devengar un salario que no suple las necesidades humanas, ese que quieren reducir aún más los empresarios y el gobierno (el 60% de los hogares recibe, entre todos sus integrantes, menos de dos salarios mínimos). Y si las circunstancias obligan al ciudadano a rebelarse y protestar contra ese estado de degradación social, se le considera “terrorista” y se le persigue como a delincuente de la peor ralea o se le desaparece y asesina como a tantos sindicalistas y opositores.

* Profesor, Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.





En esta Colombia, “*Estado de Opinión* (la de él)”, según dice quién aspira a perpetuarse como el Virrey de nuevo cuño, se tuercen las normas para favorecer con descaro al sector en el poder; se paga el voto del Congreso con Notarías u otras monedas de cambio y el de los pobladores pobres con limosnas de esas llamadas “familias en acción”. Los inefables *Tom y Jerry*, “grandes empresarios” bien emparentados, no cesan de beneficiarse de las ventajas del poder y hasta se quiere cambiar el censo electoral para facilitar el referendo reeleccionista aprobado por el Congreso de manera irregular y tramposa.

Este país lleno de barbarie por dentro, rinde tributo (y no es figura) al sector financiero mundial y al gobierno más poderoso de la tierra, su vocero. En este país, hablar de soberanía y democracia parece un mal chiste. Aquí, en donde el gobierno títere se atreve a invadir, de manera “preventiva” como lo enseñó Bush, el territorio de nuestros vecinos en desarrollo de la política denominada “seguridad democrática”, nos aprestamos ahora a entregar siete o más bases militares a los Estados Unidos.

Claro que nos dicen que no hay cesión de soberanía al norteamericano por cuanto las bases seguirán siendo colombianas y no se instalarán bases extranjeras en nuestro territorio. También nos dicen que en Irak los norteamericanos no mantienen “bases militares”, sólo 140.000 soldados; en Colombia tampoco instalarán sus bases, sólo convertirán en suyas las nuestras. En Vietnam los norteamericanos mantenían, según decían, sólo unos pocos cientos de asesores militares, pero tuvieron 58.000 bajas entre sus soldados; en Colombia no sobrepasarán, nos dicen, los 800. En Irak existían arsenales de armas de destrucción masiva, decía Bush, que nunca se encontraron; en Colombia no hay conflicto armado, dice Uribe.

¿Será que algún día nos indigeste la colección de mentiras?

BASES MILITARES NORTEAMERICANAS EN EL MUNDO

Antes de centrar la atención en el caso colombiano, es de interés discutir el tema en general de las bases militares norteamericanas en el mundo.

El mapa de wikipedia¹ muestra una imagen de la presencia militar norteamericana en los países del globo en 2007. Tal distribución militar indica un cubrimiento importante de países en todos los continentes, con la observación notoria de la franja Rusia – China – India que se escapa a la presencia armada de los Estados

¹ Ver http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_military_bases; <http://www.militarybudget.info/overseas.html>.





■ Países con bases de EEUU

Unidos. En Sur América cuentan con presencia en Colombia, Paraguay (aprobada en 2005 en Mariscal Estigarribia y rechazada después por el gobierno de Lugo), Ecuador (que desaparece este año) y Perú. En África, para esa fecha, la presencia no era muy significativa.

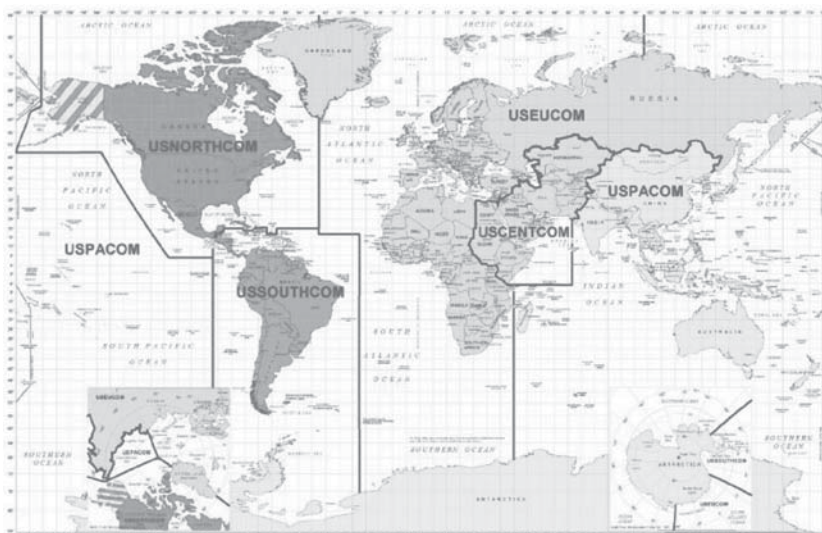
La tabla² del Departamento de Defensa de los EEUU indica que en 2007 los norteamericanos contaban con un total de 823 bases militares en países del mundo distintos al suyo, y en los llamados “territorios” contaban con otras 86 que, junto con las presentes en los propios Estados Unidos, sumaban un total de 5.311 bases reconocidas de todas sus fuerzas armadas. Ningún imperio en la historia universal ha tenido antes tal presencia militar en tantos sitios de la geografía mundial.

LOCATION OF DOD SITES BY SERVICE/AGENCY						
Area	Army	Navy	Air Force	USMC	WHS	Total
United States	1.768	825	1.630	173	6	4.402
Territories	25	45	15	1		86
Overseas	371	154	268	30		823
Total	2.164	1.024	1.913	204	6	5.311

² Department of Defense. Base Structure Report. Fiscal Year 2007 Baseline. A Summary of DoD's Real Property Inventory.



The World with Commanders Areas of Responsibility



El mundo se encuentra dividido, para los norteamericanos, en áreas de responsabilidad de comandos³ UCC (*Unified Combatant Command*), algunos de creación relativamente reciente como el USAFRICOM (Octubre 1 de 2008) lo cual es relevante para la discusión posterior. Los comandos son responsables de planear, dirigir y ejecutar operaciones militares de USA en las áreas respectivas (ver mapa) y coordinan las distintas fuerzas militares norteamericanas (*United States Army, Navy, Air Force, Marine Corps, Coast Guard*), y otras agencias federales).

Además de las bases operativas principales, como las bases aéreas Kadena en Japón y Ramstein en Alemania, existen otras clases definidas por el Departamento de Defensa como *Forward Operating Sites* –FOS– (el puerto Sembawang en Singapur y la base aérea Soto Cano en Honduras) y *Cooperative Security Locations* –CSL–⁴

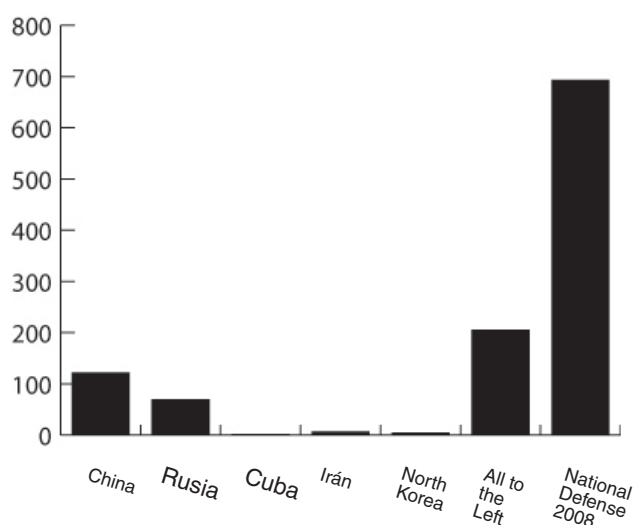
3 US Department of Defense, <http://www.defenselink.mil/news/BriefingSlide.aspx?BriefingSlideID=136>.

4 “According to DoD, Forward Operating Sites (FOS) will be expandable “warm facilities” maintained with a limited U.S. military support presence and possibly prepositioned equipment. FOSs will support rotational rather than permanently stationed forces and be a focus for bilateral and regional training. Examples include: the Sembawang port facility in Singapore and Soto Cano Air Base in Honduras. Cooperative Security Locations (CSL) will be facilities with little or no permanent U.S. presence. Instead they will be maintained with periodic service, contractor, or host-nation support. CSLs will provide contingency access and be a focal point for security cooperation activities. A current example of a CSL is in Dakar, Senegal, where the Air Force has negotiated contingency landing, logistics, and fuel contracting arrangements, and which served as a staging area for the 2003 peace support operation in Liberia.” Commission on Review

(Dakar, Senegal). La política actual del Departamento de Defensa –DoD– incluye la expansión de las últimas (FOS, CSL) y la reducción de las bases principales⁵; “ello añade flexibilidad operacional, preserva la presencia en el extranjero y sirve para fortalecer las relaciones de alianza”⁶. Sigue diciendo el documento citado: “[...] las bases que ahora seleccionemos no pueden estar orientadas a tratar sólo con amenazas actuales. Deben tener la capacidad de tratar con amenazas que surgirán en próximas décadas [...]”.

El informe de la referencia, escrito en 2005, plantea que “un objetivo central de una estrategia de reposicionamiento de bases es garantizar la disponibilidad de la potencia requerida de combate en el punto donde se necesita”. En el documento se indica la ausencia de tal movilidad y del presupuesto requerido para subsanar el problema.

El asunto del presupuesto va en camino de corrección: para el ejercicio de su función, el presupuesto del Departamento de Defensa norteamericano (DoD)



of Overseas Military Facility Structure of the United States. May 9, 2005. <http://www.fas.org/irp/agency/dod/obc.pdf>

5 Entre 1947 y 1990 se pidió y logró el retiro de bases de Francia, Yugoslavia, Irán, Etiopía, Libia, Sudán, Arabia Saudita, Túnez, Argelia, Vietnam, Indonesia, Perú, México y Venezuela; en los 90 y después, el pentágono fue retirado de Filipinas, Panamá, Puerto Rico, Uzbekistán y Ecuador.

6 Commission on Review of Overseas Military Facility Structure of the United States. May 9, 2005. <http://www.fas.org/irp/agency/dod/obc.pdf> (traducción libre).



es hoy el mayor de la historia y muy superior al de China, Rusia, Cuba, Irán y Corea del Norte reunidos⁷ (ver gráfica).

El mejoramiento de la movilidad se relaciona con la creación de nuevas UCC y las nuevas bases tipo FOS y CSL.

Cubrimiento militar global, flexibilidad operacional, atención a amenazas potenciales, movilidad y potencia donde se requiere, son características de la estructura de las bases militares norteamericanas.

¿PARA QUÉ LAS BASES NORTEAMERICANAS?

Dice el reporte de la Comisión de Revisión de la Estructura de Bases Militares norteamericanas en el extranjero: “Una estructura de bases es más que un asunto militar. Es un arreglo político de primer orden que tiene consecuencias bilaterales, internacionales, culturales y económicas”⁸. Es un asunto de dominación.

Como dice el profesor Jules Dufur⁹: los elementos principales de la estrategia norteamericana de dominación mundial se centran en el control de la economía mundial y sus mercados financieros, y la absorción de todos los recursos naturales (recursos primarios y fuentes no renovables de energía). Son asuntos de seguridad nacional.

El Departamento de Defensa (DoD) norteamericano ha definido sus objetivos de seguridad para los Estados Unidos¹⁰:

- defensa de la patria;
- ganar la guerra larga;
- promoción de la seguridad;
- disuasión de conflictos;
- ganar las guerras de la nación (EEUU).

7 Winslow T. Wheeler, Center for Defense Information, Wheeler@CDI.org; <http://www.dtic.mil/ndia/2009test/wheeler.pdf>.

8 Report of the Commission on Review of Overseas Military Facility Structure of the United States, May 2005. <http://www.fas.org/irp/agency/dod/obc.pdf>.

9 Jules Dufour, The Worldwide Network of US Military Bases. The Global Deployment of US Military Personnel. Abril 2007. <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=5564>.

10 National Defense Strategy, June 2008. Traducción libre. <http://www.defenselink.mil/news/2008%20National%20Defense%20Strategy.pdf>.





La defensa de la patria, según el DoD norteamericano, comprende tanto la defensa territorial como el “aseguramiento de sus intereses en el extranjero”¹¹. El acceso a las regiones estratégicamente importantes del mundo es un requisito para cubrir sus necesidades de seguridad nacional.

La guerra larga hace referencia a los “movimientos violentos extremistas” que según ellos “tienen pretensiones transnacionales” y ofrecen una visión “en oposición a la globalización y a la expansión de la libertad que trae consigo”. Contra ellos “el componente militar más importante [...] no es la lucha que nosotros mismos hagamos, sino qué tan bien ayudamos a preparar a nuestros socios para que se defiendan y gobiernen ellos mismos”.

Los conflictos locales se convierten en motivo de inseguridad nacional: “los Estados no fiables (*rogue states*) y los grupos extremistas a menudo intentan explotar la inestabilidad causada por conflictos regionales, y el colapso del Estado o la aparición de zonas sin control puede crear refugios seguros para estos grupos”. Las posibles amenazas surgen ahora de un llamado “arco de inestabilidad”¹² que “se estira desde el hemisferio occidental a través de África y el oriente medio y se extiende hacia Asia”. Dentro de este amplio arco están los países más pobres del mundo, abandonados por la globalización. A ellos se refieren como enemigos potenciales¹³ que brindan apoyo al terrorismo.

Muestran preocupación también por China y Rusia, sobre las cuales dicen que “desarrollaremos estrategias entre agencias y a nivel internacional para ofrecer incentivos para el comportamiento constructivo al tiempo que los disuadimos de acciones desestabilizadoras”.

La disuasión implica “hacer entender a sus dirigentes que el costo de la acción es demasiado alto, o ella es inútil o innecesaria”.

La guerra irregular es otra de las preocupaciones del Departamento de Defensa (DoD) norteamericano, lo mismo que la necesidad de que sus fuerzas armadas

¹¹ Ibid

¹² The National Military Strategy of the United States of America. A Strategy for Today; A Vision for Tomorrow. 2004. <http://www.defenselink.mil/news/Mar2005/d20050318nms.pdf>

¹³ There exists an “arc of instability” stretching from the Western Hemisphere, through Africa and the Middle East and extending to Asia. There are areas in this arc that serve as breeding grounds for threats to our interests. Within these areas rogue states provide sanctuary to terrorists, protecting them from surveillance and attack. Other adversaries take advantage of ungoverned space and under-governed territories from which they prepare plans, train forces and launch attacks. These ungoverned areas often coincide with locations of illicit activities; such coincidence creates opportunities for hostile coalitions of criminal elements and ideological extremists.”





mejoren su competencia en ellas. “Debemos estar preparados para actuar junto con Estados de tendencia semejante a la nuestra contra otros Estados cuando ellos amenazan a sus vecinos, proporcionan refugio a terroristas o persiguen armas desestabilizadoras. [...] Los Estados delincuentes o no fiables seguirán siendo una amenaza para los intereses regionales de los EEUU”:

Las bases son entonces parte de la estrategia de dominación de la economía y los recursos globales para lograr acceso a las regiones estratégicamente importantes. Esa estrategia toma en cuenta los nuevos enemigos: extremistas opositores a la globalización localizados en el “arco de inestabilidad”; presta atención prioritaria a los conflictos regionales, y prepara para la guerra irregular, a la vez que brinda apoyo a gobiernos “aliados” para que ellos enfrenten por los EEUU a los nuevos enemigos. Se manifiesta temor por la evolución de China y Rusia.

REGIONES ESTRATÉGICAMENTE IMPORTANTES (¿?)

Dicen los norteamericanos en su documento Estrategia Nacional de Defensa¹⁴: “El bienestar de la economía mundial depende del acceso a recursos energéticos. A pesar de los esfuerzos nacionales para reducir la dependencia del petróleo, las tendencias actuales indican una dependencia creciente en los próximos años de petróleo proveniente de zonas inestables, y no una menor dependencia”. El mismo documento afirma la necesidad de tener “acceso estratégico a regiones importantes del mundo para satisfacer necesidades de seguridad nacional”.

Las “regiones importantes del mundo” desde el punto de vista energético curiosamente están localizadas sobre el “arco de inestabilidad” ya mencionado:

Se trata, en primer lugar por la magnitud de las reservas probadas, de la región del Golfo Pérsico y el Mar Caspio, alrededor de los cuales se libra una lucha intensa de dominación. Afganistán, Irán, Iraq, Siria, las naciones árabes y hasta Osetia y Abjasia, en Georgia, son naciones o regiones cobijadas por esa lucha que ha derivado en guerras de dominación por el control de las reservas petroleras y de los canales de salida al océano Índico y al Mediterráneo. El mapa de las reservas y oleoductos coincide con aquel de las bases militares y las flotas de la armada norteamericana.

En segundo lugar, por la magnitud de las reservas probables, se encuentra América Latina o, más específicamente, Venezuela y Brasil. Si bien las reservas probadas de petróleo en la región son importantes, son mucho mayores las expectativas

¹⁴National Defense Strategy, June 2008. Traducción libre. <http://www.defenselink.mil/news/2008%20National%20Defense%20Strategy.pdf>.





- US military base
- Major Iranian nuclear facilities

The majority of US bases are extensive autonomous bases. Other consist of a significant US presence stationed at a host country's facilities. The US has many smaller facilities in Iraq, Pakistan, Oman, Bahrain, UAE, Qatar, Tajikistan and Afghanistan.

del llamado “petróleo no convencional” en la faja del Orinoco. Se trata de un crudo extra pesado cuya única dificultad actual estriba en el costo de su refinación, asunto que irá perdiendo importancia en la medida en que la crisis de abastecimiento induzca la mayor elevación de los precios.

La proyección es de gran magnitud, llegando a sugerirse que Sur y Centro América tendrían las mayores reservas globales de crudo¹⁵. Es claro que esa circunstancia convierte a la región en “estratégicamente importante”, lo cual tal vez “justifique” para los EEUU la presencia militar en Sur y Centro América y la reciente reactivación de la IV Flota Naval cuyo ámbito de acción es el mar Caribe.

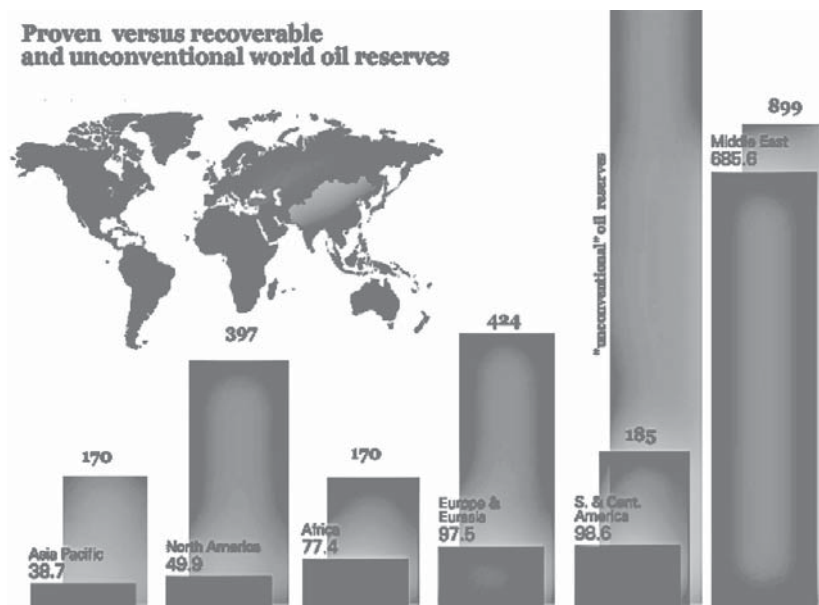
¹⁵Kovarik, Bill, The Oil Reserve Fallacy. Proven reserves are not a measure of future supply. <http://www.runet.edu/~wkovarik/oil/>.





PERIFERIAS N° 18 SEMESTRE 2 | 2009

Operaciones con radar	Puestos de seguridad	Bases militares
Hay 17 sitios con instalaciones de radar, principalmente en Colombia y Perú.	Hay 4 puestos de Seguridad Operativa, localizados en: Manta (Ecuador), Co-malapa (El Salvador), Reina Beatrix (Aruba) y Hato Rey (Curazao)	Existen 2 bases militares: Guantánamo (Cuba) y Soto Cano / Palmerola (Honduras)



Últimamente parece haberse despertado un cierto interés norteamericano por el continente africano y, más en concreto, por el golfo de Guinea en el occidente. Se creó en 2008 el Comando Unificado de Combate USAFRICOM y se definió¹⁶ la necesidad del acceso aéreo a tres sitios prioritarios: la base aérea Sigonella en Sicilia, Djibouti en el este de África, y la isla Ascensión en el Atlántico (territorio británico de ultramar), a mitad de camino desde el este de Brasil (ver figura). Desde esos tres lugares se tendría el acceso requerido al continente africano, con una salvedad: los transportes C-17 de armas y tropa requieren estación de abastecimiento en Sur América para alcanzar la isla Ascensión y así garantizar la

¹⁶ En Route Strategy for Africom Support. Amc/a8xae. 4 March 09. www.au.af.mil/awc/aficom/documents/AFRICOM_brief.ppt.





AFRICAN COVERAGE (Best Coverage With Fewest Locations)



Unrivaled Global Reach for America ... ALWAYS!

movilidad demandada por la fuerza aérea. El llamado “libro blanco” del comando de movilidad aérea, lanzado a la fama por el presidente Chávez en la reunión de UNASUR¹⁷, planteó la solución del problema. Dice el texto traducido:

Recientemente, USSOUTHCOM se ha interesado en el establecimiento de una ubicación en el continente que podría utilizarse tanto para las operaciones de lucha contra el narcotráfico como una ubicación desde la que se puedan ejecutar las operaciones de movilidad. En consecuencia, con la asistencia de AMC y USTRANSCOM, USSOUTHCOM ha identificado Palanquero, Colombia (aeropuerto Germán Olano –SKPQ–), como una ubicación de seguridad cooperativa (CSL). Desde esta ubicación, puede cubrirse casi la mitad del continente por un C-17 sin reabastecimiento. De haber el combustible adecuado en el sitio de destino, un C-17 podría abarcar todo el continente, con excepción de la región de Cabo de

¹⁷ White Paper. Air Mobility Command. Global en Route Strategy: Executive Summary. [<http://www.au.af.mil/awc/afcom/documents/GlobalEnRouteStrategy.pdf>].





Hornos en Chile y Argentina. Hasta que USSOUTHCOM establezca un plan más sólido, la estrategia para colocar un CSL en Palanquero debería ser suficiente para alcanzar movilidad aérea en el continente sudamericano.

De esta manera se define un vínculo entre el interés norteamericano por el continente africano y la intención de utilizar bases militares colombianas para su beneficio. No es sólo Palanquero: Cartagena y Bahía Málaga servirían para atender su IV Flota, y Apiay, Tolemaida y Larandia atenderían sus otras necesidades.

Y ¿por qué el interés en África?

La región del Golfo de Guinea posee un enorme potencial de reservas petrolíferas no explotadas. Según estimaciones, en la zona de alta mar hay petróleo para alrededor de 15 mil millones de barriles, lo que la convierte en una de las regiones más ricas en hidrocarburos y por lo tanto es apetecido su dominio por la potencia hegemónica.

La zona oriental de Brasil, incluida la costa atlántica, rica en petróleo, y la zona occidental de África, también rica en hidrocarburos, son ambas equidistantes de la isla británica Ascensión, objetivo cercano del plan de movilidad de la fuerza aérea norteamericana.

El petróleo marca el interés de los EEUU en los países árabes hasta el Caspio, en Suramérica y en África, especialmente en el Golfo de Guinea.

En adición a lo anterior, debe anotarse que la región suramericana tiende a la búsqueda de su independencia, a la construcción de su propio futuro. Esto es, busca salirse del dominio norteamericano en momentos cuando la nueva y defi-

DEEP WATER RESERVES 2003	
Country / Region	Billion of barrels
1. West Africa	14.495
2. Gulf of Mexico	12.393
3. Northwest Europe	3.126
4. Mediterrean Sea	1.868
5. Brasil	8.396
6. Asia-Pacific	2.139
Source: Douglas-Westwood/Infield Systems' World En: < http://library.fes.de/pdf-files/iez/02115/dieterich.pdf >	



nitiva crisis del petróleo parece estarse ya construyendo. Ello hace que la región se catalogue como parte del “arco de inestabilidad” en donde, según los EEUU, se ubican sus enemigos actuales y potenciales. Excepciones como la colombiana no son suficientes para cambiar esa percepción.

Lo anterior significa control político estrecho, ese que siempre han ejercido y que hoy quieren perfeccionar aunque sus tácticas desestabilizadoras sigan pareciéndose a las de épocas anteriores.

Así las cosas, las causas de la apropiación norteamericana de bases militares colombianas parecen resumirse en:

- Avanzada sobre el petróleo del norte de sur-América (Venezuela, Ecuador, Brasil y Colombia).
- Puente para acceso a la isla Ascensión, al Golfo de Guinea en África y sus reservas petroleras.
- Puente de acceso a casi toda Suramérica.
- Control político en región que tiende a la independencia.
- Servicio a la IV Flota.

Para el gobierno colombiano, de otro lado, hay intereses de sectores de los cuales es vocero que deben ser atendidos:

- Los negociadores colombianos dicen que las bases tienden a reemplazar la ayuda militar del Plan Colombia, que se ha reducido por las violaciones a los derechos humanos.
- Se intercambia soberanía por un eventual apoyo de los norteamericanos al TLC.
- Las bases sirven para combatir el narcotráfico (difícil imaginar al avión transporte C – 17 en acciones contra el narcotráfico).
- Las bases sirven para combatir la guerrilla (obsesión de Uribe).

Para salvaguardar nuestra soberanía nuevamente amenazada, se requiere la expresión enérgica de la opinión colectiva de los colombianos en oposición a la instalación de fuerzas armadas norteamericanas en nuestro territorio.

- No a la presencia militar norteamericana en Colombia.
- No a la conversión de Colombia en un centro de operaciones militares de Estados Unidos.





PERIFERIAS N° 18 SEMESTRE 2 | 2009

- No a la presencia de fuerzas militares extranjeras en Suramérica.
- Por la salida política negociada del conflicto interno colombiano.
- Por la autodeterminación de los pueblos.





LAS INTERROGANTES SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

¿QUIÉN MANEJA LA POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU?

Marco A. Gandásegui, hijo*

*EEUU no va a imponer ningún sistema político a otro país, aunque no
quiere decir que no vaya a trabajar a favor de los valores democráticos.*

Barack Obama

El 28 de junio de 2009, el golpe militar en Honduras, que depuso al presidente Manuel Zelaya, puso en jaque al presidente Barack Obama. Las dudas que existían en torno a las intenciones del nuevo ocupante de la Casa Blanca se disiparon rápidamente. En bandeja de plata, las circunstancias se presentaban de manera prístina para que Obama actuara con decisión y en concierto con la comunidad internacional. Ante el llamado de un país golpeado y en dificultades, Obama optó por desviar la mirada y ocuparse de otros asuntos.

Su discurso de “la mano tendida” durante la campaña y los esfuerzos por crear una nueva imagen para EEUU, se encontraron en Honduras con una prueba que lo enfrentó a dos sectores de la clase dominante norteamericana, que puján por la hegemonía y la legitimidad interna en ese país. Por un lado, hay quienes plantean una acción radical a favor de la democracia en Honduras. Implicaría retirar al embajador, suspender los desembolsos y unirse a los países de la región. Otra corriente incrustada en los pasillos del poder, sin embargo, plantea que, si

* Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.



la Casa Blanca se limitaba a hacer algunas gestos simbólicos, el mensaje deseado sería escuchado alto y claro en América Latina.

LA RECESIÓN Y LAS LUCHAS INTERNAS EN EEUU

El enfrentamiento entre los dos poderosos sectores que dominan a EEUU perseguirá a Obama durante todo su gobierno. Sea éste de cuatro años o de los ocho que aspira. En medio de la recesión económica la situación se pone aún más difícil. La encrucijada que representa Honduras para Obama trasciende las debilidades históricas de la democracia en la región e, incluso, las relaciones de EEUU con América Latina. Apunta directamente a las luchas entre las facciones norteamericanas que pretenden salir fortalecidas de la recesión económica y de los cambios radicales que se están gestando tanto dentro de EEUU como en el mundo.

La correlación de fuerzas en EEUU, con motivo de la crisis de acumulación iniciada en la década de 1970 y que estallara en septiembre de 2008 en la bolsa de valores de Nueva York, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, ha dejado sólo dos grandes contrincantes en el tinglado del poder. Por un lado, los financistas que desesperadamente buscan cómo afianzarse y recuperar posiciones en un sistema capitalista mundial que invierte cada vez menos y que genera pérdidas crecientes. Por el otro, un sector capitalista depredador que visualiza como única solución a la disminución de la tasa de ganancia de sus inversiones, el pillaje, que incluye invasiones, golpes de Estado y guerras a escala mundial.¹ Incluso, el antaño poderoso conglomerado industrial ha quedado en ruinas producto de las políticas neoliberales iniciadas por el presidente Reagan en la década de 1980. Los antes todo poderosos General Motors y General Electric han sido reemplazados por el general McChrystal y el almirante Stravridis.

El triunfo electoral de Obama en noviembre de 2008 fue el producto de una hábil campaña mediática y una presentación clara sobre sus atributos para alcanzar la recuperación de EEUU en el escenario mundial. Su oratoria es extraordinaria, sin embargo no asegura la recuperación de EEUU. Obama, en su campaña, disminuyó el papel de los “depredadores” y se alió con los sectores financieros, para prometer más bienestar al pueblo de EEUU. Cuando viajó a la

1 Rick Rozoff, 2009, “Pentagon’s 21st Century Counterinsurgency Wars: Latin America and South Asia”, <http://usa.mediamonitors.net/content/view/full/64951>, 29 de julio. Según este autor, en Afganistán, EEUU ha logrado concertar a los ejércitos de 50 países de todo el mundo – desde los más diminutos como Montenegro, hasta Alemania, entre los más grandes– para demostrar su hegemonía global. Países como China, Rusia, África del Sur o India están en la lista de los 50 países.





cumbre interamericana en Trinidad y Tobago les aseguró a los mandatarios de América Latina que cooperaría con los cambios necesarios para el desarrollo de la región. Sin embargo, mientras el discurso decía una cosa, las acciones abrían un camino distinto. Por un lado, continuó la política de Bush e incrementó la militarización de Colombia, abrió un espacio antes desconocido a los militares en México y, por el otro, para culminar sus primeros seis meses en el poder, dio luz verde al golpe militar en Honduras.

La complicidad norteamericana y el apoyo tácito al golpe militar de Honduras, que van acompañados de una represión dentro del país centroamericano, plantea la pregunta sobre quién está a cargo de la política exterior de EEUU. Las acciones indican que los “depredadores” no han perdido su control en el Pentágono y siguen muy poderosos en los pasillos del Departamento de Estado.

La política exterior hacia América Latina de EEUU, basada en nuevas normas diplomáticas prometidas por Obama, ha capitulado ante las tácticas de un Negroponte, quien conserva su posición estratégica dentro del Departamento de Estado y controla una media docena de embajadores en capitales vitales de la región (Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua y Guatemala, por lo menos). En el caso del embajador de Obama en Tegucigalpa, sus declaraciones se han limitado a expresar su deseo de que Zelaya no regrese por la frontera para evitar confrontaciones.²

EEUU cuenta con una base militar en Honduras –Cano Soto– donde operaba la contrainsurgencia desatada contra Nicaragua y El Salvador en las décadas de 1970 y 1980. En la actualidad, militares norteamericanos en Cano Soto entrenan oficiales de varios países de la región (especialmente de la propia Honduras) y mantienen su vigilancia tanto en Centroamérica como sobre el Caribe. La base sigue funcionando normalmente a pesar del golpe de Estado y las relaciones entre los militares norteamericanos y hondureños parecen no haber sufrido contratiempo alguno.³

2 Los embajadores Hugo Llorens en Tegucigalpa, Robert Blau (encargado de negocios) en San Salvador, Stephen McFarland en la ciudad de Guatemala y Robert Callahan en Managua -el cuarteto de Negroponte- tienen en común haber pasado por la Universidad de Guerra, trabajado en la Embajada de EEUU en Iraq y ser miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia.

3 Según Wim Dierckxsens (et al., 2009, “Military Coup in Honduras: Is It against Obama Too?”), en la base norteamericana en Honduras de “José Soto Cano”, se encuentra la brigada combinada llamada “Bravo”, compuesta por tropas de seguridad norteamericana, del Ejército y de la Fuerza Aérea (el 1er batallón número 228). La base cuenta con 600 efectivos militares y 18 aviones de guerra HU-60, Black Hawk y CH-47 Chinook. El 31 de mayo de 2008, el presidente Zelaya anunció que la pista aérea de Soto Cano sería usada para vuelos comerciales. Además, una terminal civil sería construida con fondos de ALBA.





A diferencia de Obama, sus aliados europeos suspendieron todos los desembolsos al gobierno de hecho de Micheletti al no aceptar los 7 puntos presentados por el mediador Oscar Arias en el plan de San José. La Organización de Estados Americanos (OEA), foro que se movilizó contra el golpe, fue rechazada por EEUU para mediar en la solución de la crisis hondureña. Se cree, incluso, que EEUU no apoyará la reelección de José M. Insulza para un próximo periodo como secretario general. A la secretaria de Estado, Hilary Clinton, no le gustó la manera en que Insulza manejó la condena unánime del golpe.⁴

Según Loudon, “a pesar del cambio de gobierno en Washington, la influencia de Negroponte y otros extremistas de derecha parecen estar dominando el Departamento de Estado y la política exterior de EEUU”. En el caso de Honduras, “ha pasado un mes desde el golpe de Estado y Washington aún no se pronuncia con claridad y en forma contundente sobre el golpe militar”.

EL GATO Y EL RATÓN

A pesar de la declaración del presidente Obama, calificando el golpe como ilegal y reconociendo a Zelaya como el presidente legítimo, el Departamento de Estado se niega a reconocer que lo ocurrido fue un golpe de Estado. Este reconocimiento obligaría legalmente a EEUU a suspender su ayuda al gobierno de Micheletti. La crisis democrática de Honduras ha descubierto otra crisis, mucho más profunda, en el seno de los propios EEUU.⁵

En EEUU, la política exterior todavía gira en torno a tácticas que se remontan a la “guerra fría”. Obama dio un paso hacia una distensión de las relaciones con Cuba y fue detenido. El presidente de EEUU saludó de mano al presidente Chávez en la cumbre interamericana y fue denunciado de inmediato en los medios que controlan los “depredadores”. La noción de un “eje del mal”, inventada por Bush, sigue vigente en la visión que tiene la elite política de Washington sobre América Latina.

La política exterior “depredadora” tiene que identificar un enemigo en la región para legitimar su existencia. Si el enemigo es plural aparece la noción de un “eje”. Desde 1959 el enemigo ha sido Cuba, supuestamente una base soviética en el hemisferio occidental repetido mil y una veces en forma diaria por los medios de EEUU. En la década de 1970, Chile se sumó a la lista y la Unidad Popular

⁴ Tom Loudon, 2009, “Honduran Coup reveals crisis of democracy in the United States as well”, Wahington: The Quixote Center.

⁵ *Ídem.*





fue objeto de un golpe militar sangriento. En la década de 1980, Nicaragua inició un proceso progresista bajo el Frente Sandinista y fue derrotado por una ofensiva militar norteamericana que no se detuvo hasta barrer con todo vestigio de avance social.

En la década de 1990 apareció la Venezuela Bolivariana, cuyo candidato a presidente, Hugo Chávez, ganó mediante elecciones. El triunfo bolivariano fue seguido por triunfos de candidatos progresistas en las urnas en Bolivia y Ecuador. EEUU reaccionó y apadrinó un golpe militar en 2002 que separó durante dos días al presidente Chávez del poder. Igualmente, en Bolivia, EEUU apoyó sin éxito a los racistas de las provincias de Oriente boliviano con intenciones de descuartizar el país. Asimismo, en Ecuador la embajada de EEUU promueve el separatismo de Guayaquil y le echa candela a las incursiones del Ejército colombiano en territorio de ese país.

En 2005 triunfó Manuel Zelaya en las elecciones presidenciales de Honduras. Su programa de gobierno tenía un contenido conservador con algunas medidas para mitigar la pobreza y la desigualdad en el país. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Honduras está entre los cinco países más pobres de la región. Las medidas para mitigar la pobreza incluían reconocer los derechos de los trabajadores, apoyar las reivindicaciones de los estudiantes, educadores, mujeres y pueblos indígenas. Además, redistribuir parte de la riqueza que generaban las inversiones extranjeras.⁶

Las propuestas de Zelaya eran resistidas paso a paso por la oligarquía comercial (atrincherada en San Pedro Sula) y la rancia clase terrateniente. Las protestas y manifestaciones contra el gobierno de Zelaya en todo el país eran cotidianas. Los avances del gobierno, que se volvió progresista sobre la marcha, no eran suficientes para satisfacer las demandas populares. Desde la Presidencia, Zelaya se distanció poco a poco del Congreso en manos de sus partidarios liberales, de la Corte y del sistema judicial.

6 Immanuel Wallerstein, 2009, "La derecha contra ataca", *La Jornada*, 18 de julio. Wallerstein, uno de los sociólogos más destacados del siglo XX, señala que Zelaya, "emprendió programas internos que en verdad hicieron algo por la vasta mayoría de la población: se construyeron escuelas en áreas rurales remotas, se aumentó el salario mínimo, se abrieron clínicas de salud. Comenzó su periodo apoyando el tratado de libre comercio con EEUU, pero apenas dos años después se unió al ALBA. El resultado fue que Honduras obtuvo petróleo barato procedente de Venezuela".





LA COMPLICIDAD DE LOS “LIBERALES” NORTEAMERICANOS

Con la complicidad de la Embajada de EEUU, el Ejército de Honduras (con la base de Soto Cano apoyando) prestó su apoyo logístico para paralizar el país, secuestrar a Zelaya y expulsarlo.

En el caso de Honduras, la política exterior de EEUU la está dirigiendo la fracción “depredadora”. Por su lado, los llamados “liberales”, que se han refugiado en diferentes rincones del gobierno de Obama, tratan de justificar su falta de acción frente a los golpistas hondureños.

Los liberales norteamericanos repiten los mismos alegatos de los depredadores, señalando que un retroceso en Honduras sería un triunfo del “eje del mal” que supuestamente encabeza el presidente Chávez de Venezuela. Además, señalan que fue el mismo Zelaya quien al querer reformar la Constitución, se puso la soga al cuello.

Según el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), con sede en Washington, “EEUU, enfrentado a los hechos, tiene que maniobrar entre la condena del golpe –rechazado por el mundo– y asegurarse que Honduras se libere de la influencia tóxica de Venezuela. Debido a la connotación negativa que tiene la historia de intervenciones de EEUU en la región, Washington evita explícitamente cualquier apoyo a los golpistas, aunque ha llegado muy cerca de hacerlo”.⁷

El líder del Partido Demócrata, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, John Kerry, se pronunció abiertamente en la dirección favorable al golpe. El ex candidato a la Presidencia de EEUU (en 2004) dijo que “el problema que percibió el Congreso fue que la OEA y sus líderes principales hicieron gestos algo precipitados en relación con Honduras, que pudieron haber disminuido la capacidad de esa organización de mediar con eficacia”.⁸

Para Kerry, no sólo el presidente Chávez constituye una amenaza a los intereses de EEUU. Igualmente, los gestos de la OEA no deben confundirse con políticas que promuevan cambios en la región. En el pasado la OEA (un foro compuesto por cerca de 25 gobiernos del hemisferio occidental) ha expresado opiniones progresistas pero nunca alejadas de las líneas que emanan de Washington.

“La OEA, según Kerry, no debe olvidar que su rol es resolver crisis en favor de la democracia. Parece haber una mejora en este momento”. Cuando un vocero de

7 COHA, 2009, “Honduras, Both Sides Say No Retreat”. Council on Hemispheric Affairs (COHA): Washington, 22 de julio.

8 Humberto Vásquez, 2009, “El huracán Honduras sacude a la OEA”, IPS, 21 de julio.





tendencia liberal norteamericano habla de los intereses de la democracia, se está refiriendo a los intereses de las grandes trasnacionales de EEUU que operan en la región. Las declaraciones de Kerry se hicieron cuando sus fuentes le indicaban que el presidente Zelaya ya no regresaría a Honduras.

En el marco académico norteamericano liberal, la justificación del golpe también fue muy generalizada. Seligson y Booth señalan que “Zelaya insistió en realizar un plebiscito para medir el apoyo popular a una futura asamblea constituyente, a pesar de los esfuerzos legislativos y de las resoluciones de otras partes del gobierno hondureño. Haciendo frente a estos obstáculos, Zelaya intentó forzar el voto y después despedir al jefe de las fuerzas armadas”. Después, los profesores universitarios agregan que “la primera acción fue considerada ilegal, y la segunda un poder constitucional reservado únicamente para el Congreso”.

Con información proveniente de fuentes que no citan, Seligson y Booth aseguran que los golpistas “conscientes del apoyo popular dividido para Zelaya y en ausencia de algún mecanismo formal de juicio político y de remoción del presidente en la constitución hondureña, se movieron para derrocarlo y justificar sus propias acciones inconstitucionales alegando que la crisis había sido provocada por las acciones inconstitucionales del propio Zelaya”.

Los académicos dejan por fuera todos los elementos fundamentales para efectuar el análisis. La correlación de fuerzas internas y la política exterior de EEUU no forman parte de la combinación de elementos que tenían que ser parte del estudio del golpe en Honduras.⁹

Si los voceros norteamericanos han cerrado filas en torno al golpe, los ideólogos de otras latitudes no se quedan atrás. El corresponsal de *El País* madrileño en Washington, Antonio Caño, sale al paso de las acusaciones contra EEUU de haber conjurado una conspiración golpista. Plantea que la “administración de Barack Obama se ha caracterizado, precisamente, por la defensa del derecho internacional y de la aceptación de los contrarios”. El periodista del medio español ligado al PSOE gobernante, celebra la capacidad de “EEUU [que] ha encontrado en ese plan el pivote de una política muy inteligente: defender sus intereses y minar los del rival, con respeto a la ley y apoyo internacional”.

¿Quién es el rival? La Unión Soviética, Cuba, la República Popular China. No. Caño convierte el golpe de Estado en Honduras en un enfrentamiento por la hegemonía hemisférica entre Obama y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

9 Mitchel Seligson y John Booth, 2009, “¿Prediciendo golpes de Estado? Vulnerabilidades democráticas: El Barómetro de las Américas y la crisis hondureña de 2009”, Lapop, www.AmericasBarometer.org.





Señala que “ha sido después del derrocamiento cuando EEUU ha empezado a mirar a Honduras con creciente interés... Lo ha hecho, ciertamente, como una oportunidad de ponerle freno a Chávez”.

Si el periodista Caño se encuentra de alguna manera cerca de la verdad, entonces Obama es sólo la continuación de una política exterior equivocada enarbolada de manera más coherente por su antecesor, George W. Bush.

Según Caño, “EEUU no se ha movido un milímetro del papel que le corresponde a una democracia ante una acción golpista: ha exigido la restitución del presidente depuesto, ha retirado el visado a cuatro de las figuras del régimen de facto y ha anunciado próximas sanciones contra el Gobierno creado en Honduras. Ha estado, en fin, actuando en la misma dirección que el resto de sus aliados”. Aunque Caño identifica a quien considera el enemigo de Washington (Chávez), no señala quienes son “el resto de sus aliados”. En este caso podrían ser Uribe (Colombia) y Calderón (México). Quizás el presidente Arias en Costa Rica, “un hombre en quien Washington confía”.

Para Caño, lo más importante es que “en un plano subterráneo, Washington –especialmente el Departamento de Estado– ha entendido que esta crisis, por insignificante que pareciera en su nacimiento, podría equivaler, adecuadamente manejada, al principio del fin del chavismo en América Latina. Es decir, el fin de una doctrina que predica la confrontación y la acomodación de las leyes nacionales a la consolidación de un largo régimen. Para ello, EEUU ha contado con la complicidad, al menos silenciosa, de varios países latinoamericanos que tienen los mismos recelos hacia Chávez, aunque no se atreven a expresarlos en público”.¹⁰

Según Atilio Boron, “falta ya muy poco para que Washington comience a declarar que el verdadero golpista es Zelaya y que fue él y no otro quien arrojó a su país a un caos de violencia y muerte. La promesa de nuevas mediaciones a cargo de la Casa Blanca sólo servirá para desfigurar aún más la verdad e inclinar el fiel de la balanza a favor de los golpistas y sus mandantes”.¹¹

Según Wim Dierckxsens, la pregunta que debe hacerse a la Casa Blanca es aún más directa: “¿Estaban el presidente Obama y la secretaria de Estado Clinton informados con anticipación del golpe en Honduras y de la participación de funcionarios norteamericanos?” Aún más problemático: “¿Fue el operativo

¹⁰Antonio Caño, 2009, “¿El Waterloo del chavismo?”, El País, 1º de agosto.

¹¹Atilio A. Boron, 2009, “Honduras y la SIP”, ALAI, 25 de julio.





aprobado por Obama similar a la aprobación que le dio Kennedy a la invasión de Cuba en 1961?”

Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, “entonces el golpe militar de Honduras es un golpe de Estado a toda América Latina. Es una operación política con intenciones de arrestar un movimiento democrático que caracteriza a toda la región. Es una amenaza para todos los gobiernos latinoamericanos. A pesar de ello, hasta ahora los mandatarios latinoamericanos están dispuestos a creer en la bondad de Obama y pensar que el golpe se ejecutó sin su conocimiento”.

Ahora bien, si la respuesta es negativa y Obama no tenía conocimiento del operativo, entonces se puede llegar a la conclusión que hay fuerzas siniestras dentro del aparato de inteligencia que han usurpado los poderes del presidente de EEUU para dirigir la política exterior de ese país. Aún peor, esta situación implica la presencia dentro del aparato del Estado de subalternos en abierta insubordinación frente al comandante en jefe de EEUU.

Wim Dierckxsens concluye que urge esclarecer este asunto ya que puede tratarse de un golpe “en las sombras de una fuerza capaz de chantajear cualquier gobierno en el mundo con el propósito de imponer una era neo-fascista a escala mundial. Se trata de un golpe en Honduras y algo parecido que se está incubando en EEUU”.¹²

EL FINANCIAMIENTO Y EL LOBBY EN EL CONGRESO

Según Eva Gollinger, “la nueva diplomacia estadounidense, denominada “smart power” (poder inteligente), ha jugado un papel principal antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras”. Dos días después del golpe de Estado, los voceros del Departamento de Estado, admitieron que tenían conocimiento previo del golpe y que habían estado trabajando con los golpistas en busca de “otra solución”. De igual manera, admitieron que dos altos funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para América Latina Thomas Shannon y el subsecretario de Estado James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo.

El golpe de Estado fue financiado por organizaciones norteamericanas que formaron un frente empresarial con participación de lo que la agencia norteamericana de apoyo (USAID) llama la sociedad civil. Un mes antes del golpe contra el presidente Zelaya se formó una coalición entre diferentes organizaciones no

¹² Wim Dierckxsens et al., 2009, “Military Coup in Honduras: Is It against Obama Too?”.





gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la Iglesia católica y los medios de comunicación, denominada “Unión Cívica Democrática”.

Entre los miembros de la “Unión Cívica Democrática” de Honduras están organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Consejo de Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y Democracia y el grupo estudiantil Generación X Cambio.

La mayoría de estas organizaciones fueron beneficiarias de 50 millones de dólares que anualmente invierten la USAID y la National Endowment for Democracy (NED) en el “desarrollo democrático” en Honduras. Un informe de la USAID sobre su financiamiento y trabajo con COHEP, destaca que “el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó a asegurar la credibilidad del Consejo de Empresarios (COHEP) como una organización hondureña y no un brazo de la USAID.”¹³

El presupuesto de la USAID y el Departamento de Estado aumentó en un 12 por ciento en 2010, con 2,2 mil millones de dólares destinados a América Latina. De este total, 447,7 millones de dólares son para “promover la democracia” en América Latina. La cuarta parte –101 millones de dólares– tiene como destino la oposición política boliviana. Otros 13 millones de dólares son para “promover la democracia” en Venezuela. Varios millones recibirá la OEA para “promover la democracia” en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.¹⁴

El Instituto Republicano Internacional, que recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), obtuvo más de 1,2 millones de dólares en 2009 para trabajar con los sectores políticos en Honduras. Su trabajo se dedicó a apoyar los “centros académicos” y “grupos de presión” en Honduras, para influir sobre los partidos políticos y la campaña electoral de 2009.”

El senador republicano John McCain, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, ayudó a coordinar la visita de la delegación golpista de Honduras a Washington a mediados de julio. McCain es conocido por su dura postura contra Venezuela, Bolivia y otros países de la región considerados “anti imperialistas”

¹³Eva Gollinger, 2009, “Washington y el golpe de Estado en Honduras: aquí están las pruebas”, *Rebelión*, 13 de julio.

¹⁴Eva Golinger, 2009, “Sigue el dinero: La ofensiva imperial en América Latina se evidencia en dólares”, *Panamá Profundo*, 31 de julio.





y por sus estrechos vínculos con la mafia cubana en Miami. McCain también es jefe del Instituto Republicano Internacional (IRI), ente financiero de los golpistas de Honduras.

Además de McCain, el abogado Lanny Davis fue contratado por la sede hondureña del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby a favor de los golpistas. Lanny Davis fue abogado del ex presidente Bill Clinton cuando estaba en la Casa Blanca y es asesor de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Davis está organizando reuniones entre los representantes golpistas y diferentes congresistas, senadores y funcionarios del gobierno de EEUU. CEAL esta compuesto por los empresarios latinoamericanos que más han promovido atentados contra los movimientos populares en la región.

Como parte de este esfuerzo, lograron una audiencia bipartidista especial ante el Congreso, que recibió testimonios de personajes promotores del golpe, como Michael Shifter, del Diálogo Interamericano de Washington y Otto Reich, promotor de la desestabilización contra gobiernos en América Latina. Como resultado de este encuentro, el *lobby* está promoviendo una resolución del Congreso que reconozca como legítimo al gobierno de facto de Honduras.

La presencia del equipo de Negroponte en Centro América no es simplemente un recuerdo de las políticas desestabilizadoras del pasado gobierno de Bush. Todo indica que Obama continuará la misma política norteamericana en la subregión al igual que en el resto de América Latina. Según un ex embajador norteamericano en El Salvador, Robert White, “la crisis en Honduras debiera recordar a la administración Obama que ha heredado una política inadecuada hacia Centroamérica”.¹⁵ El peligro en la región, en la actualidad, no son los militares que actúan como peones en una estrategia global. Sobre la base de lo acontecido en Honduras, la región está conciente de que la política exterior de EEUU los hace a todos –desde un Lula hasta un Chávez, pasando por un Tabaré Vázquez– vulnerables ante la agresividad del nuevo ocupante de la Casa Blanca.

Panamá, 3 de agosto de 2009.

¹⁵Robert E. White, 2009, “Por qué el golpe de estado en Honduras no triunfará-ni debe hacerlo”, <http://americas.irc-online.org/am/6260>, 16 de julio.







HONDURAS:

GOLPE DE ESTADO Y ALTERACIÓN DE LOS
ESCAQUES DEL AJEDREZ POLÍTICO EN AMÉRICA
LATINA*

*Robinson Salazar Pérez***

*El premio Nóbel de la paz fue otorgado a
quien guardó silencio cómplice ante el golpe de Estado en
Honduras, de él sólo esperamos Impunidad ante la guerra.*

El golpe de Estado detonado en Honduras el 28 de junio de 2009 fue la fisura y apertura de la ventana para observar tres coordenadas enfiladas hacia el destino latinoamericano afines a detener todo asomo de reestatización, evitar cualquier alternativa de bloqueo al mercado de las empresas transnacionales, contener el avance de los gobiernos nacionalistas de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, y El Salvador en actual proceso de estructuración, además de sembrar el temor en los mandatarios latinoamericanos con el recordatorio de cómo los intereses extra nacionales imperan sobre la gobernabilidad aun cuando la legitimidad puede estar avalada por los votos.

La ruptura institucional en el país hondureño también reveló que en la región existen cerca de un centenar de hidroeléctricas, ríos represados, proyectos para abrir un canal conector entre los dos océanos y la habilitación de puertos secos.

* Versión preliminar de este artículo fue publicada en Alainet en revista América en Movimiento No 447, agosto 2009 <http://alainet.org/publica/447.phtml>

** Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa/México. Director de www.insumisos.com





El cierre del círculo coincide precisamente en Honduras con la ola privatizadora de todas las fuentes de energía. Es un volcán activo, donde la política depende de factores internos para conciliar y facilitar las maniobras del capital transnacional interesado en saquear de manera inmisericorde las riquezas de la biodiversidad y recursos naturales estratégicos, y del aval externo por parte de los agentes económicos y militares de los Estados Unidos otorgado a cambio de inversión, custodia con bases y operativos que legitiman la depredación absoluta de los países del área.

MILITARES, NARCOTRÁFICO, EMPRESARIOS Y PANDILLAS: EL EJE GOLPISTA

En la consulta popular que impulsaba el presidente Zelaya mediante una acción participativa ciudadana, cuyo objetivo era, en caso de ser aprobada, la posibilidad de una “cuarta urna” en las elecciones generales de noviembre próximo, los ciudadanos podrían decidir sobre reformar la Constitución. La convocatoria despertó la ira y los intereses velados de la clase oligarca-burguesa de los principales agremiados en la Cámara de Empresarios aliados con sectores militares en vínculo a los negocios ilícitos de tráfico de drogas y robo de autos, pero leales a las pretensiones castrenses impuestas por los Estados Unidos en el país y a la región, y con ayuda de la instalación de bases de operaciones militares instrumentaron el primer golpe de Estado del Siglo XXI en América Latina.

El pretexto para la ruptura institucional fue el mismo esgrimido por el sector neoconservador norteamericano relacionado a los intereses del pentágono: la reelección y subsistencia en el poder, la fortaleza en los vínculos con el gobierno venezolano, la intencionalidad de imponer el socialismo y la cercanía cada día mas persistente con el bloque de gobiernos alternativos o terroristas (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua).

Oculto en el hilar noticioso, el rompecabezas de actos encadenados es visibilizado al reordenarse los hechos y datos que explican los factores que motivaron la interrupción del gobierno Zelayista.

Desde el año 2004 arreció la antimara en la región y las pandillas de El Salvador, Honduras y Guatemala entraron en una etapa de negociación con los sectores del narcotráfico y el gobierno, a propósito de crear una alianza estratégica. Donde el desempeño de los pandilleros corresponde a un rol de bisagra: por un lado, distribuir la droga al menudeo, y por otro, realizar labores de profilaxis social para evitar la señalización de los agentes policiales y militares como autores de





la represión propia del Estado policial en proceso de instauración regional desde los inicios del Plan Puebla Panamá¹, hoy Iniciativa Mérida.

El crimen organizado, principalmente el eje del narcotráfico, aprovechó la estructura orgánica de las pandillas Maras de Centroamérica y el sur de México para enrostrarlas en el negocio de la distribución de la droga, especialmente en el mundo del narcomenudeo. De esta manera fueron habilitadas dos estrategias, la primera enfocada al trabajo de redes propio de la era de la globalización y la desterritorialización que facilita el traslado y comercio de la droga; y la segunda dedicada a aprovechar la estructura reedificada de las maras y abrir un zaguán que lo colocara en mejor posicionamiento para presionar autoridades, habilitar rutas, incursionar en sectores populares, abrir nuevos mercados y evitar las afectaciones en los decomisos.

El narcotráfico encontró así una nueva etapa de expansión y diversificación dada la abundancia de las drogas sintéticas, construir nuevos núcleos de poder diseminados, desembarazar a los carteles de Colombia, agregar un plus valor a los aperturistas de nuevas rutas y mercados emergentes, encarecer el valor de la droga pero, asimismo, distribuir de manera ampliada los ingresos por medio del uso de dos campos: las pandillas y la estructura institucional del Estado, por lo que corrompió y vinculó sectores empresariales, banqueros, militares, policiales y aduaneros.

Este fenómeno, hasta hace unos meses (finales del año 2008 y principio de 2009) produjo bajo la complicidad de policías y militares, conatos y conflictos en cárceles en busca de eliminar obstáculos, armar redes y vincular a cómplices con goce de libertad y ejercicio de la limpieza social en El Salvador, Guatemala y Honduras.

El neo paramilitarismo creó nuevas líneas de investigación en los especialistas en seguridad y violencia: su nuevo comportamiento en varias ciudades de los países dominados por la derecha no es producto de confrontaciones políticas ni por disputa de espacios como aconteció en Colombia. Hoy goza de una base re-articulada de redes orgánicas, algunas ilícitas y otras que son parte del entramado institucional. La imbricación esta dada con la intencionalidad de redes de complicidades y colaborativas con distintos fines, pero enfrentan los mismos obstáculos para obtener el éxito de su acción. La acción ilícita está fundamentada

1 Salazar, Robinson, 2002, Los avatares del Plan Colombia, Plan Dignidad y el Plan Puebla Panamá, <http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/avatares.pdf>.





en la obtención de dinero, lucrar con el producto y, a la vez, el reconocimiento del espacio de poder ejercido.

El fortalecimiento del Estado, la recuperación del control de la policía y los militares por parte del gobierno y cerrar los grifos de fuga de la urdimbre institucional eran materia de preocupación en los agentes involucrados en el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas desplazadas por la Mosquitia hondureña, Golfo Fonseca y frontera con México, razón por la cual la operación concertada entre empresarios, militares y narcotraficantes fue eficaz en deponer a Manuel Zelaya.

Más de un millón de armas circulan en Honduras, nación poblada por siete millones y medio de habitantes, y se comercializan desde 500 lempiras en el mercado legal e ilegal (mercado negro).

A lo anterior agregamos la creación de “pequeñas milicias” o células armadas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua por los cárteles de la droga mexicanos desde hace 4 años; además, en zonas del sur y del sureste de México, surten de armamento sofisticado superior al de los efectivos policiales, para proteger y dominar el transporte y almacenamiento de cocaína enviada desde Colombia a Estados Unidos, según indican informes oficiales. Y por el zaguán centroamericano introducen alrededor de 300 toneladas de cocaína, donde 12 puntos fronterizos marítimos y territoriales de Honduras facilitan el tránsito ilegal de drogas.

La estructura paramilitar posee el apoyo del “ministro consejero” del Presidente golpista hondureño Roberto Micheletti, Billy Joya Améndola. Joya Améndola fue uno de los agentes protagonistas del Batallón de Inteligencia 3-36, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundador de los escuadrones de la muerte “Lince” y “Cobra”. A cargo de esta función se convirtió en uno de los principales ejecutores de secuestros, torturas y asesinatos en Honduras, y se le acusó con certeza de al menos once ejecuciones bajo el pseudónimo de “Doctor Áranosla”; desde 1984 hasta 1991 sirvió como enlace entre el ejército hondureño, los represores argentinos y los estadounidenses durante la guerra sucia².

El general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras fungió, como puente entre el crimen organizado y fuerzas militares, quien fue detenido en 1993 por hurto de autos y miembro

2 Carotenuto, Gennaro, 2009, El sicario de Roberto Micheletti: historia del torturador Joya Améndola, brazo derecho del Presidente “de facto”. En Dossier especial sobre golpe de Estado en Honduras 2/ Lecturas semanales en www.insumisos.com.





de la banda internacional conocida como “Banda de los trece” que habían sustraído más de 200 automóviles de Estados Unidos, México y países vecinos de Centroamérica; la pandilla se encontraba apadrinada por el Teniente Coronel Wilfredo Leva Cabrera “y el Mayor Romeo Vásquez Velásquez”, pero más tarde fueron liberados bajo los oficios del gobierno nacional y militares norteamericanos desplazados en las bases militares.

La cara formal del narcotráfico la prestó el sistema bancario y el comercio establecido, que aprovechó para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico a través del flujo de remesas, que alcanzó más de los 2.600 millones de dólares, que representa el 20 por ciento del producto interno bruto en 2008, así como el contrabando de bienes generadores de fondos lavados a través del sistema bancario.

EMPRESARIOS, LA DERECHA Y MILITARES DIALOGAN

El derrocamiento de Manuel Zelaya reafirmó la confianza en los empresarios de ideología neoconservadora proclives a defenestrar todo vestigio de oposición al libre mercado y cercano al Estado.

La disposición de los empresarios de El Salvador, Guatemala y Nicaragua por mantener el comercio activo aun cuando el proceso golpista se curtía de conflictos y los gobiernos latinoamericanos habían cerrado fila en contra de la ruptura institucional, demostró que el mercado está divorciado de los asuntos públicos cuando sus intereses no son afectados, y que el comportamiento como esfera indeterminada de toda la estructura macrosocial ha sido el objetivo permanente desde la fundación del neoliberalismo, con el objeto de apuntalar gobiernos que lo favorezcan y confrontar a todo aquello opuesto a sus intereses económicos.

La mayor alianza se conformó al momento que el gobierno de Manuel Zelaya se adhirió a la organización de Estados bajo la sigla del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas), cuya finalidad es comercializar bajo formas más equitativas, no depender del dólar, trabajar al interior bajo el principio de reciprocidad e incrementar la separación de los países que obligan a una dependencia alimentaria, farmacéutica, tecnológica y científica. Justo en ese tenor, se habían dado paso la compra de medicamentos de Cuba, a bajo costo y con reglas distintas a las establecidas por empresas monopólicas, venta de alimentos a Venezuela e intercambio de tecnología.

Laboratorios monopólicos multinacionales como son Glaxo, Sanofi, Smiyh, Kline, Pfizer, Stein, Novartis, Bristol Myers y Aventis, que operan en Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala, movieron sus influencias ante el riesgo





de caída en sus ventas en un 80 por ciento, acordaron acciones, presionaron a empresarios, dialogaron con sus lobbies de la casa matriz y se conectaron mediante la red de influencias con senadores norteamericanos republicanos para promover el golpe del 28 de junio de 2009.

Los medios de comunicación hondureños son un monopolio controlado por agentes relacionados con gobiernos represores³, empresarios con vínculos internacionales, principalmente con la derecha de España, Venezuela y México, magnificaron los acuerdos con el ALBA, distorsionaron la consulta de la “Cuarta Urna”, construyeron discursivamente el escenario de socialismo, la reestructuración del ejército, la presencia de equipo castrense venezolano en materia de seguridad y vulneración de la soberanía nacional, entre otras calumnias que sembraron el terror y el miedo en los comerciantes y la clase media en la labor divulgativa y el trabajo ideológico de los diarios mas importantes: El Heraldito, El tiempo, La Prensa y La Tribuna, tocaron la misma melodía afin a la letra que compuso la canción “Fuera Zelaya”.

El escenario abigarrado de mensajes de miedo, angustia, terror, presencia militar de venezolanos y reelección para perpetuarse en el poder fue la estrategia mediática que lobbistas, empresarios, medios de comunicación, sector político y diputados de la derecha en la espera de alcanzar el gobierno pusieron en marcha para asestar el golpe de Estado, reeditando así las aspiraciones políticas de los militares, relegados en los últimos 20 años de las grandes decisiones pero cerca de los círculos poderosos de Estados Unidos en capacitación, asesoría y logística, siempre atentos a entrar en acción.

LO NUEVO DEL GOLPE

La usurpación del poder visibilizó la nueva estrategia de los empresarios corruptos, militares ligados al negocio del tráfico de drogas y custodios de los intereses norteamericanos y de empresas transnacionales en el área; asimismo, develó la política de Barack Obama, quien arribó a la presidencia debilitado, sin equipo propio y apuntalado por el “roster” de Bill Clinton, el gestor de la guerra en Irak.

La nueva política operadora de los Estados Unidos hacia la región es la conjugación de acciones de tres actores que venían operando en el área y no habían encontrado la oportunidad de actuar conjuntamente para definir el rumbo de

3 Carmona, Ernesto, 2009, Zelaya los enfrentó temprano: Los “dueños de Honduras” también poseen los medios, parte 1 y 2/ <http://www.argenpress.info/2009/07/zelaya-los-enfrento-temprano-los-duenos.html>.





un país y la región: narcotráfico, pandillas y militares. Hillary Clinton afirmó que construir la arquitectura de cooperación global requiere de herramientas como el Poder Inteligente: “[...] El poder inteligente significa el uso de la inteligencia por todos los medios disponibles. Lo cual incluye nuestra habilidad para acordar y conectar; nuestra fuerza económica y militar; nuestra capacidad empresarial y de innovación; y la habilidad y credibilidad de nuestro nuevo presidente y su equipo. Y también la aplicación del antiguo sentido común para hacer política como una mezcla de principios y pragmatismo”⁴.

En conclusión, la defenestración de Zelaya cuenta con factores de la tradicional Guerra de Baja Intensidad adecuada a los adelantos tecnológicos comunicacionales del Siglo XXI, principalmente con la propaganda del miedo, terror y angustia devenida de la estrategia psicológica; aderezado con alianzas estratégicas con sectores del narcotráfico, empresarios y empresas transnacionales que cuentan con intereses e inversiones en el área, demostrando el poco interés del gobierno norteamericano hacia el combate del narcotráfico, antes por lo contrario, es un aliado en zonas donde hay intereses comunes y propaganda para rearmar Estados serviles para su guerra armamentista, custodios de inversores y enemigos del libre mercado.

Finalmente, es un mensaje abierto y expedito a los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y aún El Salvador, que para detener al enemigo y defender los intereses económicos no escatimará alianzas, esfuerzos ni recursos, porque la nueva política no la define Barack Obama, sino la Reserva federal, el departamento del tesoro y su politiza aliancista con los grandes empresarios, senadores republicanos y demócratas y los cubanos de Miami; por otro sector el Pentágono, con sus tentáculos en el congreso y el Departamento de Estado, que es una incrustación militar de Clinton que nunca cejó por rearmar a Colombia, Perú, Centroamérica y México.

DEL GOLPE A LA RESISTENCIA

El escenario inicial de lucha contra el golpe de Estado en Honduras fue el internacional, no porque así lo orientara el pueblo, sino porque los medios de comunicación, los intereses de las transnacionales, la intencionalidad de la oligarquía nacional y la orientación de la Casa Blanca fue situar el centro del conflicto en la “actitud intervencionista” de Venezuela, con el objetivo de desnacionalizar la resistencia que se estaba constituyendo, restarle espacio

⁴ Hillary Clinton, discurso en el CFR (Council on Foreign Relations), 15 de Julio de 2009.





y no prestarle la caja de resonancia de la articulación de las distintas fuerzas y movimientos sociales al interior del país.

Este involucrar insistentemente al gobierno de Hugo Chávez en Honduras, persistir en una supuesta construcción de intereses político-estratégicos de Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Argentina en Centroamérica creando focos de tensión diplomáticos, revelar las inconsistencias de la OEA para resolver el conflicto y resaltar el músculo de la dictadura de nuevo tipo en América Latina fue la primera etapa de atención al conflicto por parte de los Estados Unidos y los países que se adhirieron a la voz pública de la Casa Blanca.

La dictadura de nuevo tipo contiene: presencia militar en las calles, imposición de toque de queda, acotación de todos los espacios a la oposición, pensamiento único y enseñoramiento de los medios como mediación entre gobierno y sociedad, dado el sitio orientativo en los acontecimientos del día, la información del clima, la vialidad, las decisiones gubernamentales, los haceres prohibidos de la ciudadanía, infunde miedo, siembra terror y atemoriza con su lenguaje petrificado ante la resistencia popular. Asimismo, no desmonta el andamiaje institucional, deja en función el congreso, los juzgados, la estructura judicial, impone la seguridad por medio de la fuerza y cercena las libertades públicas y derechos políticos en aras de una supuesta seguridad democrática. Asume el gobierno todas las facultades y las concentra en el presidente respaldadas por el ejército, el congreso avala todas las iniciativas privatizadoras, maneja los recursos sin fiscalización alguna, los acuerdos y tratados bilaterales, la ayuda militar y las transacciones con organismos internacionales están guardados bajo la discrecionalidad del ejecutivo, las dependencias gubernamentales funcionan bajo la égida del fidecomiso para evitar que las instancias de evaluación y veeduría fiscalicen los recursos y movimientos de dineros, las medidas de emergencias son tomadas de manera impronta, con severidad y con aval de todas las instancias de gobierno afín de esconder el comportamiento golpista y militar.

Ante la novedosa forma de dar golpes de Estado e imponer el nuevo tipo de Estado policial-militar, el pueblo hondureño reaccionó por la vía de convergencia, porque de manera vertical cada movimiento o foco de resistencia podría ser eliminado y anulado. Asimismo, la organicidad de cada fuerza política no satisfacía los márgenes del plan de mediano y largo plazo que los militares golpistas y la oligarquía habían diseñado para desplazar al gobierno de Zelaya.

El Plan llevaba varias orientaciones, las tres mayormente visibles son: 1/Desenganchar a Honduras del “eje del mal” y debitar una mayor relación con el grupo de países del ALBA, cortar de tajo las relaciones con Venezuela y Cuba,





evitar el contagio de la política por habilitar al Estado en ese país y alimentar las acciones futuras en Guatemala y El Salvador. 2/ Experimentar en esta zona vital por la interconexión eléctrica de México y Centroamérica, asegurar el control de la biodiversidad mesoamericana y cercenar la conectividad de Honduras con el sureste mexicano, zona conflictiva y donde reúne el 85% de los municipios más pobres del territorio mexicano, y 3/ Instaurar la nueva forma de dictadura sin ser el caso único en el país centroamericano, pues en otras áreas del subcontinente y el Caribe hay gobiernos con esta línea y forma comportamental como Perú, Colombia, México y Haití.

El Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe es la expresión del sujeto popular insurrecto que, fuera de la estructura partidaria y gremialista tradicional, habilita la caja de herramientas de su historicidad, enlaza acciones colectivas, construye en la represión sistemática hilos identitarios para edificar plataformas de lucha de manera impronta ante el avasallamiento de los militares o cuerpos represores. No es un sujeto etéreo ni negado de trayectoria política, antes por el contrario, cuenta con aprendizajes tradicionales, asimilaciones de distintas forma de lucha, experiencia en movilizaciones y con estrategias de sobrevivencia, la mayoría de las veces ante la represión, y cuando la lucha no ha llegado a puntos de inflexión pasan o reposan en espacialidades de latencias pero habilitables como dispositivos políticos o de resistencia cuando la coyuntura o un nuevo estado de lucha se asoma y muestra signos prolongados.

La revelación del proyecto de la dictadura que considera un control y asentamiento de Estado policial Militar por largo plazo, una vuelta de mayor grado de represión y venta de recursos activos del Estado y el desmantelamiento total de la estructura incipiente de todos los gremios opuestos al modelo depredador de economía vigente, fue el detonante para activar los recursos y dispositivos en la política del sujeto popular.

Es el Frente la estructura valiente, bien posicionada, con vida orgánica, capacidad de combate, movilizadora a lo largo y ancho del país, conectora de todas las demandas sociales, de carácter nacional y permanente en coordinación con la totalidad de municipios en el país, con un discurso de resistencia activa y pacífica y con el objetivo de restituir el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos, sin dejar de lado la confrontación, la defensa de espacios estratégicos, la anulación del agresor e incluso la posibilidad de asumir el enfrentamiento en las mismas condiciones impuestas por el enemigo.

El haber permitido la constitución del Frente marcó la ruta del conflicto, pasó de un golpe militar con intencionalidad de acallar todas las voces y cerrar los





espacios de expresión democrática a una situación de insurrección popular que habilitó a la calle como escenario de confrontación, posicionó a la movilización como el vehículo de divulgación y visibilizó al ejército como actor de la confrontación; reveló a los sujetos insurrectos, robó cámara y así entró el conflicto en los medios de comunicación; el miedo fue desalojado de la subjetividad popular, pudo identificarse claramente el enemigo y desnudó los intereses de los golpistas en el aspecto económico, político y militar.

La respuesta del Frente re-direccionó la lucha y desconectó el discurso de los golpistas de la frecuencia mediática-ideológica instituido desde la oficina del Departamento de Estado norteamericano y el de los republicanos interesados en alejar a Honduras de las influencias del “castrismo-chavista” y abrir una ventana de democracia tutelada.

Hoy ya no está vigente el discurso que involucra a Chávez, ni al grupo de países del Alba; ahora el eje del conflicto va mas allá de la restitución de Mel Zelaya, pasa necesariamente por la nueva Constituyente, el repliegue militar y el reconocimiento del Frente como fuerza política.

ATRAPADOS EN LA AGENDA GOLPISTA

Los golpistas buscaron, en primera instancia, con el desplazamiento del gobierno de Zelaya y su destierro, la eliminación de factor hologramático y desdibujar toda intención de acción colectiva que territorializara la lucha, así que toda la confrontación yacía fuera del espacio nacional.

Dejar sin territorio el motivo de conflicto es construir una espacialidad distinta donde se confronta, es enviar una señal falsa, engañar al enemigo para confrontarlo en el lugar de mayor conveniencia y el espacio escogido fue el mediático.

La estrategia fracasó a la semana de haberse instrumentado, aun cuando contó con soportes del silencio de la Casa Blanca, la reacción tardía del presidente norteamericano B. Obama, la dilatación del tiempo por parte de la representante del Departamento de Estado Hillary Clinton, las gestiones y habilitación de estrategia fuera del orden institucional por parte de congresistas republicanos, intromisión de agentes paramilitares de Colombia, asesores israelíes, incremento de tráfico de armas para proveer las pandillas que colaboran con el crimen organizado y traficantes de drogas contarán con las herramientas capaces de eliminar a miembros del Frente; además, la complicidad de gobernantes, quienes desde el silencio o la evocación de neutralidad indulgente con los golpistas, cerraron los ojos y dieron aval a los asesinatos y persecuciones, encarcelamientos y violaciones de todos los derechos del pueblo hondureño.





El fracaso político tuvo consonancia con la debacle económica del país, negando la pieza discursiva del golpista Roberto Micheletti acerca de un periodo de posible resistencia económica ante la posibilidad de un año de bloqueo.

A partir del golpe del 28 de junio y el escenario de crisis financiera internacional, comprimió el monto de las remesas provenientes de los Estados Unidos en 8.2%; la inversión extranjera directa -IED- pasó de US\$ 405.8 millones en el primer semestre de 2008, a US\$ 274.4 millones en el mismo periodo de 2009. Asimismo, las reservas internacionales sólo han podido cubrir las importaciones para tres meses, mostrando signos de agotamiento en octubre; ahí reside la apertura para el diálogo.

Otro factor que ha debilitado a los golpistas es la decisión de los organismos internacionales: a tres días del golpe de Estado, el Banco Mundial y el BID anunciaron la suspensión de créditos a Honduras, y posteriormente expresaban lo mismo la Comisión Europea, la Cooperación Española, el BCIE, la Cuenta del Milenio, las Naciones Unidas y su retiro de la asistencia al proceso electoral y sucesivamente el resto de la cooperación internacional, todo ello con graves consecuencias si consideramos la necesidad en el ejercicio de la política pública social por el respaldo de estos fondos.

El golpe demoledor para los empresarios fue la alteración del tránsito y tráfico por los puntos limítrofes de los países miembros del SICA (Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua), quienes cerraron sus fronteras durante 48 horas; estos tres países concentran el 19.3% de las exportaciones de Honduras y el 18.9% de las importaciones, o sea que la quinta parte de las compras y ventas de Honduras es comercializado con estos tres países; así, en dos días de paro fronterizo la pérdida en exportaciones fue de 2.85 millones de dólares.

El sector turismo es otro de los afectados con una pérdida estimada de 950 millones de lempiras, además de la contracción del crédito, la industria de la construcción, el transporte, las ventas a crédito, dificultades de transporte aéreo, terrestre, fronterizo, que suman aproximadamente 15 mil millones de lempiras, cifra representativa del 6% del PIB a partir del golpe a la fecha.⁵

El país ha perdido 36.8 millones de dólares diarios y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa acepta el alcance de las pérdidas semanales sufridas a la exorbitante cifra de 3,500 millones de lempiras (182,2 millones de dólares) con efectos en el resto de los sectores económicos, desde el comercio, la industria

⁵ Grupo de Sociedad Civil, www.gsc.hn.





y el sector servicios; hasta quienes secundaron y dieron aliento a la destitución y destierro del presidente Zelaya también son presos del invento golpista.

LA DISPUTA DEL AJEDREZ POLÍTICO

El juego político militar entre América Latina y Estados Unidos se dio en la mesa hondureña; ahí se disputa el destino de nuestros pueblos y la pulseada de Brasil interviene y reta a los gobiernos, quienes intentan aun mantener las aspiraciones neocoloniales.

Aceptar con pasividad y complacencia el golpe de Estado en Honduras, sería la carta de aval requerida por los Estados Unidos para imponer un tipo novedoso de dictadura militar con la confabulación de toda la estructura institucional, que, si bien no desaparece, tampoco juega un papel importante, sólo con la careta democrática pero un régimen impositivo y negador de derechos ciudadanos. Esta iniciativa la han tratado de imponer con el intento golpista del 11 de abril de 2002 en Venezuela, y ahora persiste en Honduras; sin embargo, existen otras modalidades de gobierno con sesgo dictatorial en México, Perú, Colombia y Haití.

Brasil y Venezuela permanecen activos por poner un alto a las políticas intervencionistas, cada gobierno con un perfil distinto, pero la intencionalidad guarda el mismo fin, no más golpes militares y sepultura a la democracia, antes por el contrario, fortalecer la integración, las instituciones y la autonomía de las naciones.

A los 86 días después de habersele derrocado y desterrado, Manuel Zelaya regresa a territorio hondureño tras una jugada sutil, inteligente, bajo una estrategia gramsciana de guerra de posiciones y de movimientos dan jaque mate Brasil y Venezuela, al engañar a los custodios fronterizos e ingresan al presidente derrocado y le dan alojamiento en la embajada de Brasil.

El movimiento estratégico resituó el holograma del motivo de lucha en el territorio, o sea, territorializó la lucha dentro de los marcos de Honduras, ingresó a Manuel Zelaya como actor en la discusión y dialogó por la solución, dado que es parte de conflicto, colocó al Frente como cordón de resistencia para presionar la búsqueda de resolutivos sin renunciar de su demanda por la Constituyente, produjo confrontación y fisura entre el grupo golpista porque los militares fallaron en su papel de custodios y celosos defensores del territorio nacional, los medios de comunicación quedaron sin ser parte de la contienda y vacían de contenido las diatribas que manejaban discursivamente en la programación cotidiana. Además, produjo la división del sector empresarial: algunos piden el diálogo con





severos condicionamientos y otros niegan esa posibilidad rotundamente, como los del sur del país, signo de ruptura a la unidad y apertura de intersticios de divulgación de las voces disidentes y posturas encontradas.

Los militares culpan, bajo una estrategia engañosa y acordada con los empresarios, al grupo de Roberto Micheletti del golpe; asimismo, el empresario dueño del periódico *La tribuna*, Carlos Roberto Facussé, culpa a los militares y los conmina a comparecer ante la justicia para que rindan por el destierro del presidente Zelaya; en fin, es el enredo de la madeja de hilo de la política nacional en busca desesperada de esconder a los protagonistas del golpe, limpiar de toda culpa a los militares y empresarios y enlodar en la medida de lo posible a los políticos, con el fin de QUE, en caso de acordar la restitución de Zelaya, algún sector de los implicados quede dentro del gabinete o estructura gubernamental como Caballo de Troya para controlar los movimientos del presidente legítimo.

En síntesis parcial, aun está en peligro América Latina, los gobiernos que pretenden imponer el Estado de corte policial-militar están activos, algunos lo instalan de facto, otros pretenden hacerlo como en Colombia y Perú y México bajo la política de guerra contra el narcotráfico, esconden las intenciones anti gremialistas y disfrazan sus apetitos privatizadores, depredadores, para vender los recursos naturales estratégicos, prefieren el capital extranjero, despojan a la nación de sus activos públicos y destierran la política publica social.

Honduras es la bisagra de América latina. El panorama indica la opción de o iniciar la apertura de la democratización o entrar en un periodo de luchas y confrontaciones donde la violencia será la música que toque los oídos y alimente los odios para sembrar la guerra.





ANEXO. CUADRO DE FAMILIAS DUEÑAS DE LAS RIQUEZAS DE HONDURAS

DIARIOS, REVISTAS E IMPRENTAS

La Prensa (Jorge Canahuati Larach)
El Heraldo (Jorge Canahuati Larach)
Diez (Jorge Canahuati Larach)
La Tribuna (Carlos Flores Facussé)
Hablemos Claro (Rodrigo Wong Arévalo)
Hablemos Claro Financiera (Rodrigo Wong Arévalo)
As Deportiva (Rodrigo Wong Arévalo)
Cromos (Rodrigo Wong Arévalo)
Estilo (Jorge Canahuati Larach)
Lithopress Industrial (Carlos Flores Facussé)

TV, CABLE, INTERNET Y TELEFONÍA

Grupo Televisión (Rafael Ferrari)
Canal 5 (Rafael Ferrari)
Telecadena, 7y4 (Rafael Ferrari)
Telesistema, 3y7 (Rafael Ferrari)
MegaTV (Rafael Ferrari)
Canal 10 o TEN (Rodrigo Wong Arévalo)
Canal 54 (Jorge Faraj, Camilo Atala)
Multivisión (Rafael Ferrari)
Multidata (Rafael Ferrari)
Multifon (Rafael Ferrari)
Televisión Online (Rafael Ferrari)
Tigo-Celtel (Antonio Tavel Otero)
Telemás (Gabriela Núñez)
45TV, La Ceiba (Rodolfo Irías Navas)
Televisión 8, Tela (Rodolfo Irías Navas)

LAS RADIOS

Emisoras Unidas (Rafael Ferrari)
HRN (Rafael Ferrari)
Radio Norte (Rafael Ferrari)

Suave FM (Rafael Ferrari)
Rock n' Pop (Rafael Ferrari)
Vox FM (Rafael Ferrari)
XY (Rafael Ferrari)
94 FM (Rafael Ferrari)
Radio Satélite (Rafael Ferrari)
Radio Caribe (Rafael Ferrari)
Radio Centro (Rafael Ferrari)
Audiovideo (Miguel Andonie Fernández)
Radio América (Miguel Andonie Fernández)
Radio San Pedro (Miguel Andonie Fernández)
Súper 100 (Miguel Andonie Fernández)
La Moderna (Miguel Andonie Fernández)
Radio La Ceiba (Miguel Andonie Fernández)
Comunicaciones del Atlántico (Rodolfo Irías Navas)
Radio El Patio, La Ceiba (Rodolfo Irías Navas)
Stereo 92, La Ceiba (Rodolfo Irías Navas)
Stereo 102.5, La Ceiba (Rodolfo Irías Navas)
Romántica, 103.5 FM La Ceiba (Rodolfo Irías Navas)
Radio Aguán, Colón (Rodolfo Irías Navas)
92.7 FM, Tela (Rodolfo Irías Navas)
91.5 FM, Tela (Rodolfo Irías Navas)

COMIDAS, BEBIDAS Y CHURROS

Burger King (Familia Kafati)
Little Caesar's (Familia Kafati)
Church's Chicken (Familia Kafati)





Popeyes (Familia Kafati)	Chicharrones del Rancho, limón y picosito (Miguel Facussé Barjum)
Dunkin' Donuts (Familia Kafati)	Mazola, aceite y margarina, manteca Pura (Miguel Facussé Barjum)
Baskin Robbins (Familia Kafati)	Íssima, pasta de tomate La Rojita y Sofrito (Miguel Facussé Barjum)
Pollo Campero (Familia Kafati)	Íssima, salsas para pastas Ranchera (Miguel Facussé Barjum)
Chilli's (Rafael Ferrari)	Íssima, salsas para pastas Tomate y Albahaca (Miguel Facussé Barjum)
Pizza Hut (Jorge Canahuati Larach)	Íssima, salsas para pastas Con hongos y 3 quesos (Miguel Facussé Barjum)
Kentucky (Jorge Canahuati Larach)	Íssima, Ketchup (Miguel Facussé Barjum)
Agua Azul (Jorge Canahuati Larach)	Isssima, sopas de pollo, camarón y resollo Oriental (Miguel Facussé Barjum)
Aquafina (Jorge Canahuati Larach)	Íssima, spaguetti y tallarines (Miguel Facussé Barjum)
Pepsi (Jorge Canahuati Larach)	Íssima, consomé de gallina y de pollo (Miguel Facussé Barjum)
Seven Up (Jorge Canahuati Larach)	Leche Sula (Schucry Kafie)
Mirinda Naranja (Jorge Canahuati Larach)	Leche La Pradera (Schucry Kafie)
Mirinda Uva (Jorge Canahuati Larach)	Leche en polvo Sula (Schucry Kafie)
Teem (Jorge Canahuati Larach)	Malteadas Sula (Schucry Kafie)
Enjoy (Jorge Canahuati Larach)	Jugos de naranja y fruta Sula (Schucry Kafie)
Adrenaline (Jorge Canahuati Larach)	Bebida Fristy Sula (Schucry Kafie)
Gatorade (Jorge Canahuati Larach)	Queso, quesillo, requesón Sula (Schucry Kafie)
Quanty (Jorge Canahuati Larach)	Queso Cheddar, Gouda, Edam y Pecorino Sula (Schucry Kafie)
Be-Light (Jorge Canahuati Larach)	Mantequilla crema Sula (Schucry Kafie)
Link (Jorge Canahuati Larach)	Margarina Sula (Schucry Kafie)
SoBe Energy (Jorge Canahuati Larach)	Mozarella Sula (Schucry Kafie)
Té Lipton envasado (Jorge Canahuati Larach)	Yogurt Sula (Schucry Kafie)
Yummies Zambos, tajaditas y yuquitas (Miguel Facussé Barjum)	Yogurt Gaymonts y Lait (Schucry Kafie)
Yummies Ranchitas, nachos y jalapechos (Miguel Facussé Barjum)	Agua Sula (Schucry Kafie)
Cappy, maíz con queso, gorditos y tornitos (Miguel Facussé Barjum)	
Zibas, papas y anillitos de papa (Miguel Facussé Barjum)	
Ziba's Costi Rica, papas fritas (Miguel Facussé Barjum)	
Ziba's francesa, papas a la francesa (Miguel Facussé Barjum)	
Taco del Rancho, picante, jalapeño y barbacoa (Miguel Facussé Barjum)	



Frutas y vegetales Última (Miguel Facussé Barjum)

BANCOS, CORPORACIONES, CONSORCIOS Y MANUFACTURAS

Grupo Ficohsa (Jorge Faraj Rishmagüi, Camilo Atala Faraj)

Banco Ficohsa (Jorge Faraj, Camilo Atala)

Interamericana de Seguros (Jorge Faraj, Camilo Atala)

Ficohsa Express (Jorge Faraj, Camilo Atala)

PSI, Proyectos y Servicios Inmobiliarios (Jorge Faraj, Camilo Atala)

Dicorp, divisas corporativas (Jorge Faraj, Camilo Atala)

Fundación Ficohsa (Jorge Faraj, Camilo Atala)

Grupo Terra (Freddy Nasser)

Asin (Miguel Andonie Fernández)

Grupo Roble (Ricardo Maduro Joest)

Fondo Hondureño de Inversión Turística (Bahía de Tela) (Rafael Ferrari)

Teletón (Rafael Ferrari)

Grupo Dinant, antes Corporación Cressida (Miguel Facussé Barjum)

Químicas Magna (Miguel Facussé Barjum)

Cressida Industrial (Miguel Facussé Barjum)

Químicas Láser (Miguel Facussé Barjum)

Alimentos Dixie (Miguel Facussé Barjum)

Lactohsa (Schucry Kafie)

Corinsa (Jorge Canahuati Larach)

Grupo Televisión (Rafael Ferrari)

Emisoras Unidas (Rafael Ferrari y Villeda Toledo)

Audiovideo (Miguel Andonie Fernández)

Exportadora del Atlántico (Miguel Facussé Barjum)

Embotedallora de Sula (Jorge Canahuati y Jorge Larach)

Comunicaciones del Atlántico (Rodolfo Irías Navas)

Fundación Covelo (Adolfo Facussé)

Banco Covelo (Adolfo Facussé)

ENERGÍA Y COMBUSTIBLE

Emce (Freddy Nasser)

Enersa, planta termoeléctrica (Freddy Nasser)

Río Blanco, planta termoeléctrica (Freddy Nasser)

Lufussa, planta termoeléctrica (Schucry Kafie)

Elcosa, planta termoeléctrica (Freddy Nasser)

Petróleos de Honduras (Hondupetrol) (Freddy Nasser)

Gasolineras Uno (Freddy Nasser)

Empresa Transporte y Maquinaria (Tramaq) (Freddy Nasser)

Energía y Transmisión (Enetran) (Freddy Nasser)

Semeh (Rafael Ferrari, Arturo Corrales)

Dinapower, biocombustible (Miguel Facussé Barjum)

Mall, súper, tiendas y accesorios

Supermercado La Colonia (Mario Faraj)

Jestereo (Ricardo Maduro Joest)

La Curacao (Ricardo Maduro Joest)

Tropigas (Ricardo Maduro Joest)

Mall Multiplaza (Ricardo Maduro Joest)

Diunsa (Mario Faraj)



Eleganza (Jorge Canahuati Larach)

Jorge J. Larach & Cía. (Jorge Canahuati Larach)

Comercial Larach (Jorge Canahuati Larach)

Proconsumo, (Kiwi, chimicol) (Miguel Andonie Fernández)

Xedex (Miguel Facussé Barjum)

Audaz (Miguel Facussé Barjum)

Ganex (Miguel Facussé Barjum)

MEDICINAS Y FARMACIAS

Laboratorios Finlay (Jorge Canahuati)

Infarma (Miguel Andonie Fernández)

Mandofer (Miguel Andonie Fernández)

Farmacia Regis (Miguel Andonie Fernández)

TEXTILES Y MAQUILAS

Grupo Lovable (Juan Canahuati, Jesús y Mario)

Textiles Río Lindo (Adolfo Facussé)

HOTELES

Intercontinental (Ricardo Maduro Joest)

TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE

Inter Airports (Freddy Nasser)

Tupsa (Roberto Micheletti Baín: dueño de algunos buses)

Trasul, (Roberto Micheletti Baín)

EQUIPO DE FÚTBOL

Olimpia (Rafael Ferrari)

Motagua (Camilo Atala y Pedro Atala)

Selección de Honduras (Rafael Ferrari, Atala, Callejas, Faraj, Kaffati)

BIBLIOGRAFÍA

Carmona, Ernesto, 2009, "Zelaya los enfrentó temprano: Los 'dueños de Honduras' también poseen los medios", parte 1 y 2, <http://www.argenpress.info/2009/07/zelaya-los-enfrento-temprano-los-duenos.html>.

Carotenuto, Gennaro, 2009, "El sicario de Roberto Micheletti: historia del torturador Joya Améndola, brazo derecho del Presidente 'de facto'", en dossier especial sobre golpe de Estado en Honduras.

Grupo de Sociedad Civil, 2009, Impacto económico del golpe de Estado, www.gsc.hn leído el 7 de octubre de 2009.

Hillary Clinton, discurso en el CFR (Council on Foreign Relations), 15 de Julio de 2009.

Lecturas semanales en www.insumisos.com.

Salazar, Robinson, 2002, "Los avatares del Plan Colombia, Plan Dignidad y el Plan Puebla Panamá", <http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/avatares.pdf>.





NOTAS SOBRE LA POST-CONVERTIBILIDAD:

LOS LÍMITES A LA MEJORA EN LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS SECTORES
POPULARES

Juan Fal, Germán Pinazo**
y Juan F. Lizuáin****

El kirchnerismo, a nuestro entender, se definió en el escenario político como la ruptura y superación del proyecto neoliberal que había logrado imponerse durante los '90. Así, sobre la base de ciertos cambios macroeconómicos, se movió casi en las antípodas de sus predecesores en materia de derechos humanos y política internacional, y cargó sus intervenciones públicas de referencias al viejo capitalismo nacional y productivo; en clara alusión al período pre-dictadura militar.

Sobre la base de la recuperación del empleo y el producto industrial, el kirchnerismo articuló un discurso que hace hincapié en la famosa relación virtuosa crecimiento-empleo-salario.

* Licenciado en Economía (UBA). Doctorando en Ciencias Sociales (FLACSO). Investigador-docente asistente del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investigador de la Fisyp.

** Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestría en Economía Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (tesis en curso). Investigador-docente asistente del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investigador de la Fisyp.

*** Estudiante de Ciencias Económicas (FCE-UBA). Miembro de FISyP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas).





La industria no es solamente producir “fierros” o tener obreros; producir, ser industrial es apostar al valor agregado, es apostar a tener cada vez más trabajadores, más calificados y mejor pagos que además impulsen el mercado interno, el consumo, y entonces construyan lo que es el círculo virtuoso de la economía y del verdadero capitalismo.¹

Frente al avance del sector agropecuario en 2008, y al reordenamiento “por derecha” de la oposición, gran parte del arco progresista se articuló detrás del proyecto oficial. Desde la defensa vinculada al rol interventor del Estado, hasta el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo, una gran variedad de intelectuales y economistas advierten sobre la necesidad de fortalecer la etapa actual.

Nuestro propósito es intentar discutir con aquellos sectores que defienden el discurso oficial², a partir de las inconsistencias que podemos observar vinculadas a la “pata económica” del proyecto encarnado por el gobierno. Nos parece que la defensa en general del modelo productivo actual descansa en la representación de un capitalismo que hoy no existe. Más específicamente, de un capitalismo que, como en el período de desarrollo por sustitución de importaciones, permitía pensar en una especie de “círculo virtuoso cerrado” a escala nacional. En este sentido, intentamos abordar críticamente la idea de que el actual esquema, basado en un crecimiento industrial mercado internista, ha sido central en la recuperación económica, permitiendo, de esta manera, garantizar cierta recuperación y bienestar del sector asalariado.

Intentaremos entonces mostrar dos cosas en relación a lo anterior. En primer lugar, en tanto la estructura económica argentina se encuentra desarticulada, con bajos niveles de inversión y en franca competencia con países de bajos salarios (China e India), no es posible pensar en una relación virtuosa entre salario y ganancia mediada por el mercado interno. En otras palabras, dado que el núcleo articulador del crecimiento industrial (al menos de aquellos comportamientos que permiten hablar de ruptura con la convertibilidad) descansa en una burguesía escasamente vinculada con la generación de empleo; y que, por el contrario,

1 Discurso de Cristina Fernández, marzo de 2009.

2 Incluimos a aquellos que incluso tienen una posición crítica en relación a muchas dimensiones de la práctica política oficial, o que incluso tienen manifiestas diferencias ideológicas con el peronismo. Al respecto, ver la entrevista al Ministro de Trabajo Tomada, C. (*Página/12*, 31/05/09); Frenkel, R. (*La Nación*, 10/02/08); Heller, C. “Necesitamos un modelo de desarrollo que sea equilibrado, sustentable y de justa distribución de la riqueza” (nota publicada en <http://www.carlosheller.com.ar>, 2009); Piumato, J. (nota publicada en <http://ar.news.yahoo.com>, 29/04/2009); CEP, 2007; Felletti, R. (*Página/12*, 7/6/2009).





aquella que sí lo está es marginal en términos de “las nuevas dinámicas productivas” y en términos de la recomposición salarial, es necesario repensar las bases de un proyecto alternativo que incluya la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.

UN BREVE REPASO POR EL PERÍODO DE LA POST-CONVERTIBILIDAD

El período de crecimiento 2002-2008 se ha caracterizado por cuatro cuestiones fundamentales que lo distinguen de otros períodos de crecimiento: los sectores que motorizan dicho crecimiento, su relación tanto con el empleo asalariado como con el salario, y su vinculación con el comercio exterior de mercancías.

La devaluación de 2002, como ya han mostrado diversos autores³, no solo abrió un período donde el nivel de actividad creció a un ritmo ininterrumpido del 8% durante 5 años (lo cual de por sí supone un hecho inédito), sino donde además se modificaron las dinámicas relativas de los sectores que motorizaron dicho crecimiento. A grandes rasgos, la producción de bienes ganó terreno sobre los servicios, que se habían constituido en el principal dinamizador del crecimiento durante los '90, y en ese contexto la industria manufacturera en particular mostró desempeños que parecían olvidados en los últimos 30 años de nuestra historia.

Lo interesante fue observar que, por primera vez en mucho tiempo, sectores como la producción de maquinaria y equipos, particularmente golpeados desde la última dictadura militar, registraron niveles de crecimiento por encima del agregado sectorial, en contextos donde, además, la actividad manufacturera en su conjunto se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento total.

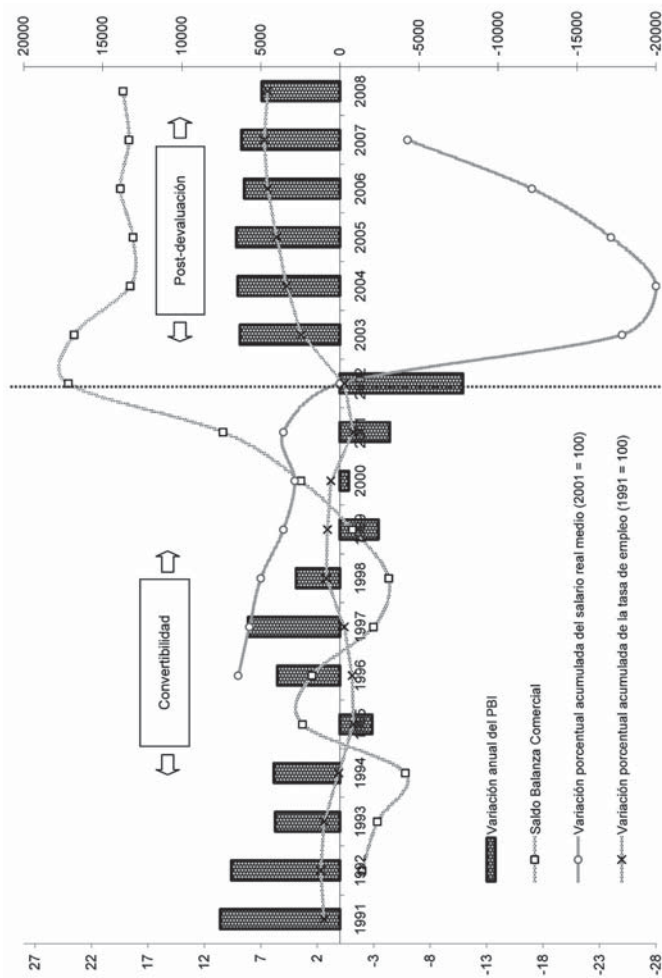
El segundo rasgo distintivo del período bajo análisis estuvo dado por la relación entre crecimiento y empleo. A diferencia de lo que ocurriera en otros períodos de crecimiento de nuestra historia reciente, donde aumentos de producto no generaban expansiones del empleo, durante el período 2002-2008 estos sectores dinámicos estuvieron ligados a una fuerte generación de empleo asalariado que, en una segunda instancia, supuso una importante recomposición del salario real.

3 Schorr, M. (2005), *Modelo nacional industrial. Límites y posibilidades*, Claves para todos, Buenos Aires; Arceo, N., Monsalvo, A. y Wainer, A. (2007), “Patrón de crecimiento y mercado de trabajo”, en revista *Realidad Económica*, N° 226, Buenos Aires; Fernández Bugna, C. y Porta, F. (2008), “El crecimiento reciente de la industria Argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural”, en revista *Realidad Económica*, N° 233, Buenos Aires.





GRÁFICO N° 1:
EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL PBI, DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL Y DE LA TASA DE EMPLEO Y SALARIO MEDIO REAL. 1991-2008.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Secretaría de Política Económica y la EPH (INDEC)



Durante el período 2002-2007, la industria y la construcción explicaron casi el 50% de los nuevos puestos de empleo asalariado, en un contexto donde la tasa de empleo creció un 3,79% anual acumulativo, ubicándose en su techo histórico de los últimos 30 años. La industria en particular, que en 2003 explicaba aproximadamente el 11% del universo asalariado, explica por sí sola el 22% de los nuevos puestos de trabajo, y el 25% de los nuevos puestos registrados.

En términos comparativos, mientras el 70% de los puestos de empleo generados en la industria durante el período son registrados, el 65% de aquellos generados en la construcción son “en negro”. El correlato de este comportamiento se observa en la dinámica de los salarios: mientras el salario real creció un 35% en la construcción entre 2003 y 2006, en la industria lo hizo un 40%, ubicándose, además, un 44% por encima del primero en términos de poder adquisitivo.

Finalmente, el desempeño del sector externo es otro de los elementos novedosos del período. El comportamiento contracíclico del comercio exterior de mercancías es, y ha sido, uno de los rasgos centrales de nuestro país, que durante las últimas décadas de liberalismo comercial y financiero se ha agudizado. De un modo casi “milagroso”, la devaluación de 2002 ha modificado dicho patrón de comportamiento, a tal punto que los 6 años de crecimiento económico ininterrumpido (a tasas promedio superiores al 8%), transcurridos entre 2003 y 2008, han sido acompañados de robustos superávits de balanza comercial, que han permitido mantener con holgura la política cambiaria del gobierno. Esto ha hecho repensar en los ciclos de *stop and go* y a vincularlos con dinámicas estrictamente pasadas.⁴

En resumidas cuentas, el sector industrial fue clave en la explicación del nuevo crecimiento por varios motivos: explica gran parte del nuevo empleo generado (en mejores condiciones formales que la construcción), ha sido central en la recuperación del salario medio, y es el sector casi excluyente en términos del comercio exterior de mercancías (es decir, en el comportamiento del superávit comercial). Además, lo interesante es que esto contrasta fuertemente con la mayor parte de nuestros últimos 30 años. Entonces, a nuestro entender, es que a partir de estos “datos de la realidad” se han reavivado categorías y discusiones que parecían olvidadas. Fundamentalmente, muchos han visto en la actual coyuntura una posibilidad histórica de reeditar un proyecto de desarrollo que permita compatibilizar crecimiento económico, empleo y mejoras salariales, como sucediera en los años previos al Proceso de Reorganización Nacional.

⁴ Centro de Estudios para la Producción, 2007.





Ahora bien, a nuestro entender esta reedición no resiste un análisis más profundo de estos mismos datos, fundamentalmente, porque no existe algo así como un sector industrial homogéneo⁵. Los sectores cuyo desempeño explica gran parte de los nuevos “éxitos macroeconómicos”, no son aquellos que están detrás de la recuperación del empleo, y, de hecho (sin exagerar demasiado), son los mismos que crecieron en los ’90; mientras que, aquellos que efectivamente lo están, parecen evidenciar escasos síntomas de sustentabilidad.

EL MERCADO INTERNO Y EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL ARGENTINO

La actual discusión sobre la posible sinergia entre el crecimiento industrial y las mejoras en las condiciones de empleo y salario, encuentra un correlato en lo sucedido durante la etapa caracterizada por la sustitución de importaciones. Durante este período, el uso intensivo de mano de obra y el carácter mercado internista de los bienes producidos imprimieron un carácter peculiar al proceso de industrialización: la expansión de la actividad industrial derivaba en el aumento del empleo (en muchos de esos años) y en la suba de los salarios, que estimulaban el desarrollo del mercado interno y el aumento de la actividad industrial, conformando un círculo “virtuoso” en el proceso de acumulación. Fue a partir de esta evolución económica que la estructura social se vio modificada, y la Argentina transitó sus años de mayor igualdad en términos distributivos⁶.

Estos cambios hicieron pensar en la existencia de cierta “complementariedad”⁷ de intereses entre una burguesía (tanto nacional como extranjera) orientada al

5 Cuando decimos que el sector industrial no es homogéneo, hacemos referencia a las marcadas diferencias al interior de los agentes que se dedican a la actividad manufacturera. Diferencias que, como veremos, tienen que ver tanto con su aporte en términos de nivel de actividad, como con su relación con el mercado externo, la demanda de mano de obra y el salario.

6 El desempeño del sector manufacturero tendió a marcar el ritmo del proceso de crecimiento del empleo y el salario para el conjunto de la economía (Marshall, 1975, “Mercado de trabajo y crecimiento de los salarios en la Argentina”, en revista *Desarrollo Económico* n° 59), y el salario logró la mayor participación en el PBI agregado de toda la historia argentina.

7 Por complementariedad entendemos que dada la orientación mercado internista de la producción y la alta participación del salario en el ingreso, el salario constituía una condición de posibilidad importante de realización de la ganancia capitalista. Esta última cuestión no excluye el carácter intrínseco de la relación capital-trabajo propio de toda sociedad capitalista. En este mismo sentido, vale citar el trabajo de Schorr, M. (2001), “¿Atrapados sin salida? La crisis de la convertibilidad y las contradicciones en el bloque dominante”, Área de Economía y Tecnología de Flasco, Buenos Aires, el cual señala: “Cabe desatacar que durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones la disminución de las remuneraciones de los trabajadores, así como el aumento del desempleo y la inequidad distributiva, se encontraban estructuralmente limitados. *Ello por cuanto los salarios constituían un costo empresario, pero también un elemento central de la demanda interna* (tanto para las grandes firmas como para el resto del espectro empresario)”. Un análisis





mercado interno y la clase trabajadora. Sin embargo, la llegada de la dictadura militar en 1976 desarticuló las bases del proceso anterior. La apertura asimétrica del mercado de bienes, junto a la reforma financiera de 1977, abrieron un período histórico donde la estructura productiva se reordenó en torno a un reducido grupo de actividades ligadas al aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales de nuestro país. En este esquema no sólo se desarticuló políticamente la clase trabajadora industrial, sino que arrastró consigo a todo el universo de asalariados, en un proceso que incluyó el incremento sistemático de los índices de desocupación, pobreza y miseria.

Modificada las relaciones de fuerza, la argentina transitó, durante las décadas de los 80 y los 90, por un sendero caracterizado por la caída permanente del producto industrial y la desarticulación productiva, cuya principal consecuencia se encuentra en la debilidad económico-política de la clase trabajadora.

Ahora bien: el período abierto con la caída de la convertibilidad, en tanto supuso el crecimiento del sector industrial y la generación de empleo, reinstaló el debate sobre la posibilidad de reproducir un modelo con ciertas características de la etapa mercado internista.

Ciertamente, tanto el desempeño agregado del sector, como las ramas que a su interior han motorizado dicho desempeño, han supuesto un importante cambio en relación al período abierto con la dictadura militar. Entre 1976 y 2001 encontramos como primera cuestión que el PBI sectorial cayó de manera casi constante, hasta alcanzar una participación en el nivel de actividad agregado cercana a los valores de la época de la economía agroexportadora. En ese contexto, además, tendieron a ganar participación dentro del entramado industrial aquellas ramas ligadas al aprovechamiento de ventajas comparativas naturales⁸.

Esta reprimarización del aparato productivo derivó en una caída estrepitosa del empleo asalariado industrial y del salario. Entre 1974 y 1994, según los censos

pormenorizado de estas cuestiones también se puede encontrar en Arceo, E. y Basualdo, E. (1999), "Las tendencias a la centralización del capital y la concentración del ingreso en la economía argentina durante la década de los noventa", en revista *Cuadernos de Sur*, N° 29, Buenos Aires. En clara alusión a la dinámica del sistema capitalista, Aglietta, M (*Regulación y Crisis del Capitalismo*, México, Siglo Veintiuno, 1991) señala que el proceso de acumulación exige, a su vez, para sortear las crisis de realización, una elevación, por diversas vías, de los salarios reales y una acción consecuente del Estado a tal efecto.

8 Si en 1976 la producción de alimentos y bebidas explicaba el 20% de la actividad industrial, para el 2001 pasó a representar el 34% de la misma. Paralelamente, la producción de maquinaria y equipos, que en el primero de los años explicaba aproximadamente el 22,5% de la producción total, pasó a explicar hacia fines de la convertibilidad apenas el 7%.





económicos, la industria perdió más de una tercera parte de sus empleados, mientras el salario real se contrajo un 40%⁹.

Es en este marco donde el desempeño macroeconómico de la post-convertibilidad ha llamado tanto la atención. Por primera vez en 30 años se registró un aumento de la participación industrial en la economía agregada, en un contexto donde la misma ha crecido a tasas del 8% promedio. Además, las ramas dinámicas de dicho incremento no sólo fueron la contracara de períodos anteriores, sino que, desde una participación relativamente pequeña, motorizaron el crecimiento de la actividad en su conjunto, logrando en este sentido recuperar parte de la participación perdida en décadas anteriores.

Ahora bien: cuando complejizamos el análisis, encontramos que detrás de estos niveles de crecimiento existen fuertes líneas de continuidad con períodos anteriores. En casi todas las ramas del entramado industrial, el peso de los importados sobre lo que se consume en el país de dichos productos ha ido creciendo sistemáticamente desde la devaluación, y excede holgadamente los valores de la convertibilidad (ver gráfico N° 2). Esto, especialmente en las ramas dinámicas de crecimiento, que a su vez funcionan proveyendo al resto de los sectores del entramado industrial, sugiere que, antes que revertirse, parece haberse profundizado el proceso de desarticulación que tuvo lugar en las últimas décadas.

Dos ejemplos son ilustrativos al respecto: el de la producción de maquinaria y equipos y el de la industria automotriz. La producción de maquinaria y equipos funciona, de alguna manera, como un indicador importante a la hora de analizar el grado de integración del aparato productivo¹⁰. Ahora bien, si bien ésta ha sido una de las actividades más dinámicas en nuestro país durante los últimos años, lo fue por orientarse hacia el mercado externo, satisfaciendo de manera sistemática una parte cada vez menor de los requerimientos productivos locales (gráfico 2)¹¹.

El correlato de lo anterior se encuentra en el comercio exterior de manufacturas industriales. Si bien la tendencia sistemáticamente deficitaria que había exhibido el patrón de convertibilidad se vio revertida drásticamente a partir de la devaluación, es posible encontrar que el superávit post-convertibilidad se ha ido

9 Ferreres, O. (2004), *Dos Siglos de economía Argentina, 1810-2004*, Ateneo, Buenos Aires.

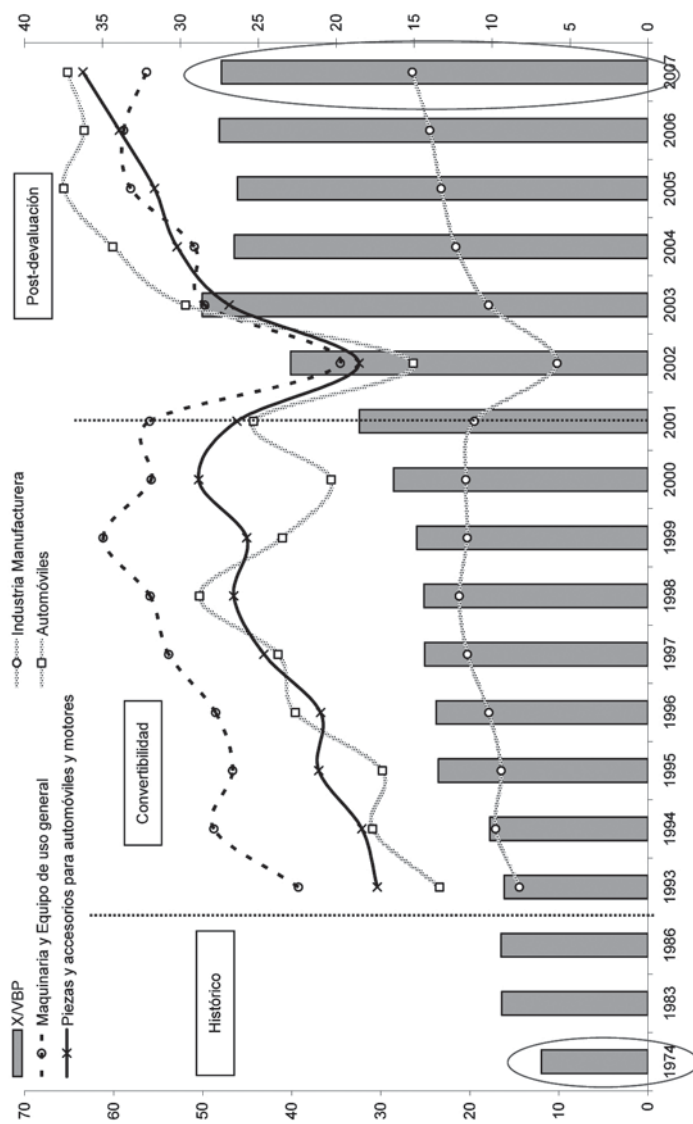
10 González, J. (2005), "Cambios en la estructura industrial, 1993-2003", DT n° 1 INTI.

11 En 2007, el 56% del consumo de maquinaria y equipo de uso general (es decir, excluyendo los tractores y otros similares) es satisfecho con producción importada, lo cual supera, sensiblemente, el 55% registrado durante el último año de crecimiento en la convertibilidad (lo cual es sustantivo, dado que la convertibilidad representó un pico en la incidencia de los productos industriales importados).





GRÁFICO Nº 2:
EVOLUCIÓN DEL PESO DE LAS IMPORTACIONES SOBRE EL CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS (Y PRINCIPALES RAMAS SELECCIONADAS), Y DE LAS EXPORTACIONES SOBRE EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 1993-2007



Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEP y Azpiroz, D., La industria argentina: desarrollo y cambios estructurales, Centro Editorial de América Latina, 1989.



erosionando hasta volverse deficitario en 2007 y 2008. Para 2007, sólo en cuatro ramas industriales el volumen de exportaciones supera al de importaciones (en 2002, eran 11 de un total de 22), y, particularmente, la demanda de maquinaria y equipo importada supera, en 2007 y a dólares corrientes, en un 30% el pico del período de la convertibilidad (1998), explicando, en gran medida, el déficit agregado del comercio exterior de manufacturas¹².

¿Qué queremos significar con todo lo anterior? Básicamente, que el proceso de crecimiento industrial muestra fuertes limitaciones que hacen pensar más en un proceso de continuidad que de ruptura. La protección efectiva derivada de la devaluación del 70% de la moneda, fue resultado de la inédita coyuntura internacional, que motorizó de manera directa e indirecta gran parte del crecimiento de la actividad económica. En este contexto, y sobre la base de un salario real que tocó pisos históricos en 2002, la industria ha crecido incorporando una gran cantidad de mano de obra. Ahora bien: este crecimiento no ha supuesto un proceso de sustitución de importaciones¹³, ni ha modificado el proceso de desarticulación sectorial del entramado industrial, ni ha modificado el comportamiento marcadamente heterogéneo de los actores que intervienen en el sector. Y no lo ha hecho, básicamente, porque no ha habido ningún tipo de política pública que así lo estimule (las políticas de promoción han tendido a favorecer a las grandes firmas exportadoras a través del financiamiento de proyectos productivos, cuyo impacto en el nivel de empleo no resultó significativo¹⁴) y porque las lógicas de valorización del capital se han visto modificadas (cuestión que retomaremos mas adelante).

12 Con la producción automotriz sucede algo similar. Durante la segunda ISI, la industria automotriz se había constituido en un sector altamente integrado. Gracias a distintos regímenes de estímulo y protección, se habían logrado fabricar en el país desde automóviles para consumo final, hasta motores diesel para camiones, pasando por toda una variedad de maquinaria y equipos que se habían desarrollado a la par y como complemento de la misma. El esquema de incentivos vigente hacía que el crecimiento de la rama productora de material de transporte, dado su grado de integración vertical, estuviese vinculado con el desarrollo del resto de las ramas que conformaban la metalmecánica. Hoy sucede lo contrario. Si bien la industria automotriz se ha constituido, como antaño, en el motor del crecimiento industrial (explica el 30% de nuevo valor agregado entre 2003 y 2007), lo ha hecho sobre la base de una producción totalmente desarticulada. El 60% de lo producido localmente en materia de vehículos en 2007 tiene como destino el mercado externo. Paralelamente, el 63% de las piezas y accesorios que se consumen en la fabricación de vehículos y motores es importado (lo cual supera en un 36% el pico de 1998).

13 De hecho, si observamos en las fichas sectoriales del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Economía, encontraremos que desde la devaluación ha crecido el peso de los productos importados en lo que se consume internamente de los mismos, en la mayoría de las ramas, hasta superar en 2007 el máximo de la convertibilidad.

14 Para mayor información, véase Azpiazu, D. y Schorr, M. (2009), *“La industria en la spot-convertibilidad, ¿cambio estructural o fase de reactivación?”*, FETIA, 2008. O Azpiazu, D., entrevista en IADE, www.iade.org.ar.





A nivel agregado, la industria exhibe los mismos déficits de comercio exterior que históricamente la han condicionado, con la novedad de que hoy se encuentra orientada al mercado externo como nunca lo estuvo. En 2007, el 27% de todo lo producido se exportó (en 1973 era el 6,8%), y el 26% de todo lo consumido fue importado (superando el pico de 21% que había registrado el último año de crecimiento de la convertibilidad).

Otro elemento importante a la hora de analizar la vinculación entre el nivel de actividad y el mercado interno, y, fundamentalmente, la complementariedad de intereses entre la clase trabajadora y la burguesía industrial, está dado por el peso de la masa salarial en la demanda interna. Hemos visto que el peso de la demanda interna en el valor bruto de producción industrial ha disminuido significativamente en términos históricos durante la convertibilidad y, fundamentalmente, luego de la devaluación; lo interesante es que, además, el peso de la masa salarial en el consumo interno privado es de los más bajos en la historia.

Como vemos en el gráfico N° 3, el peso de la masa salarial en 2007 (máximo de la serie post-convertibilidad) se ubica a casi 20 puntos porcentuales de distancia del promedio del período 1950-1980 (35% frente a 52%). Esto parecería sugerir que hoy, a diferencia de lo que ocurriera durante la ISI¹⁵, la producción industrial se encuentra lejos de estar orientada al consumo de la clase trabajadora, y que, de hecho, no es el incremento en el poder adquisitivo de su salario lo que ha permitido la realización de la ganancia capitalista.

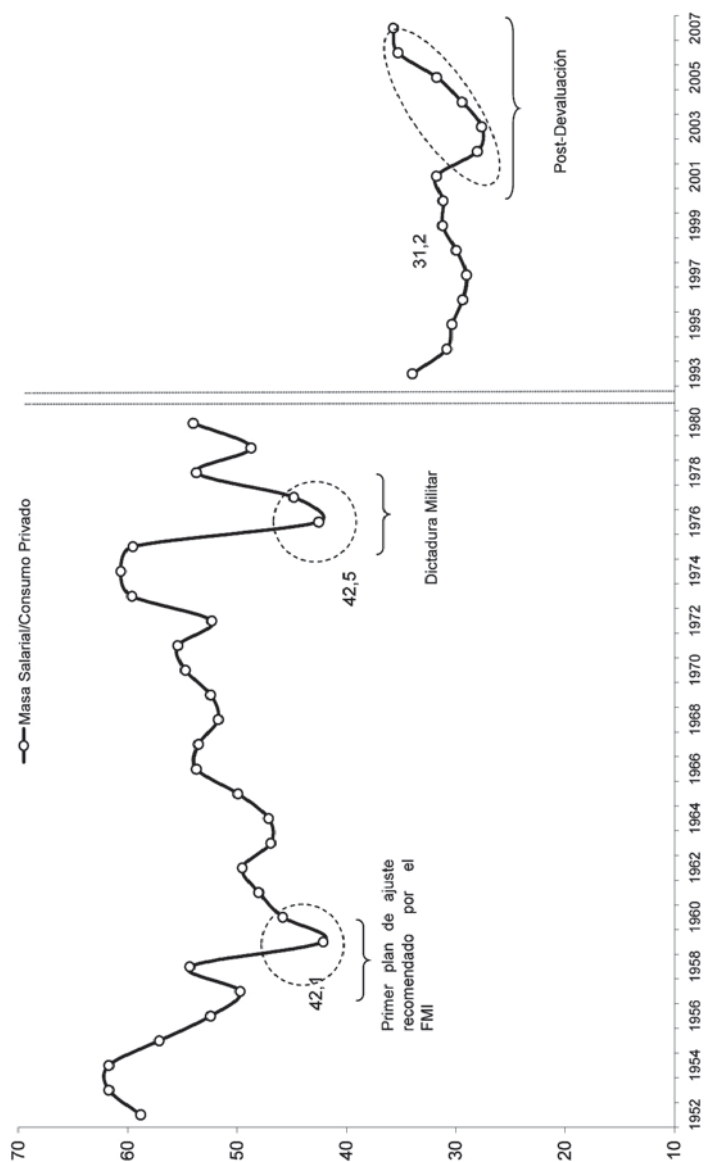
En este sentido, quizás el ejemplo más claro sea la industria automotriz. Siendo el sector más importante en la explicación del nuevo crecimiento sectorial (30% de lo generado entre 2003 y 2007), no sólo exporta el 60% de lo que produce, sino que no genera eslabonamientos productivos al interior del entramado productivo local, y no ha sido el motor, en este sentido, del crecimiento del empleo asalariado,¹⁶ y por lo que se puede apreciar a partir de la evolución de sus precios, no depende de la evolución del salario para colocar su producción.

¹⁵El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, como su nombre lo indica, consiste esquemáticamente en el desarrollo local de un aparato industrial integrado con el propósito central, entre otros, de sustituir producción importada por local. Fue, de alguna manera, la base material del "Estado de Bienestar" en la Argentina, en la medida en que el crecimiento de burguesías que se valorizaban a escalas nacionales permitía la generación de empleo asalariado que, a su vez, constituía la base fundamental de su demanda.

¹⁶Para más información en este sentido ver Santarcangelo y Pinazo (2009), "Una interpretación crítica al proceso de reindustrialización en la posconvertibilidad: el caso del sector automotriz", Segundas Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios.



GRÁFICO N° 3
RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE MASA SALARIAL Y CONSUMO PRIVADO



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Marshall y Cortes, "Salario real, composición del consumo y balanza comercial", en Desarrollo Económico n° 101 (1986) y la DNGN (INDEC).



A modo de síntesis, podemos señalar que, si bien analizando sus variables agregadas se puede inferir cierta ruptura con el período de la convertibilidad (fundamentalmente en lo que refiere a los sectores que explican el crecimiento); existen profundas continuidades que tienen que ver tanto con el grado de desarticulación del entramado, con su vinculación con el sector externo, y, fundamentalmente, con su vinculación con el empleo asalariado. Esto nos permite afirmar que, si bien el crecimiento de la actividad industrial ha incidido de manera directa sobre la recuperación del empleo¹⁷, esto no ha supuesto un importante proceso de sustitución de importaciones, y menos aún uno que haya sido liderado por el consumo de los sectores populares.

En lo que sigue intentaremos identificar más precisamente cuáles han sido los sectores que han venido impulsando el empleo industrial, para precisar mejor cuál es su rol en el actual modelo de dólar caro.

LÍMITES DE LA PYME COMO SECTOR DINAMIZADOR DEL ACTUAL PROCESO DE RECUPERACIÓN.

Lo señalado hasta aquí nos obliga a preguntarnos sobre las actividades generadoras del empleo y sobre las condiciones y límites que éstas presentan a la hora de garantizar mejoras en las condiciones de vida del sector asalariado. En relación al primer interrogante, los resultados son contundentes: el 85 % del nuevo empleo industrial fue generado por el sector de la pequeña y media empresa (PYME)¹⁸. Este dato es en sí mismo una novedad en relación con los noventa, y ha sido considerado central por diferentes sectores progresistas a la hora de valorar positivamente el actual modelo.

La interpretación podría ser la siguiente: en tanto el sector PYME es tradicionalmente trabajo intensivo (y está íntimamente vinculado con el mercado interno), un modelo productivo que estimule a dicho sector es políticamente deseable. De alguna manera, basándonos en la hipótesis planteada al principio de este trabajo, podemos decir que la PYME podría ser vista hoy como un sujeto homologable a la vieja burguesía nacional¹⁹, y, en este sentido, podríamos estar en presencia

17 La elasticidad empleo-producto durante los años de crecimiento de la post-convertibilidad ha sido de 0,43, más que triplicando el 0,13 de los años de crecimiento de la convertibilidad.

18 Por PYME entendemos a todas aquellas industrias que concentran entre 1 y 200 empleados.

19 En su libro (2006) *Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Flacso-Siglo XXI, Buenos Aires, Eduardo Basualdo define a la burguesía nacional como aquel sujeto que, en el período de la ISI se encontraba orientado al mercado interno y no diversificado.





de un sujeto productivo con intereses objetivos complementarios a los de la clase trabajadora.

Adicionalmente, en una primera aproximación a la cuestión, se encuentra el comercio exterior, el cual muestra una diferencia importante con las grandes empresas: sólo el 11% de las PYMES exportó en 2008 más del 5% de su producción²⁰. Esto podría llevar a pensar que, en tanto el destino mayoritario de su producción se dirige al mercado interno, puede existir una cierta complementariedad entre las ramas productoras de bienes y el sector asalariado. Sin embargo, el sector presenta ciertas características que ponen en duda el entuerto planteado. A partir de lo observado en el gráfico N° 3 vemos que pese a haber crecido la masa salarial sobre el consumo privado durante los últimos años, ésta se encuentra en pisos históricos; y dicha importancia disminuye aún más si consideramos el fenómeno de la heterogeneidad salarial que comienza a gestarse durante los años noventa en favor de los cargos gerenciales y en detrimento de los sectores populares. En este sentido, de existir, a nuestro entender, la vinculación entre la PYME y la clase trabajadora habría ocupado un lugar más que marginal en el nuevo crecimiento económico.

Otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con el grado de sustentabilidad de las actividades vinculadas con el segmento PYME. Si bien no son actividades exportadoras, gran parte de ellas compiten directamente con producción importada de bajos salarios proveniente de Brasil y China. Según el Observatorio PYME, el 77% de las empresas del segmento ubicadas en la trama textil compite directamente con productos importados, lo mismo sucede con el 39 % de aquellas ubicadas en la producción de maquinarias y equipos, y con el 30 % de las empresas automotrices y autopartistas²¹.

Estrechamente vinculado a lo anterior, debemos decir que su actual situación en relación a la antigüedad de los equipos existentes de producción²², los bajos niveles de inversión, el escaso financiamiento y la baja escala de producción,

20 Fundación Observatorio PYME. Para mayor información, véase "Informe 2006/2007. Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PYME industriales". Cabe señalar que el informe del observatorio considera por PYME aquellas pequeñas y medianas empresas que concentran entre 10 y 200 empleados.

21 La importancia de estos tres sectores estriba en que explican alrededor del 50% del empleo industrial. Fundación Observatorio PYME. Para mayor información, véase "Informe 2007/2008. Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PYME industriales".

22 Según un estudio realizado por la Fundación Observatorio PYME, 2007, el 59 % de las pequeñas y medianas empresas se encuentra con equipos de producción modernos o de punta en comparación con las grandes empresas.





establecen niveles de productividad inferiores al de sus competidores, llevando, necesariamente, a que el salario se convierta en la principal variable de ajuste a la hora de garantizar su competencia en el mercado. Todo lo anterior transforma y complejiza el carácter trabajo-intensivo de las PYME, a la hora de pensarlas como la base de una potencial alianza con los sectores populares.

Muestra de lo anterior ha sido la evolución salarial que han tenido dichos sectores y las condiciones de precariedad en las cuales ha sido generado el nuevo empleo. El salario medio de un asalariado en las PYME fue, durante el primer cuatrimestre de 2007, y tras 6 años de recuperación económica, un 48% inferior al de las grandes empresas; mientras que el 13 % del empleo creado entre 2003 y 2007 por el sector de las PYME fue realizado en condiciones de precariedad.

Bajo este marco, resulta difícil argumentar contra los escasos signos de sustentabilidad que muestran las pequeñas y medianas empresas, los que se ven agravados por el nulo sistema de protección especial y por su bajo grado de articulación con el entramado industrial en su conjunto. Notemos, en relación a esto último, que sólo el 35% de las ventas de las PYME industriales se dirige a otras industrias²³.

A modo de síntesis de este breve apartado, pareciera entonces que el crecimiento PYME ha sido más una consecuencia lógica del crecimiento exponencial del mercado interno (que excede al del salario), el cual, en un contexto de enorme caída del costo salarial, ha permitido la proliferación de un cúmulo heterogéneo de actividades productivas que, escasamente vinculadas, dependen casi exclusivamente del mantenimiento de un techo salarial.

Todo hace suponer entonces que, de no modificarse las condiciones estructurales de dicho sector, un cambio generalizado de las condiciones internas y externas de nuestro país producto de la crisis que se avecina, pondrán en jaque la breve “simbiosis productiva” entre crecimiento y empleo.

SÍNTESIS, COMPLEJIZACIÓN Y NUEVOS PROBLEMAS:

La caracterización del patrón de acumulación abierto con la dictadura militar, y los posibles puntos de quiebre y ruptura que supuso la devaluación, exceden claramente los límites de este trabajo y sus argumentos. Lo que sí estamos en condiciones de afirmar, en arreglo a lo dicho hasta aquí,

²³ Fundación Observatorio PYME. Para mayor información, véase “Informe 2006/2007. Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PYME industriales”.





es que no parece haber un cambio estructural en lo que refiere al rol del salario a partir de 2002.

Esquemáticamente, la devaluación fue el resultado prácticamente inevitable de la implosión del modelo de convertibilidad. Esta devaluación, vía una reducción inédita del costo laboral, fue, indirectamente, la mayor medida de protección que el sector industrial haya tenido en largos años. Lo cual, en el marco de una particular coyuntura internacional, permite comprender los particulares desempeños sectoriales a los que hiciéramos referencia en los apartados anteriores, dentro de los cuales el cambio en los motores de crecimiento se destaca por su originalidad²⁴.

En este escenario (bajos costos laborales e incremento en la demanda), el aumento en la relación empleo-producto a nivel de la industria ha sido la gran novedad del período de la post-convertibilidad, y explica, en gran medida, los cambios en la elasticidad empleo-producto a nivel general a los que hiciéramos referencia²⁵.

Ahora bien: por otra parte, existen profundos síntomas de continuidad que advierten, a nuestro entender, sobre lo precario de este nuevo crecimiento. En este sentido, no resulta extraña la orientación exportadora que ha tenido el sector durante el periodo 2002-2007. Durante años, y en un marco de profunda recesión, se fueron consolidando capitales que, al amparo del Estado y controlando sectores clave del entramado, se orientaron al mercado externo, pudiendo exhibir un comportamiento disociado del ciclo económico. En parte, esto permite comprender por qué, durante la convertibilidad y con una profunda sobrevaluación cambiaria, el sector había exhibido elevados coeficientes de exportación tanto agregados como sectoriales. Luego de la devaluación no sólo se profundiza esta orientación exportadora²⁶, sino que, en base a la misma, se ha registrado una importante concentración del nivel de actividad industrial en la cúpula²⁷.

24Es interesante observar, complejizando aún más la discusión que, si bien a precios constantes han cambiado los motores de crecimiento industrial (lo que sugiere que se han comenzado a producir nuevos valores de uso), cuando analizamos la estructura industrial a precios corrientes, observamos que no varía sustancialmente con respecto a la convertibilidad (Azpiazu, D. y Schorr, M., *op. cit.*). Esto último sugeriría que, independientemente de lo que se produce, no han variado ostensiblemente los sectores donde se valoriza el capital.

25El sector de la construcción, que fuera durante este período el mayor generador de puestos de trabajo asalariado, también lo fue durante los años de crecimiento de la convertibilidad.

26De hecho, según estimaciones del Área de Economía y Tecnología de Flacso, si excluyésemos el desempeño de la cúpula empresaria, el desempeño de la balanza comercial durante la post-convertibilidad sería deficitario.

27Azpiazu, D., *op. cit.*





En función de lo anterior, no resulta llamativo que encontremos que el mercado interno ha jugado un rol moderado (en términos históricos) en el actual proceso de expansión, ni que el proceso de sustitución de importaciones haya sido limitado, ni que no encontremos signos de reversión en el proceso de articulación entre sectores del entramado.

La digresión en este punto entonces debe volver al interrogante principal, es decir, ¿se ha modificado el rol del trabajo asalariado con el cambio aparente en las dinámicas de crecimiento? Y la respuesta, parece ser claramente, que no. La mayor parte del nuevo empleo generado estuvo vinculado a empresas que no pertenecen al anterior núcleo exportador, y cuya principal fuente de competencia resultó ser el costo laboral, en un marco donde, además, la masa salarial, pese al importante crecimiento en el número de trabajadores, continúa encontrándose en pisos históricos en relación al consumo privado. *En otras palabras, el desempeño PYME puede ser visto como el indicador más acabado de la fragilidad a la que hiciéramos referencia. Marginal en términos de producto, central en términos de empleo, no sólo ocupa lugares marginales en un entramado desarticulado, sino que no parece depender de la demanda salarial para sustituir importaciones.*

Bajo este marco, resulta difícil pensar que dichos sectores aumentarán salarios, en tanto ésta es una variable de ajuste relevante para estas actividades a la hora de garantizar su viabilidad en el mercado.

En realidad, existe una cuestión sobre la cual no hemos hecho mención explícita pero que resulta central a la hora de comprender porqué es imposible hablar de modelo productivo hoy, tomando como referencia lo ocurrido 40 años antes. Muy esquemáticamente, los profundos desarrollos tecnológicos aplicados a productos y a procesos de producción han dado lugar a lo que, desde distintas corrientes teóricas, se ha dado en llamar *cadena globales de valor*²⁸. En pocas palabras, hoy los procesos de producción de mercancías han excedido los límites de las fronteras nacionales, dando lugar a un conjunto de nuevas dinámicas y complejidades. Esta optimización de la escala de producción, en el marco de nuevas tecnologías que así lo permiten, resulta en novedosas problemáticas, en la medida en que, entre otras cuestiones, distintos trabajos, de distintas produc-

28 Kaplinsky, R. (2000), *Globalization, poverty and inequality*, Cambridge; Kaplinsky, R. (2005), "Globalization, and Unequalization; What can be Learned from value chain analysis?", *Journal of Development Studies*, vol. 27, N° 2, Cambridge; Arceo, E. (2005), "El impacto de la globalización en la periferia y las nuevas y viejas formas de la dependencia en América Latina", *Cuadernos del Cendes* N° 60, setiembre-diciembre, Venezuela.





tividades, en distintas fronteras nacionales, son aplicados a distintas tecnologías y recursos y se articulan en la fabricación de una misma mercancía.

Esto determina que la producción industrial hoy no se encuentre estructurada a nivel local (al menos en lo que refiere a gran parte del reciente crecimiento), en tanto la estrategia de las grandes empresas ha cambiado radicalmente. Ahora ya no se dirigen a aquellos países con capacidad de consumo, con el objetivo de producir y vender sus productos fronteras adentro (característico de un mundo que mantenía parcialmente obstruidos sus vínculos con el resto de los países), sino que, en tanto la producción se encuentra globalizada, sólo se dirige a aquellos de menores costos, localizando sólo aquella parte del proceso productivo que le resulta más rentable, complejizando todo tipo de sinergia entre crecimiento, empleo y salario²⁹.

De esta manera, y completando el panorama del empleo industrial, tampoco habría que esperar aumentos de salarios por parte de las grandes empresas, ya que éstas han logrado independizar la realización de sus ganancias del destino del mercado interno³⁰; aún haciéndolo, su impacto en el mercado de trabajo sería poco relevante, en tanto los principales demandantes de mano de obra son las PYME.

Ahora bien: existe otro problema, del cual sería imposible dar cuenta aquí de manera exhaustiva, que sin embargo merece nuestra atención; y tiene que ver con cómo articular un proyecto que tenga como centro a la clase trabajadora, cuando no parece existir un grupo político lo suficientemente significativo, que se reconozca a sí mismo como tal y que articule sus demandas de manera consistente con esa identificación³¹. Es en este sentido que nos parece que al panorama sombrío

29El caso paradigmático es la industria automotriz. Por ejemplo, antaño General Motors producía en Argentina y Brasil con lógicas similares pero relativamente autónomas, y ambas producciones estaban nacionalmente integradas. En Argentina el costo de producir un automóvil era casi tres veces el de Estados Unidos (Sourrouille, J. V., (1980), *El complejo automotor argentino*, México, ILET - Nueva Imagen), pero esta "ineficiencia" tenía como correlato una vinculación con el entramado productivo local que garantizaba niveles cercanos al pleno empleo. Hoy lo que se conoce como industria automotriz tiene poco que ver con aquella articulación, porque tienen poco que ver las lógicas productivas del capitalismo a nivel global. Lo que nos interesa señalar aquí, es que al hablar de "modelo productivo" debemos tener cuidado sobre a qué estamos haciendo referencia.

30Según la Encuesta a Grandes Empresas del INDEC para el 2003 de las 500 empresas más grandes del país, 351 exportaban bienes cuando en 1993 eran 292. También se puede ver que la relación de las exportaciones y la producción total de las grandes empresas ubicadas en la producción manufacturera fue creciendo. En 1993 esa relación era del 14%, en 1996 fue de 23% y en el 2003 del 41%.

31 Sólo con el objetivo de aportar elementos que ayuden a la comprensión del tema, entendiendo que el problema es complejo y merece ser abordado desde diferentes aristas del campo de las ciencias sociales, es que no parece oportuno señalar que esta Argentina de hoy mantiene un 30% de pobreza, el fantasma del





anterior se le agrega una mayor penumbra si consideramos los bajísimos niveles de sindicalización de los asalariados argentinos de hoy. Al respecto, resultan esclarecedoras las pruebas presentadas en la encuesta de indicadores laborales llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo³². Los principales resultados muestran que el 37% de los asalariados privados se encuentra sindicalizado y sólo el 12% de las empresas tiene al menos un delegado sindical (cuasi desaparición de juntas internas)³³. La participación de las PYME en la generación de empleo oscurece aún más el panorama, dado que allí la cantidad de establecimientos con afiliados a un sindicato resulta ser muy inferior al de las grandes empresas. (Mientras que un 53% de las empresas pequeñas cuentan con al menos un afiliado al sindicato, en las empresas de mayor tamaño esta proporción se eleva al 84%). Notemos, que medio siglo antes, la situación era diametralmente opuesta, ya que el 50 % de los trabajadores se encontraban agremiados, además de tener una estructura sindical caracterizada por la existencia de juntas internas, las cuales permitieron ejercer una gran resistencia a los diferentes gobiernos dictatoriales^{34,35}.

desempleo en la cabeza de los trabajadores y la falta de un proyecto político aglutinador de sus demandas, entre tantas otras cuestiones. Esto no significa negar la existencia de trabajadores que se reconozcan como tales y que articulen sus demandas con determinados proyectos políticos que las aglutinan. Sin embargo, creemos que la desarticulación que predomina hacia dentro de los sectores populares posibilita que no sean lo suficientemente significativos como lo supieron ser en el pasado.

32Attorresi, P., Berhó, F., Lauphan, W. y Trajtemberg, D. (2007), "Encuesta de relaciones laborales", 7º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires. La encuesta de indicadores laborales es llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo desde el año 1998. En dicha encuesta se provee información sobre el personal dentro de convenio al año 2005, el grado de sindicalización y la existencia de delegados en las empresas que ocupan 10 o más trabajadores privados registrados (el universo total de empleados considerados es de 2.100.613 sobre un total de 9.550.000).

33Los resultados deberían ser subvaluados, en tanto que en la encuesta no son considerados los trabajadores por cuenta propia (no tienen grado de sindicalización), los trabajadores no registrados (tampoco sindicalizados) y los empleados públicos.

34En relación al grado de sindicalización alcanzado hacia fines del segundo gobierno peronista, véase Doyon, M. L. (2006), *Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*, Siglo XXI Editora Iberoamericana, Buenos Aires. Para mayor información al respecto, véase James, D. (2005), *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

35En relación a esto último, resulta interesante agregar, como referencia de color, algunos datos sobre el período de la autodenominada revolución libertadora. En 1959 por ejemplo, en años de aguda proscripción electoral, los trabajadores argentinos identificados en su gran mayoría con el peronismo llegaron a producir un total de 10 millones de jornadas laborales perdidas en concepto de huelgas, mientras que, paralelamente, el ratio salarios/superávit bruto de explotación descendía un 25% en el lapso de cinco años (1955-1960).





El esquema actual, como contrapartida, ha redundado en una baja capacidad de disputa económica y política de la clase trabajadora. En este sentido, su bajísima participación histórica en el ingreso total parece ser un indicador elocuente al respecto. Notemos que, pese a haber crecido el producto luego de la crisis (a razón de un 8% promedio anual), haber recuperado los salarios reales los niveles previos a la crisis de 2001, y el nivel de empleo ser un 15% superior, la participación de los trabajadores en el ingreso resultó ser al 2007 un 12% inferior al vigente en el 2001³⁶.

Es en este sentido que no parecen quedar dudas sobre la forma que ha adoptado la dinámica laboral, donde el trabajo camina con las marcas del pasado, ya que no ha logrado revertir, de manera sustancial, el cambio introducido sobre la clase trabajadora por la última dictadura militar (y continuado por los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa). La explicación de este fenómeno debe buscarse, fundamentalmente, en los efectos del desempleo y la represión, cuyo principal legado ha sido la desmovilización sindical.³⁷

COMENTARIOS FINALES: LA ETAPA ACTUAL EN PERSPECTIVA

El período de la post-convertibilidad se nos presentó a muchos como un profundo cambio respecto de las décadas precedentes. Tras el enorme incremento en los niveles de producción industrial, el empleo y el salario, creímos ver la reedición de ciertas dinámicas que, antaño, supieron garantizar un relativo bienestar para gran parte de los sectores populares. Así, pareció resurgir la cuestión en torno a la posible complementariedad de intereses entre la burguesía industrial y la clase trabajadora, a partir del rol de la primera en el mercado interno. Tras 6 años de crecimiento ininterrumpido, no sólo la tasa de empleo tocó techos históricos, sino que los índices de desempleo se retrotrajeron a niveles de fines de los 80.

No obstante, los salarios siguen en niveles cercanos al 2001, y la participación de la clase trabajadora en el ingreso se encuentra en niveles bajísimos en términos históricos, en un marco donde las condiciones de empleo no han mejorado demasiado en relación a los 90. Lo interesante es que, según lo que hemos podido

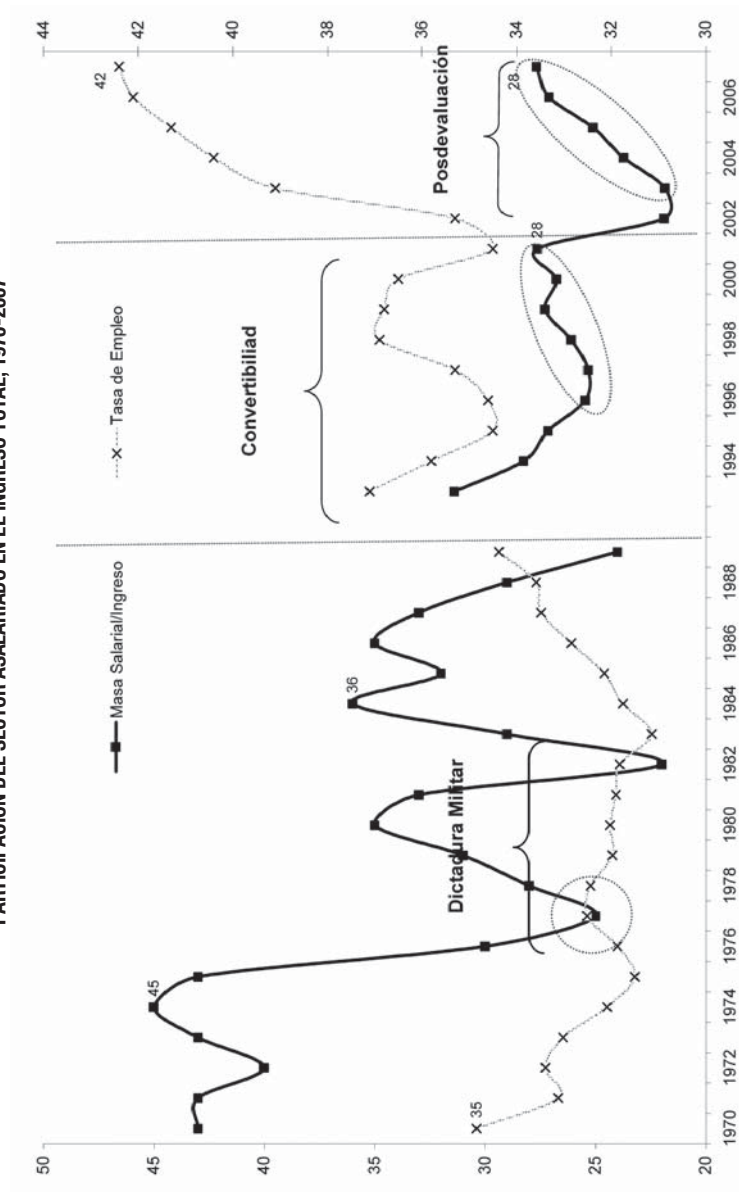
³⁶ Este proceso aparentemente contradictorio se explica, fundamentalmente, por una tasa de crecimiento del PBI superior a la de la masa salarial. Así, mientras el primero creció entre 2002 y primer semestre de 2007 un 29%, la masa salarial lo hizo sólo un 14%.

³⁷ Un elemento insoslayable a la hora de analizar este proceso de desmovilización tiene que ver con la transformación de las viejas burocracias sindicales en lo que hoy en día se conoce como "sindicatos empresarios"; es decir sindicatos que se dedican a proveer distintos "servicios" a sus afiliados/clientes, en un proceso casi completamente ajeno a la movilización y discusión política.





GRÁFICO 4:
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ASALARIADO EN EL INGRESO TOTAL, 1970-2007



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Beccaría, L., (1991), DNON (INDEC) y Ferreres, O., op. cit.



observar, lejos de ser una situación transitoria, éste parece ser el techo del actual patrón de crecimiento. Esquemáticamente, porque los sectores que mayor empleo generaron (la PYME industrial), si bien producen para un mercado interno ampliado por la recuperación, son los que menos contribuyeron a la misma, y lo hicieron fundamentalmente en base a un fenomenal ajuste de salario que seis años de crecimiento no ha logrado revertir, y, porque aquellos pocos que efectivamente han contribuido a la recuperación del salario, lo han hecho orientados al mercado externo, con escaso impacto sobre el mercado de empleo.

Todos estos resultados parecen desmentir los argumentos que señalan que nos encontramos frente a un cambio de época, donde las condiciones de vida de los sectores populares podrían continuar su camino ascendente; el camino parece haber desaparecido, y, con él, la posibilidad de satisfacer a los sectores más castigados. Esto se debe a que la configuración actual del capitalismo argentino no guarda relación alguna con la existente durante la etapa mercado internista, ni con nada que se asemeje a la estructura de un “Estado de Bienestar”, de manera tal que intentar argumentar en favor del esquema económico actual, apelando a la idea de complementariedad entre salario y crecimiento industrial, no parece ser acertado.

En realidad, esto no debería sorprender: por más eficaz que sea el manejo de la política cambiaria, la misma no alcanza para contrarrestar los efectos de treinta años de centralización del capital y desregulación económica. El aparato industrial de hoy, más específicamente, que aparece como el gran dinamizador del nuevo modelo productivo, está constituido por una elite que controla un sinnúmero de empresas, que opera con tecnologías de punta, y que se ha disociado del ciclo general de la economía; junto a un cúmulo de pequeñas y medianas empresas que, totalmente disociadas entre sí, operan a un bajo nivel de escala, con escaso acceso al crédito³⁸ y a los estímulos gubernamentales, y se las arreglan, con mayor o menor tino, para reproducirse en un ambiente bastante hostil. Eso explica que estas últimas contribuyan escasamente a las exportaciones industriales y al PBI agregado, y que tengan los salarios más bajos del conjunto, pese a haber contribuido a la generación de empleo.

³⁸ “Según estadísticas de la Fundación Observatorio PYME, en los países de ingresos medios el crédito al sector privado creció en forma continua desde los años 70, pasando de representar el 25% del PBI en 1970, al 60% en 2006. Pero en la Argentina, la participación se mantuvo estancada, oscilando en alrededor del 20% del PBI” (*Clarín* 11/04/2009). Ver además las características del impacto diferencial sobre el sector PYME en Observatorio PYME, Informe 2007/2008, p. 83 en adelante, *op.cit.*





Creemos, para finalizar y retomando lo dicho al principio, que los límites de la “pata económica” del proyecto oficial provienen de dos cuestiones no necesariamente excluyentes: o de una incorrecta caracterización de la coyuntura por la que atravesamos, o de una incapacidad para comprender y delimitar el terreno en el cual la disputa política se puede realizar. Sintomático de esto último es la disociación existente entre los diagnósticos en relación a los períodos previos de nuestra historia económica y la capacidad de instalar problemáticas concretas consistentes con los mismos. Por ejemplo: sabemos que el capital concentrado en nuestro país controla resortes fundamentales no sólo del entramado industrial, sino del sistema económico en su conjunto (incluida la generación de divisas); sabemos también que gran parte de los mismos se ha consolidado gracias a la transferencia ilegal e ilegítima de recursos estatales; y sabemos, por último, que en estas condiciones el accionar del Estado está fuertemente limitado. Entonces, ¿por qué palabras como “estatización” parecen prohibidas, no sólo entre miembros de la clase política sino entre la gran mayoría de los intelectuales progresistas? Una respuesta podría ser que dada la actual relación de fuerzas, sería imposible pensar en ese tipo de escenarios³⁹. Puede ser: lo cierto también es que, de no plantearse el problema, incurriendo en falsas caracterizaciones, no se podrá construir un proyecto popular en la argentina.

Julio 2009

³⁹Es cierto que el Gobierno fracasó en su intento de aumentar las retenciones, y que ni bien dejó trascender, luego del conflicto con “el campo”, algo así como la posibilidad de nacionalizar el comercio exterior, todo el arco opositor y los medios de comunicación se abroquelaron en contra. Algo similar sucede hoy con el tema de las nacionalizaciones en Venezuela; la oposición reagrupada “por derecha” señala el peligro de “chavización” del oficialismo en caso de ganar las elecciones legislativas del 28 de junio. En este escenario, no desconocemos las dificultades de llevar adelante una acción semejante; no obstante, lo que sí nos llama la atención es la incapacidad, la impericia o la falta de voluntad, de los sectores que apoyan al proyecto oficial por discutir la problemática en otros términos. En otras palabras, la defensa del gobierno consiste en mostrar que la comparación con el gobierno de Chávez es una maniobra electoral de la oposición, y se esquivo sistemáticamente en todos los medios de comunicación la cuestión de fondo en torno a la pertinencia o no de la nacionalización de la cadena siderúrgica en Venezuela, una vez que éste se encuentra instalado.







UNIVERSIDAD Y MERCANTILIZACIÓN

UNA MIRADA A LAS CONDICIONES DE
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN AMÉRICA
LATINA

*Adrián Pulleiro**

Este trabajo pretende dar cuenta de las consecuencias concretas, y más significativas, que el proceso de mercantilización de la universidad pública está generando en nuestro medio. Para ello, intentaremos comprender los hechos más específicos que hacen a la transformación del universo universitario y académico como parte de un proceso histórico más abarcador, que a su vez es entendible sólo si se lo enmarca en una tendencia estructural del sistema capitalista. Puntualmente daremos cuenta de las maneras en que dicho proceso se expresa en América Latina, tomando como punto de referencia a Argentina.

COSIFICACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN: UNA RELACIÓN CAUSAL

Desde nuestro punto de vista, la tendencia a la mercantilización de las relaciones sociales es propia de un modo de organizar la vida que se basa en la explotación y la alienación de la fuerza de trabajo y la apropiación privada de los excedentes, y que despliega todo un entramado institucional e ideológico que pugna por presentarlo, ante el conjunto de la sociedad, como el único modo posible.

* Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Becario del CONICET, investigador y docente de la FISYP, Docente de Teorías y Prácticas de la Comunicación II, UBA.





Como intentaremos poner en evidencia, más allá de las resistencias históricas de los sujetos subalternos, las consecuencias generales más evidentes del desarrollo y expansión de las relaciones sociales capitalistas se aprecian en términos de una mayor desigualdad y una tendencia a la cosificación de las relaciones humanas, expresada en una autonomía cada vez más formal de las personas, y una cada vez mayor “personificación” de los objetos (productos del trabajo). Este planteo supone que la contradicción entre la producción social y la apropiación privada, propia del sistema capitalista, se complementa con el proceso de enajenación y cosificación de los sujetos, lo que lleva consigo importantes derivaciones en el plano político, con respecto a los elementos que todo proyecto emancipador debería contener.

Teniendo como punto de referencia el modelo metodológico planteado por Marx en *La introducción a la crítica de la Economía Política* de 1857¹, y que él mismo despliega, por ejemplo en *El Capital*, diremos que el capitalismo se define por la producción y acumulación de mercancías². Tal como plantea Marx en el primer capítulo de *El Capital*, la producción capitalista (entendida como proceso integral que implica a la producción, la circulación, el intercambio y el consumo –Marx; 2008–) supone la preeminencia del valor de cambio de los objetos por sobre su valor de uso, lo que a su vez establece la primacía del trabajo abstracto por sobre el trabajo concreto. Es decir, el capitalismo, entendido como relación social, supone la subsunción de las cualidades específicas del trabajo (entendido como fuerza social) y los saberes del trabajador a la dinámica de la producción para un mercado de intercambio de mercancías y por tanto a la lógica de la reproducción del capital. De modo tal que en el capitalismo la producción de bienes y servicios no sólo no estará regida por las necesidades colectivas sino que entra en contradicción con los derechos mínimos de las mayorías y la continuidad del medio natural³.

1 Nos referimos al método de análisis que podemos sintetizar, *grosso modo*, como el partir de un concreto, elevar el nivel de abstracción para su análisis, para generar finalmente un nuevo concreto, en esta instancia “enriquecido” (Ver Marx; 2008).

2 “Un producto es mercancía cuando además de tener una utilidad (valor de uso) tiene ‘valor de uso social’, lo que significa que no solamente es producido para otros (cosa que ocurría en el Feudalismo entre el campesino medieval y su Señor) sino que debe ser intercambiado” (Marx; 2000: 63). En otros términos, la mercancía es tal en la medida en que posee un valor de uso que se realiza en el consumo o en su utilización, y un valor de cambio que se realiza en el intercambio, y por lo tanto es un valor social. Hablamos de producción capitalista en la medida en que el valor (valor de cambio) ya prima en el momento de la producción misma.

3 Esta cuestión ya se puede encontrar de manera germinal en los primeros artículos periodísticos publicados por Marx en relación a los debates en la Dieta Renana (Marx; 2007).





Para comprender esa subsunción del trabajo⁴ por parte del capital hay que comprender lo que ocurre en el intercambio de los productos del trabajo bajo las condiciones históricas que impone el capitalismo. Como sostiene Marx, en el intercambio de mercancías lo que prima no son los caracteres físicos concretos de cada objeto ni su utilidad. Lo que permite ese intercambio es la abstracción de las particularidades, incluyendo lo específico del trabajo productivo determinado que le dio origen a los objetos. Ese trabajo que ya no es un trabajo determinado o “personalizado”⁵ es lo que Marx llama “trabajo abstracto”. Dicho de otra manera, en el intercambio, el valor de cambio se independiza del valor de uso de los objetos y el trabajo aparece como una manifestación “del gasto de fuerza de trabajo humano sin tener en cuenta la forma de su gasto” (Marx; 2000: 59). Al mismo tiempo, Marx dirá que, si se hace realmente abstracción del valor de uso se obtiene el valor de un producto, que se realiza en el intercambio, o sea en su puesta en relación con el resto de las mercancías. Siguiendo este razonamiento, al prescindir del valor de uso, a los objetos les queda una sola propiedad, un elemento en común que hace posible la relación de cambio: son productos del trabajo. Así las cosas, un objeto sólo tiene valor porque en él se ha materializado trabajo humano abstracto. El intercambio es posible porque los bienes son producto de una misma sustancia creadora de valor, cuya magnitud puede ser calculada en función de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir los bienes en cuestión.

En síntesis: la producción de mercancías significa producir bienes para el intercambio, cosa que tiende a borrar las particularidades del trabajo y hace aparecer a los objetos como dotados de un valor intrínseco. La producción mercantil, entonces, tiene consecuencias sobre el trabajo concebido como fuerza social creadora, sobre las relaciones sociales y, por ende, sobre la subjetividad.

Es aquí donde podemos hablar de las derivaciones cosificantes del proceso de producción mercantil, es decir, de las consecuencias que se extienden más allá del ámbito estricto de la producción. En términos de Marx, cuando el producto del trabajo asume la forma mercancía, ésta

4 Entendemos al trabajo en tanto proceso creador, y a su vez, como “una condición de existencia del hombre más allá de las formas de sociedad”. Como “una necesidad material eterna para mediar entre la naturaleza y el hombre” (Marx; 2000: 65).

5 No necesariamente individual, sino un trabajo en el que la relación del trabajador con el proceso productivo y con su finalidad es determinante para el producto.





[...] les refleja a los hombres los caracteres sociales de su propio trabajo como caracteres objetivos de los productos del trabajo, como propiedades naturales sociales de estas cosas, y, por tanto, también refleja la relación social de los productores con el trabajo total como una relación social de objetos, existente fuera de ellos” (Marx; 2000: 103).

Concretamente, Marx llama a esta personificación de los objetos “fetichismo”, y advierte que es consecuencia del tipo de trabajo que los produce en tanto que productor de mercancías. La producción de mercancías supone un trabajo privado aislado, donde la cooperación y la planificación social es dejada de lado en nombre de la competencia y en la cual los productores, como tales, no entran en contacto sino en el intercambio de los productos de su trabajo. De modo que el conjunto de esos trabajos privados constituyen el trabajo social total, pero las relaciones que priman son las relaciones sociales entre las cosas y las relaciones objetivas entre las personas (Marx; 2000: 104). Al extenderse la mercantilización de las relaciones sociales, al primar la producción de objetos para el intercambio y al priorizarse un trabajo en tanto mero gasto de fuerza de trabajo o trabajo abstracto, se procede a una cosificación estructural de la sociedad. Tal como plantea Lukács, lo específico del capitalismo moderno frente a las formas arcaicas del negocio capitalista es la organización rigidamente racional del trabajo sobre la base de la técnica racional” (Lukács; 104). De hecho, el filósofo húngaro llama la atención acerca del proceso de cosificación que se extiende en las relaciones sociales que se establecen en la fábrica, la empresa y también en el ámbito universitario. Lukács nos sirve para advertir acerca de cómo esa organización racional del trabajo va generando un tipo de subjetividad en la que “la capacidad expresiva se convierte en un mecanismo abstracto, independiente de la personalidad del ‘propietario’ igual que de la esencia concreta material de los objetos tratados: en un mecanismo que funciona según sus propias leyes” (Lukacs; 108).

De esta manera, la escisión inicial entre valor de uso y valor de cambio (y trabajo útil o concreto y trabajo abstracto) se consolida en la medida en que el intercambio ya está en el origen de la organización y concepción de la producción, o sea que el valor (de cambio) es lo que determina la producción misma. Y a partir de esa imagen de escisión inicial podemos hablar de un proceso de enajenación multidimensional que tiene como centro al trabajador-productor: respecto del proceso de trabajo, respecto del producto de su trabajo y respecto de los hombres entre sí.





Más puntualmente podemos decir que “en la moderna sociedad burguesa los bienes útiles para satisfacer necesidades humanas se han vuelto mercancías. En ella el hombre es medio de la cosa, es decir de su propietario, más aún, éste es la personificación de la cosa. La cosa es el fin del hombre, de su actividad y de su mundo” (Victor Rau; 16).

Dicho esto, es preciso profundizar la idea acerca de la subsunción del trabajo por parte del capital para poder analizar el terreno de la producción simbólica o cultural que es lo que aquí nos interesa. En este texto partimos de un dato histórico: luego de la crisis que el capitalismo atravesó en la primera mitad de la década de 1970 – crisis del Estado de Bienestar mediante y con el auge neoliberal afianzado– se produjo un profundo cambio del modelo de acumulación vigente hasta entonces, basado en la producción y el consumo de masas y en un Estado garante del nivel de demanda. En ese escenario, la educación, y la educación superior en particular, será objeto de un proceso de resubordinación por parte del capital que, a su vez, debemos considerar como parte de una tendencia global a la penetración del capitalismo en la sociedad⁶.

Asimismo, junto con la subsunción “formal” del trabajo, en *El Capital. Libro I. Capítulo VI (inédito)*... (que permaneció así, inédito, por mucho tiempo), Marx llama la atención acerca de lo que denomina subsunción “real”⁷. Mientras que la subsunción formal del trabajo se expresa sobre todo en la extracción de plusvalía absoluta, que depende fundamentalmente de la extensión de la jornada de trabajo, la subsunción real implica la incorporación de nuevas técnicas y medios de producción que permitan una mayor producción en un período de tiempo menor (lo que no quiere decir que los capitalistas dejen de querer extender la cantidad de horas trabajadas), para extraer lo que Marx llama plusvalía relativa. En ese proceso el capital subordina cada vez más dimensiones de lo social y la ciencia se transforma en una fuerza productiva por sí misma. Es una dinámica caracterizada por la creciente expansión del capital sobre diversas esferas sociales y por la tendencia a incrementar la incorporación (subsunción) de diversas capas de la población que podían mantener una relación mucho más mediada

6 Es justo decir que esa tendencia a la expansión y a la penetración en las diversas esferas de la vida social, como necesidad intrínseca del capital, fue puesta en evidencia por Marx y Engels a mediados del siglo XIX. Por un lado, los autores aseguran: “Espoleada por la necesidad de un mercado más extenso, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes” (Marx; Engels; 1998: 100). Y a continuación completan esa idea señalando que “...se establece una red de comercio internacional, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material como a la producción intelectual” (Marx; Engels; 1998: 101).

7 Citado en McCabe; 1997.





con la producción: nos referimos a profesionales técnicos e intelectuales que son incorporados con roles organizativos y operativos.

Aquí vale una puntualización. En primer lugar, remarcar que desde un principio las clases dominantes en el capitalismo requieren revolucionar permanentemente los medios de producción para hacer frente a la contradicción que supone que, a mayor producción en menos tiempo, menos valor relativo de los productos (cosa que se explica por la menor magnitud de trabajo socialmente requerido). Esto ya aparece de manera elemental en el *Manifiesto*... cuando Marx y Engels aseguran que “la burguesía no puede existir si no revolucionando incesantemente los instrumentos de producción, y, por consiguiente, las condiciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales” (Marx; Engels; 1998: 100). Lo que, por un lado, liga de manera inescindible el desarrollo y supervivencia del capitalismo a la capacidad que tenga para regenerarse y, por otro, deja planteada la tensión que se establece respecto del trabajo productivo e improductivo entre los intelectuales.

En este último punto nos referimos, por un lado, a la incorporación progresiva de una serie de funciones “intelectuales” a la explotación directa del capital y a su proceso de reproducción y valorización. Y, por el otro, a las particularidades de esa subsunción. Desde la perspectiva del capital, el trabajo intelectual es productivo en la medida en que genera plusvalor, no en función de la calidad de las ideas y de los productos. De esta forma, podemos decir que el capitalista busca obtener un doble beneficio al subsumir el trabajo intelectual, el económico y el ideológico que se deriva de volcar a la producción mercantil lo que de otra manera sería un trabajo improductivo, desde la lógica del capital⁸.

En este marco, nos queda justificar la importancia del análisis de los procesos de mercantilización en la universidad pública y en las prácticas que constituyen el campo académico. No nos detendremos demasiado en este punto porque creemos que dos argumentos son suficientes para dar sustento a los propósitos del presente trabajo.

Por un lado, partimos de la idea de que el sistema de enseñanza universitaria es crucial para la formación de los grupos intelectuales que desarrollan tareas en

8 En palabras de Héctor Agosti “el trabajo intelectual es una de las categorías sociales que documentan la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo. La utilidad del trabajo intelectual o su valor de uso para la comunidad, nada tiene que ver con la productividad que le asigna la sociedad capitalista, y ello constituye una de las monstruosidades antihumanas del régimen social en que vivimos; la productividad comienza en el instante mismo en que el trabajo intelectual produce ganancias al capitalista que lo compra” (Agosti; 15).





la investigación científica y técnica, pero también en los ámbitos de dirección empresarial y estatal⁹.

Del mismo modo, asumimos la perspectiva gramsciana para considerar que el papel que desempeñan los intelectuales, “considerados como aquellos agentes sociales que desempeñan tareas tanto de elaboración de las visiones del mundo (los ‘ideólogos’) como aquellos que se desempeñan en tareas más ligadas a la difusión y transmisión”, es imprescindible para dar cuenta de los procesos ideológicos y culturales de una época.

Más específicamente, tal como aparece en varios pasajes de los *Cuadernos de la cárcel*, la tarea ideológica de los intelectuales es crucial para entender el nivel de articulación y coherencia de lo que el dirigente comunista italiano llamaba “bloque histórico”, es decir, a la articulación entre fuerzas sociales y visión de mundo, que a su vez es la materia viva que le da coherencia a la relación entre estructura y superestructuras. En esta línea, el estudio de las condiciones concretas en las que se desarrollan las tareas intelectuales en una sociedad y en un momento determinados se justifica a partir del papel que los intelectuales juegan en la instalación de una serie de instrumentos de conocimiento y de expresión que, si bien son arbitrarios, serán presentados como los únicos posibles. En otras palabras, por la tarea específica que desarrollan en la lucha simbólica, en la que las clases y grupos sociales están involucrados con el propósito de imponer visiones del mundo acordes a sus intereses (Bourdieu; 69).

2. LA MERCANTILIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Llegados a este punto y planteada la perspectiva que permite entender al proceso de mercantilización de la universidad pública como parte de una tendencia estructural de la sociedad capitalista, intentaremos reconstruir las particularidades del caso latinoamericano, en general, y del argentino, en particular, tomando para ello como caso testigo a la Universidad de Buenos Aires. En este sentido, nuestro propósito es abordar las consecuencias específicas que trae consigo la mercantilización en el campo académico, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones para la producción de conocimiento y para la docencia

9 Al decir de Gramsci, “todos los hombres son intelectuales, podríamos decir, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales”. Por lo tanto, cuando hablamos de “intelectuales” hacemos referencia a la función social de la categoría profesional de los intelectuales, teniendo en cuenta “la dirección en que gravita el mayor peso de la actividad específica, si en la elaboración intelectual o en el esfuerzo nervioso muscular” (Gramsci; 13).





que dicho proceso ha ido generando, todo ello sin perder de vista que ese proceso se desenvuelve en medio de conflictos, contradicciones y resistencias.

A) LA MERCANTILIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

La fisonomía de la etapa actual del capitalismo, y con ella el proceso de mercantilización que aquí nos ocupa, no pueden ser comprendidos sino es en función de las transformaciones estructurales que se vienen desplegando a escala global desde mediados de los años 70. En aquel momento luego de las rebeliones obrero-estudiantiles en los países centrales emergió una profunda crisis económica que profundizó la crisis más general del modelo de acumulación basado en el modelo fordista de producción y consumo y en el modelo de Estado de Bienestar sustentado en políticas de corte keynesiano que apuntaban a dinamizar la demanda y garantizar el pleno empleo.

El estancamiento económico, combinado con altos índices de inflación sentaron las condiciones para que se legitimaran y se impusieran las salidas neoliberales que se habían venido gestando en el seno de la inteligencia del *stablishment* desde hacía por lo menos tres décadas. Los Gobiernos de Reagan y Thatcher expresaron el proceso de recomposición hegemónica en los países centrales, proceso que luego se expresaría en una ofensiva del capital a escala global.

Disciplinamiento y flexibilización del trabajo, liberalización y financierización de las economías nacionales, privatización de los servicios públicos, concentración y transnacionalización del capital, son algunos de los elementos y de las consecuencias que definieron el programa de esa ofensiva¹⁰. Una ofensiva que, además de constituir la manera en que las clases dominantes encararon la salida de la crisis, marcaría un quiebre de época respecto a las características del capitalismo surgido luego de la crisis de 1930 y la segunda posguerra.

A partir de la caída del Muro de Berlín y la disolución del bloque soviético, la tendencia a la subsunción real encontró condiciones geopolíticas hasta entonces inmejorables. Una vez caída la bipolaridad se aceleró el proceso de expansión de las relaciones capitalistas, tanto a nivel territorial como en relación a ciertas esferas de la vida social que en el modelo de Estado de Bienestar permanecían

¹⁰La crisis como elemento constitutivo del capitalismo y la estrategia con la que la burguesía tiende a enfrentar esos momentos también se encuentra prefigurado en el *Manifiesto Comunista*; “¿Cómo se sobreponen a la crisis la burguesía? De una parte por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas, de otra, por la conquista de nuevos mercados y la exploración más intensa de los antiguos” (Marx; Engels; 1998: 104).



con una autonomía nada despreciable respecto de la lógica de valorización y reproducción del capital.

Tal como ocurrió en materia de salud o en el ámbito de la cultura y de los medios de comunicación a partir de la década del ochenta, pero mucho más claramente a partir de los años noventa –como parte del avance del neoliberalismo considerado como capitalismo de época–, se profundizó la tendencia global a hacer de la educación un terreno para la revalorización y reproducción del capital y un sistema proveedor de servicios¹¹. Lo que hasta entonces eran espacios que remitían a derechos sociales y universales, en el nuevo contexto –que implicó una profunda modificación en la correlación de fuerzas a nivel mundial, regional y nacional– pasaron a ser concebidos como esferas productoras de servicios sujetas a la lógica de la oferta y la demanda.

En función de lo planteado hasta aquí ubicamos a la tendencia a la mercantilización de la educación superior en el proceso más general de “contraofensiva” de los sectores dominantes a escala global. Contraofensiva que en América Latina implicó la imposición de dictaduras genocidas que, con el aval de Washington, sentaron las bases para revertir el proceso de acumulación de fuerzas llevado a cabo por las clases subalternas a partir de la década del ‘60 y avanzar en una profunda reestructuración de nuestras sociedades. A nivel socioeconómico, quedaría atrás la posibilidad de desarrollar capitalismo nacional con cierta autonomía de las potencias centrales, situación que se expresó en el abandono del modelo de sustitución de importaciones y el peso creciente de la valorización financiera como eje ordenador de las relaciones económicas (Basualdo; 11).

En el caso de Argentina, el grueso de las reformas que le dieron cuerpo a la contraofensiva del capital fueron implementadas durante el primer y segundo gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) que, proveniente del Partido Justicialista, expresó una alianza entre los sectores del capital local y transnacional más concentrado, la banca internacional y los organismos financieros multilaterales. No obstante este dato histórico –y parte del objetivo de este trabajo es

¹¹ Boaventura De Souza Santos destaca que “los gastos en educación ascienden a 2 billones (millones de millones) de dólares, más del doble del mercado mundial automovilístico [...] el crecimiento del capital educacional ha sido exponencial y los índices de rentabilidad son de los más altos: 1000 libras esterlinas invertidas en 1996 alcanzaron el valor de 3405 en el año 2000, es decir tuvieron una valorización del 240% muy superior a la tasa de valorización del índice general de la bolsa de Londres [...] En 2002, el Fórum Estados Unidos-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos concluyó que el mercado global de la educación se estaba transformando en una porción significativa del comercio mundial de servicios” (De Souza Santos; 2006: 27).





describirlo–, el grueso de esas reformas regresivas y sus consecuencias en el plano de la educación superior siguen vigentes.

Siguiendo con el ejemplo paradigmático de nuestro país, esas reformas, o mejor dicho “contrarreformas”, que transformaron profundamente la economía, el Estado y el rol de las instituciones sociales, se desplegaron en distintos niveles. Implicaron la privatización de las empresas del Estado y demás organismos que prestaban bienes y servicios; la desregulación de ramas de la economía, con la consiguiente derogación de cláusulas antimonopólicas y la reformulación del sistema financiero, medidas que sumadas a las privatizaciones generaron un inédito proceso de concentración capitalista. La derogación de gran parte del derecho laboral instituido en las ocho décadas anteriores, que repercutió en la liberalización de la relación capital-trabajo y en la pérdida de gravitación de las organizaciones gremiales; el reemplazo del régimen jubilatorio de reparto por otro mixto con la existencia de un sistema de capitalización. La reducción de la regulación estatal sobre el mercado de carnes y otros alimentos, sobre los precios y el mercado de capitales; la liberalización de la inversión extranjera. En materia social se diversificó la oferta en el sistema de salud promoviendo la participación de empresas de medicina prepaga; se llevó a cabo el traspaso de la educación primaria, secundaria y terciaria no universitaria a las jurisdicciones provinciales, promoviendo la diversificación de la oferta en general y en particular en el nivel universitario respaldando la aparición de universidades privadas; y en general se dio un fuerte impulso a la mercantilización de actividades –que van desde los cementerios hasta la seguridad privada– que hasta ese momento funcionaban con lógicas no puramente mercantiles al estar relacionadas con la concepción de derechos universales (Campioni y Gambina; 7-9).

De esta forma, el proceso de reestructuración de las universidades públicas en América Latina no puede ser comprendido al margen del agotamiento de los proyectos vinculados a los capitalismo nacionales basados en la sustitución de importaciones y cierto desarrollo de un Estado Social¹². En la misma medida, es necesario analizar dicho proceso como parte de una serie de transformaciones

¹² Boaventura De Souza Santos sostiene que en los países periféricos, hasta las últimas dos décadas del siglo XX, la universidad pública no puede pensarse al margen de un “proyecto de país”: “En estos países, la universidad pública –y el sistema educacional como un todo– estuvo siempre vinculada a la construcción del proyecto de país, un proyecto nacional casi siempre elitista que la universidad debía formar [...] Los estudios humanísticos, las ciencias sociales, pero, muchas veces, las propias ciencias naturales, estuvieron orientados a dar consistencia al proyecto nacional, crear el conocimiento y formar los cuadros necesarios para su materialización” (De Souza Santos; 41).





estructurales que hablan de una ofensiva del capital sobre las relaciones sociales y los espacios de producción específicos.

En este sentido, por un lado, podemos pensar a la reestructuración del sistema educativo, en su conjunto, como la última etapa –y tal vez la más dificultosa– del proceso de reconversión estatal que tuvo su puntapié inicial con las privatizaciones y que significó la entrega de una buena parte de la explotación estatal a la actividad privada. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurrió en otras áreas, en el caso de la educación no se puede hablar de una privatización directa, pero sí de una subordinación más estrecha a las necesidades del mercado (McCabe; 131). Esto se debe a las particularidades del trabajo intelectual, pero también a las tradiciones afincadas en las universidades públicas –y en ciertos sectores sociales– y a los procesos específicos de resistencia.

En relación al marco histórico que venimos describiendo, hay que señalar que durante la década pasada los problemas que estaban presentes en las universidades públicas de los países periféricos –relacionados, sobre todo, con las contradicciones generadas a partir del fenómeno de la masividad experimentada desde los 80– se profundizaron y generaron el caldo de cultivo para las contra-reformas mercantilistas.

Como bien sostiene Boaventura De Souza Santos, a partir de la década de 1980, la universidad dejó de ser un bien público que el Estado debía garantizar. Según el mismo autor, con la hegemonía neoliberal se consolidó la pérdida de prioridad en las políticas sociales (educativas, de salud, de la seguridad social), al tiempo que se instaló la idea de que la universidad pública es irreformable, para justificar la apertura del bien público universitario a la explotación comercial (De Souza Santos; 18).

Así las cosas, nos interesa traer a colación la triple crisis que, para De Souza Santos, la universidad pública atraviesa en la etapa actual del capitalismo y que nos permite visualizar con más precisión el escenario sobre el cual se generan los avances y resistencias al proceso de mercantilización. Por un lado, según el autor, la universidad pública atraviesa una crisis de hegemonía, debida a que ya no tiene el monopolio de la educación superior y la investigación, supremacía que debe disputar con universidades privadas, consultorías e institutos privados especializados. A su vez, pasa por una crisis de legitimidad, relacionada con la contradicción entre excelencia, conocimiento especializado y la demanda de acceso masivo. Por último, la universidad pública atraviesa una crisis institucional producto de la contradicción entre la reivindicación de la autonomía para definir objetivos, criterios de valoración y normas propias de funcionamiento y la





presión creciente para someterla a criterios de eficiencia y productividad de tipo empresarial (De Souza Santos; 12). Junto con esto hay que decir que también la universidad pública está sujeta a contradicciones que surgen específicamente de la reestructuración del modelo de acumulación. La mayor diversificación y segmentación de la demanda, el papel fundamental que desempeñan el conocimiento, la información y la incorporación creciente de nuevas tecnologías, suponen una tensión entre la volatilidad del mercado y la rigidez de la formación universitaria. Asimismo, las universidades públicas están expuestas a la presión que supone que actores multilaterales como el Banco Mundial hayan impulsado sistemáticamente durante las últimas dos décadas reformas educativas que, en el caso de la educación superior, supusieron la idea de consolidar la división internacional del trabajo intelectual. Perspectiva que en el caso de los países del Tercer Mundo, llama a resguardar los recursos para garantizar apenas la educación básica, dejando para los más desarrollados la asistencia en investigación y el desarrollo tecnológico¹³.

Para completar el panorama, vale señalar también que la universidad pública nunca estuvo aislada del mundo de la producción y el ejercicio de las profesiones, pero esa relación se estableció de manera conflictiva, en la medida en que estuvo mediada por la tradición de la autonomía y la formación humanística y generalista. Amén de tener la hegemonía en el plano de la investigación y estar avalada por el discurso afincado sobre todo en las capas medias urbanas acerca del ascenso social y la igualdad de oportunidades (Rubinich; 12-13).

Concretamente, en los años noventa se profundizó una tendencia global a la mercantilización de la educación superior que tuvo como blanco la transformación de la universidad pública tal como se había desarrollado en el capitalismo de masas, tanto en el centro como en la periferia. Más allá de que ese proceso de mercantilización global de la universidad pública¹⁴ (que ubicamos como una de las dimensiones específicas y más cruciales de la tendencia a la subsunción real del trabajo) tuvo y tiene consecuencias diversas en el centro y en la periferia, en principio podemos identificar en él tres elementos fundamentales:

¹³Para una mirada más detallada del papel y las propuestas del Banco Mundial existen muchos trabajos recomendables y dignos de consulta. Aquí hacemos referencia a los trabajos de Rubinich; Feldfeber y Saforcada; de De Souza Santos y de Atilio Boron, cuyas referencias citamos al final del texto.

¹⁴Se trata de un proceso que tiene una tendencia a la transnacionalización de los servicios y la oferta de educación superior. De hecho, mientras que en la década del 80 se fueron conformando los mercados educativos nacionales, en los 90 se conformó un mercado transnacional con diferentes modos de oferta educacional (De Souza Santos; 19).





a) *la tendencia a igualar la universidad pública y la privada* (en cuanto a otorgamiento de financiamiento y ventajas para el desarrollo de las segundas –como por ejemplo la falta de regulaciones y evaluaciones sistemáticas desde el Estado¹⁵);

b) *la disminución de los recursos públicos* destinados para el funcionamiento y desarrollo de la universidad pública, hecho que sienta las bases para que éstas sean reconvertidas en instituciones proveedoras de servicios y productos, y así generar *sus propios recursos financieros*;

c) *la reorganización de la propia institución universitaria* (agenda de investigación, criterios para la evaluación, publicación de conclusiones, condiciones laborales, etc.) en términos mercantiles y empresariales, o sea regidos por la lógica de la eficiencia y la productividad y condicionados fuertemente por la demanda del mercado.

En el caso latinoamericano, la ofensiva de los sectores dominantes se enfrentó con una tarea particular puesto que las reformas mercantiles tenían que transformar a la universidad pública forjada en gran medida a partir de la influencia del programa de la Reforma Universitaria de 1918. Como señala Marcela Mollis, el modelo con el cual se fue forjando la universidad pública latinoamericana tiene sus raíces en el ideario reformista. Sintéticamente, para esta especialista en políticas educativas, ese modelo tuvo como principales reivindicaciones “la autonomía, el gobierno tripartito a través de los representantes de los claustros de profesores, estudiantes y graduados, la libertad de cátedra y las cátedras paralelas; el régimen de concursos para la designación de profesores; el ingreso irrestricto y la gratuidad de la oferta educativa”¹⁶.

Esto significa que en América Latina, la avanzada del capital, en su búsqueda por transformar la universidad pública, se encontró con una institución que presentaba “desfasajes” significativos en relación a sus propósitos mercantiles y a las demandas concretas del mercado. Entre ellas, resaltan una formación más global e integral que la que pretende el mercado en función de sus necesidades inmediatas; la cantidad de estudiantes que albergan las universidades y la cantidad de mano de obra calificada que requieren las grandes empresas, una tendencia que se mantiene en la medida en que sigue aumentando la cantidad anual de ingresantes; la universidad pública fue constituyéndose en un espacio mucho más

¹⁵Nuestro país es un ejemplo claro de esta dinámica, puesto que Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 y vigente hasta el momento en que fue escrito este trabajo, establece que existen dos tipos de instituciones de educación superior, las de “Gestión Pública” y las de “Gestión Privada”.

¹⁶Revista *Acción* N° 1022, segunda quincena de marzo de 2009.





democrático de lo que necesita el capital para poder avanzar en su reconversión (McCabe; 136). Es por esto que, no obstante enmarcar las reformas mercantilistas de la universidad en una tendencia estructural y en un proceso de reconversiones más vasto, insistimos en concebirlas como una tendencia profundizada pero con grados de concreción disímiles, que al depender de las diversas correlaciones de fuerzas, varían según los países e incluso las universidades.

A continuación repasaremos, con trazo grueso, las consecuencias más relevantes del proceso de mercantilización de las universidades públicas en América Latina, tomando como punto de referencia las tres dimensiones que señalamos más arriba.

a) Con respecto a la tendencia a igualar la universidad pública y la privada, en primer término las cifras indican un pronunciado crecimiento de la cantidad de alumnos que cursan sus estudios en establecimientos privados y un incremento significativo de la cantidad de universidades privadas. Según los documentos presentados en la Conferencia Regional de Educación Superior organizada por la UNESCO, que se realizó en la ciudad de Cartagena en junio de 2008¹⁷, existen en América Latina y el Caribe 1917 universidades privadas y 1023 públicas. En los mismos materiales se señala que actualmente más del 50% de la matrícula corresponda a universidades privadas. Si bien los datos difieren según los países (en Brasil y en Colombia la matrícula privada ronda los dos tercios, mientras que en Argentina está cercana al 10%), la situación sólo se explica a partir de la política de aliento y desregulación aplicada a partir de la década de los 80 al calor de los principios emanados del Consenso de Washington. Atilio Boron asegura que desde entonces “los proveedores privados” no sólo fueron bienvenidos sino permanentemente seducidos con una política que implicó el relajamiento o incluso la inexistencia de normas y regulaciones para garantizar la calidad y el acceso (Boron; 35).

En este escenario, la expansión de la universidad privada evidenciada durante los últimos 25 años tuvo como contracara el vaciamiento presupuestario de la pública y, junto con ello, un proceso de descapitalización y transferencia de recursos humanos que implicó un fenómeno de “acumulación primitiva” a favor de las primeras (De Souza Santos; 18).

Si bien, tal como veremos, la presión del capital para subsumir de manera más directa a la educación superior generó transformaciones significativas en las universidades públicas, el peso que a nivel regional adquirieron las universidades

¹⁷ Citados en Boron, Atilio; 2008.





privadas bien vale una primera reflexión combinada con un llamado de atención. Por un lado, es en este sector donde la conversión de las carreras se torna más sencilla y evidente. Por más que las universidades públicas sigan cargando con el grueso de la investigación y en gran medida mantengan su prestigio, es en la universidad privada donde más claramente se manifiesta la reconversión de una concepción de la educación como proceso de formación integral de los ciudadanos a un proceso de capacitación en ciertas habilidades que constituyen un perfil de profesional demandado por el mercado. Es allí –aunque no únicamente– donde se torna más notoria la tendencia a la tecnificación de los saberes y de los contenidos, y a ofrecer carreras cortas relacionadas íntimamente con la demanda del mercado laboral. Todo este proceso trae consigo, además, profundas consecuencias en cuanto a la falta de lugar para el desarrollo de un pensamiento crítico y, con ello, a la formación de una subjetividad mucho más ligada a la idea del consumidor que a la del ciudadano. A su vez, es en las universidades privadas donde más evidentes se tornan los condicionamientos a la libertad de cátedra y de pensamiento, e incluso donde se fragmenta aún más la actividad docente en relación a la otra dimensión de esa tarea que en la universidad heredera de la reforma aparecía como necesariamente asociada, que es la de investigar.

b) La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas de América Latina se convirtió en una realidad cada vez más palpable a partir de la crisis de la deuda externa que estalló a principios de la década de 1980. El desfinanciamiento crónico no sólo alienta la transferencia constante de personal docente y de estudiantes al sector privado, sino que genera las bases para una relación cada vez más estrecha con los grandes actores del capital concentrado, proceso que, a su vez, deriva en una pérdida creciente de la autonomía institucional y de las libertades académicas. La elaboración de una agenda de investigación en función de los grandes problemas sociales y basada en una concepción del conocimiento como bien público es puesta seriamente en cuestión, al tiempo que la posibilidad de contar con los fondos necesarios para avanzar en una autorreforma constante de la universidad pública queda cada vez más remota.

Algunos datos bastan para sostener que la crisis financiera llegó para quedarse, pero al mismo tiempo es imprescindible comparar la situación de la universidad pública latinoamericana con la de los países ricos para advertir que el desfinanciamiento público no está al margen del lugar dependiente asignado a nuestros países en el sistema mundial. Si bien asistimos, desde la segunda





posguerra, a una expansión generalizada y sostenida de la matrícula¹⁸ (entendible en función del mayor acceso a la universidad de las mujeres y otros grupos sociales históricamente marginados de la educación superior, sumado a la mayor calificación de la mano de obra demandada por las empresas), esta expansión no fue acompañada ni con un mayor presupuesto ni con un incremento en las dedicaciones exclusivas entre los docentes. Sólo como para aportar algunos datos contundentes, en uno de los documentos presentados en la Conferencia Regional de la UNESCO realizada en 2008, se remarca que –salvo en Uruguay y en El Salvador– la tendencia en la proporción del PBI per cápita que se gasta por alumno es a la baja. Del mismo modo, hay que señalar que mientras que en Estados Unidos y en Canadá se invierten 9500 dólares anuales por cada estudiante universitario, en América Latina y el Caribe la cifra apenas llega a los 650. Y es casi una cuarta parte de lo que invierten los países asiáticos (Boron; 49-50). La situación es muy gráfica si además comparamos los presupuestos con los que cuentan las universidades en los países centrales. Mientras que la Universidad de California, que tiene una matrícula de 250.000 estudiantes, cuenta con un presupuesto de 7000 millones de dólares, la Universidad de Buenos Aires, cuya matrícula supera largamente los 300.000 estudiantes, tiene un presupuesto que apenas ronda los 500 millones de dólares.

En este marco ha hecho mella el discurso acerca de que las universidades deben generar dinero y ser rentables. Vender productos y servicios en el mercado, tanto en forma de propuestas educativas como de investigaciones aplicadas y tareas de asesoría, por ejemplo. Tal es así que, a partir de los años 90, cobró fuerza la figura de los consultores y los servicios de consultoría. Este fenómeno se da en medio de una constante presión por parte de las grandes empresas que como consumidoras, usuarias e incluso coproductoras del conocimiento científico demandan un conocimiento útil económicamente, es decir que pueda ser –directa o indirectamente– comercializable y redituable (De Souza Santos; 40). Tal como sostiene la socióloga Norma Giarraca, durante la década del 90 en el campo de las ciencias sociales fue muy común que docentes e investigadores trabajaran como consultores para organismos internacionales como el Banco Mundial o la FAO. En aquel momento “la figura del consultor fue muy generalizada y llevó a que

¹⁸En 1960 existían en todo el mundo 13 millones de estudiantes universitarios, la cifra en 1995 trepó a 82 millones y para la actualidad se estima que ya existen 100 millones. En América Latina la tasa de matriculación universitaria, es decir el porcentaje de estudiantes entre las personas de 20 a 24 años, pasó del 2% a mediados del siglo pasado al 29 en los primeros años del presente. No obstante, hay que señalar que en América del Norte y Europa occidental la tasa trepa al 57% y que el nivel fluctúa bastante entre los países de la región.



la gente trabajara más en consultoría que en investigación, y después presentara ese trabajo de consultoría como resultado de la investigación”. En el caso argentino, según la socióloga y docente de la UBA, luego de la crisis de 2001, con el desprestigio que sufrieron dichos organismos, esa labor cambió de marco y pasó a servir a la Barrick Gold y otras corporaciones transnacionales¹⁹.

Este panorama modifica tremendamente el trabajo de investigación en la región. En gran parte de las universidades y otros organismos públicos se venía privilegiando políticas a mediano y largo plazo en donde grupos de jóvenes investigadores se formaban con otros de mayor experiencia. El nuevo modelo introduce un tipo de investigación “por encargo”, aplicada y a corto plazo que no sigue los criterios mínimos de rigurosidad y se aleja cada vez más de los problemas de las mayorías nacionales (Boron; 86-87).

c) La última dimensión o nivel de la tendencia a la mercantilización que atraviesa la universidad pública latinoamericana corresponde a las transformaciones llevadas a cabo en el orden de su organización y funcionamiento como institución especializada en la transmisión de la herencia cultural, la investigación y la formación de profesionales, investigadores y docentes.

En este nivel, la creciente subordinación a la lógica del capital y la expansión de la forma mercancía se expresará, fundamentalmente, en la implementación de mecanismos que tienden a plantear la actividad docente e investigativa en términos de “productividad” y a precarizar y flexibilizar las condiciones de trabajo. En el mismo sentido, las reformas mercantilistas intentarán avanzar sobre aquellos elementos que, siendo propios de la universidad pública del Estado de Bienestar y de la herencia Reformista, aparecen como desfasajes respecto de su objetivo de avanzar en la subsunción real. Así, los actores políticos, los agentes del propio campo académico y los organismos internacionales intentaron arrasar con la gratuidad y el acceso irrestricto, y pusieron en cuestión la razón de ser de los órganos tripartitos de Gobierno, sosteniendo la necesidad de que haya una clara preeminencia de los profesores en la toma de decisiones y el gobierno universitario.

En este punto, es preciso señalar –sobre todo para llamar la atención acerca de posicionamientos meramente defensivos– que el programa mercantilizador, impulsado como parte del avance neoliberal registrado a partir de la década de 1980, trabajó sobre las dificultades presupuestarias que ya existían desde antes en la universidad pública, pero también actuó en el caldo de cultivo que consti-

¹⁹Revista *Acción* N° 1022, segunda quincena de marzo de 2009.





tuyó, por un lado, el desprestigio que sufrieron todas las instituciones públicas en aquellos años, y por otro lado, también se filtró a partir de las limitaciones que el propio sistema universitario mostró y sigue mostrando en cuanto al carácter muchas veces formal de sus mecanismos democráticos.

Como parte de las reformas mercantilistas implementadas en la región se instauró un régimen de evaluación externa, a cargo de instituciones de las que participan funcionarios y organismos ajenos al campo científico, donde lo que tiende a primar es el nivel de productividad y los criterios cuantitativos por sobre una valoración que tenga más en cuenta los procesos, la pertinencia de los objetos de estudio y las condiciones en las que se desempeña el rol docente. En el caso argentino, la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995 y actualmente en vigencia, creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que se dedica a evaluar a las universidades y a aprobar sus títulos. Para la socióloga María Pía López, este tipo de procedimientos tiene un alto grado de responsabilidad “en el vaciamiento de las posibilidades críticas y las obligaciones sociales de las universidades”²⁰. Siguiendo con lo que ocurre en nuestro país, este mecanismo se complementa con el régimen de incentivos a docentes investigadores implementado desde 1993. En el marco de este programa, los docentes reciben un plus salarial si forman parte de un proyecto de investigación. El monto se paga en cuotas y depende de una categorización que realiza el ministerio de Educación. Como consecuencia de la aplicación de ese programa, y sólo a cambio de un plus salarial, los docentes son obligados a dar clase los dos cuatrimestres que dura el año lectivo (con lo cual en algunos casos la cantidad de horas de trabajo se duplicó), y los proyectos de investigación llegaron a multiplicarse por cuatro.

A estas consecuencias habrá que sumarle la pérdida de autonomía por parte de la universidad, ya que la acreditación de carreras y la categorización dependen de instancias externas; la mayor distancia en los ingresos docentes, cosa que —además de echar por tierra el derecho a igual tarea igual retribución— genera una mayor fragmentación en un cuerpo que de por sí suele tener diferentes derechos políticos en la propia universidad; y la estrechez de las condiciones necesarias para desarrollar una actividad intelectual crítica, en la medida en que la evaluación pasa de la institución a las personas (los docentes) (Glavich; 160-161).

En cuanto a estos mecanismos, vale llamar la atención acerca de su presencia en la región pero también sobre el nivel de consenso que han logrado. El caso

²⁰Revista *Acción* N° 1022, segunda quincena de marzo de 2009.





argentino sirve nuevamente como ejemplo, puesto que en nuestro país una nueva ley de educación superior está por ser tratada en el Parlamento. Según el proyecto que la bancada oficialista ha dado a conocer, la continuidad de la Coneau no está puesta en duda²¹.

Sobre este tema, Boron asegura que este sistema, por el cual los salarios de los docentes se complementan con un complejo sistema de incentivos, que a su vez dependen de una evaluación en donde el desempeño o “la productividad” es establecida mediante una combinación de criterios administrativos y académicos, se extendió a varios países de la región. Asimismo, afirma que la posible penalización económica tiene un efecto de control ideológico, ya que el mecanismo de precarización laboral se traduce en proceso de depuración del mundo universitario “de presencias intelectual o políticamente indeseables” (Boron; 57).

La combinación de mecanismos evaluatorios externos en función de criterios productivistas y, por ende, cuantitativos, tiene su expresión también en una carrera desenfrenada por presentar trabajos en congresos y jornadas y lograr publicaciones reconocidas en el régimen de referato. Por un lado, esa lógica refuerza una tendencia propia del campo intelectual a la autorreferencialidad que puede llevar al mutismo. Por otro, contrae aún más el margen de autonomía institucional, grupal y personal. En la búsqueda por acreditar más méritos, hay una tendencia a ajustar la producción a las exigencias y pautas de valoración, selección de temas, prescripción de lenguajes y metodologías propuestos por las instancias de evaluación, acreditación y publicación. Un caso paradigmático está constituido por la valoración mayor que los organismos nacionales que evalúan el desempeño de los docentes-investigadores le asignan a un artículo publicado en revistas con referato de Estados Unidos o de algún país europeo que a un libro publicado en América Latina (Boron; 91).

El tema de las publicaciones es un tema en sí mismo. Por un lado, la posibilidad de pensar a la producción de conocimiento como un bien público supone generar las condiciones para su difusión, circulación y divulgación. La actualidad de las universidades públicas de la región contrasta con las políticas editoriales que existieron sobre todo hacia los años ´60. Hoy por hoy, las editoriales universitarias son apenas un recuerdo o, en el mejor de los casos, un sello que debe hacer convenios con otras editoriales. El hecho de que la mayor parte de las producciones

21 Ver <http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-122183-2009-03-27.html>. Al respecto, María Pía López sostiene que las reformas que fueron cuestionadas y resistidas en los 90 hoy son toleradas: “es grave que no esté en discusión ya el papel de la Coneau” (Revista *Acción* N° 1022, segunda quincena de marzo de 2009).





de los docentes, investigadores y estudiantes no se canalicen por las editoriales universitarias pone en las editoriales comerciales la última palabra acerca de lo que se publica y lo que no.

De esta manera, podemos señalar con toda claridad que la universidad pública no permaneció al margen del proceso de precarización, flexibilización y, por lo tanto, de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que se llevó a cabo de modo general en nuestras sociedades. Las reformas mercantilistas tuvieron puntualmente en las libertades académicas y la autonomía universitaria un blanco nada casual ni inocente. Los funcionarios políticos locales, los tecnócratas internos y los que trabajaron bajo el ala de los organismos financieros internacionales fueron muy conscientes respecto a que para reestructurar la universidad pública debían menguar significativamente el poder de los docentes e investigadores (De Souza; 30). Para avanzar en la subordinación de la universidad a las necesidades del gran capital se debía reducir la libertad del docente frente a la cátedra y en el aula, dificultar su trabajo de organización gremial, al tiempo que se debía acotar el poder de definición del investigador y las posibilidades de la institución para fijar un programa en base a criterios político-académicos y a fines sociales. En otras palabras, ajustar el proceso de subsunción real implicó, y sigue implicando, poner en práctica mecanismos específicos con el propósito de volver trabajo productivo el trabajo improductivo de los intelectuales.

B. NOTAS SOBRE LA SITUACIÓN EN ARGENTINA:

Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que posee una matrícula universitaria que supera el millón de estudiantes (junto con México y Brasil). Asimismo, es el país donde se generó la Reforma Universitaria del 18, que marcaría a fuego al resto del continente. Estas son algunas de las razones por las que se torna pertinente e interesante analizar, aunque sea sintéticamente, la manera en que el proceso de mercantilización se dio en nuestro país. Por los fines de este trabajo, y su significancia a nivel del sistema universitario argentino, aquí nos centraremos en la Universidad de Buenos Aires²².

Tomando como referencia las dimensiones del proceso de mercantilización esbozadas en el apartado anterior, en este caso haremos hincapié en el nivel referido al desfinanciamiento público y la venta de servicios para generar recursos propios, aunque no dejaremos de hacer mención a mecanismos específicos que hacen a

²² Así lo indican los siguientes datos provistos por la propia universidad: oficialmente tiene 321.000 estudiantes; 27.311 docentes; y 12.485 trabajadores no docentes. Esa cantidad de estudiantes representa el 26% de los alumnos del sistema universitario nacional. Además la UBA produce el 30% de la investigación del sistema universitario nacional. Ver www.uba.ar





la transformación de sus modos de organización y funcionamiento en relación a sus tareas específicas como universidad.

La situación presupuestaria del sistema universitario es crítica en su conjunto y en el caso de la UBA se agudiza aún más por su envergadura. Según la ley del Presupuesto Nacional, la asignación para todas las universidades nacionales para el año 2009 asciende a 7951 millones de pesos²³. Vale decir que este monto representa el 3,4% del total de los gastos estimados, mientras que el presupuesto del año anterior representaba el 3,5%. Además, hay que señalar que los rectores habían solicitado un presupuesto de 10.000 millones, solo para cubrir gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales, es decir sin contemplar inversiones en infraestructura.

En el caso puntual de la UBA, su Consejo Superior había solicitado un presupuesto de 2445 millones de pesos, pero finalmente se le asignaron apenas 1535 millones (casi 410 millones de dólares)²⁴. De ese monto, el 90% se destina a gastos de funcionamiento, y se calcula que entre el 65 y el 70 por ciento de los docentes tienen dedicación simple o trabajan *ad honórem*.

Según datos de 2008, sólo 1100 alumnos reciben una beca simbólica de 250 pesos mensuales (unos 66 dólares). Para becas, la UBA cuenta con un presupuesto anual de 3.3 millones de pesos, y según las autoridades necesita mínimamente 4 veces más. Una situación similar se presenta en cuanto a la investigación. La UBA recibe 26 millones para subsidios y becas, pero según las autoridades debería recibir un 120 % más. Financia unos 1500 proyectos de investigación trienales, el monto promedio que aporta por proyecto es de 10.217 pesos (2.725 dólares). En materia de gastos de mantenimiento, hasta 2008 podía destinar algo así como 66 centavos de peso mensuales por metro cuadrado construido, y según las autoridades necesitaría como mínimo seis veces más.

En estas condiciones avanza la institucionalización de las actividades que generan recursos financieros. Actualmente, los recursos que genera la universidad representan el 8% del total del presupuesto que recibe del Estado Nacional.

Tal como venimos señalando, a lo largo de los últimos 25 años la Universidad de Buenos Aires fue incorporando parte de los criterios que caracterizaron la ofensiva mercantilista hacia la universidad pública. Sin embargo, esa incorporación viene siendo bastante conflictiva producto, sobre todo, de la resistencia de estudiantes

²³ <http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2009/ley/ley2009.pdf>

²⁴ <http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=230p>. Cabe agregar que para el 2008 el Consejo Superior solicitó 2.015 millones de pesos, pero sólo recibió 1.051 millones, un 47% menos.





y docentes, pero también en base a su prestigio como institución pública y por el hecho de que no ha desaparecido entre las capas medias el imaginario que vincula educación pública y movilidad social. No obstante, en el último tiempo se ha tendido a naturalizar la precariedad presupuestaria y edilicia, las formas de precariedad laboral –que se agudizan en otras universidades nacionales creadas durante los años 90– e incluso la mayor injerencia de organismos estatales y de las grandes empresas.

En este punto, vale la pena señalar que en la última reforma de los estatutos celebrada a fines de 2008, la mayoría de los miembros de la asamblea universitaria aprobaron la legalización de la generación de recursos financieros²⁵, figura que no existía en los reglamentos anteriores.

En esta línea y para terminar, daremos cuenta de algunos de los mecanismos que indican una tendencia clara a concebir la producción de conocimiento en tanto que mercancía, tendencia que difiere al interior de esta universidad teniendo en cuenta las diversas facultades y zonas disciplinarias.

Uno de los casos paradigmáticos en este sentido lo constituye UBATEC S.A., una empresa conformada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina, la Confederación General de la Industria y la Universidad de Buenos Aires, que desde 1991 se dedica a la prestación de todo tipo de servicios de consultoría y gestión de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. En su página web, esta sociedad anónima asegura que “los servicios que puede brindar UBATEC incluyen asesorías técnicas, capacitación, vinculación y transferencia de tecnología [...] para lo cual ha establecido y está en condiciones de establecer todo tipo de convenios con universidades, centros de investigación, empresas, organismos internacionales, sector gubernamental, incluyendo acuerdos de colaboración empresaria y uniones transitorias de empresas”²⁶.

Junto con el caso de UBATEC, encontramos acuerdos y emprendimientos que vinculan a algunas facultades con los principales grupos económicos nacionales y transnacionales. A modo de ejemplo, podemos citar el de la Facultad de Agronomía con la Aceitera General Deheza (AGD)²⁷.

²⁵ <http://www.uba.ar/comunicacion/noticia.php?id=2134>

²⁶ www.ubatec.uba.ar

²⁷ La Aceitera General Deheza es una empresa agroindustrial líder en la molienda de oleaginosas, principalmente soja. Cuenta con más de 2500 empleados y exporta a 95 países en los cinco continentes. Es una de las empresas que más se benefició con la expansión del cultivo de la soja transgénica vivida en los últimos años en Argentina.





Aquí podemos apreciar cómo el gobierno de esa facultad, cuyo decano no duda en utilizar la palabra “clientes”, ofrece un servicio, en este caso un postgrado. Mercantilización del conocimiento y transferencia de capital educativo al sector privado aparecen como las consecuencias más evidentes. Este caso nos permite presentar un ejemplo más que ilustrativo de todo lo que venimos describiendo.

En el marco de dicho acuerdo, una nota²⁸ publicada en la página web de la Facultad de Agronomía dice así: “se firmó también un Convenio Específico para dictar la ‘Especialización en Cultivos de Granos’ en el Centro Tecnológico y de Servicios de AGD, ubicado en La Carlota, provincia de Córdoba”. A continuación, el decano de la facultad no deja dudas en cuanto a su valoración: “Para la Facultad es un convenio de interés, que junto a otros que estamos llevando adelante, vincula cada vez más a nuestros investigadores y a nuestras acciones con los requerimientos que tienen las empresas y el medio; en síntesis responde a la política que hemos fijado desde esta gestión”. La similitud entre las definiciones del decano con cualquier directivo empresarial se refuerza cuando el Ingeniero Basso agrega que: “La aceitera nos brinda la posibilidad de llevar este posgrado a un área local donde tiene un gran volumen de clientes”.

Ahora sí para finalizar, podemos decir que, una vez leídas estas ideas no sorprende encontrar en la página de la facultad la noticia que habla de la apertura de un postgrado en Agronegocios y alimentos²⁹. Esto se anuncia en momentos en que las consecuencias de la expansión del cultivo de la soja transgénica en Argentina pone en evidencia que, así como el joven Marx denunciaba la legislación que penaba a los pobres por recoger leña en los bosques otrora comunitarios, la apropiación de una renta extraordinaria por parte de una minoría se lleva a cabo a pesar de atentar contra la fertilidad de la tierra, la conservación del agua y hasta de las personas mismas.

A MODO DE CIERRE

Una vez hecho el recorrido que nos planteamos podemos sostener que la mercantilización de la universidad pública –en tanto proceso específico de la tendencia propia del capital a la expansión sobre las diferentes esferas sociales y como etapa de la reconversión social encarada por los sectores dominantes a escala global luego de la crisis de principios de los 70– supone una serie de particularidades que es preciso analizar si se pretende generar una

²⁸ <http://agro.faua.info/es/node/94>

²⁹ [Http://agro.faua.info/es/node/25](http://agro.faua.info/es/node/25)





alternativa³⁰. Del mismo modo que el perder de vista esa vinculación con las características estructurales del sistema capitalista y los procesos históricos más generales puede llevar a posiciones nostálgicas o de mera resistencia, desconocer dichas particularidades puede llevar a posiciones que terminen arando en el aire, dejando para el “día después” la pelea por regenerar las condiciones para la producción de un conocimiento crítico fundado en su carácter de bien público.

Es necesario no descuidar el hecho de que los intentos de subordinación por parte del capital no siempre son directos (en términos de subsunción formal y real), es decir, no siempre implican la aplicación directa del trabajo intelectual y de los productos del desarrollo científico-técnico para la obtención de plusvalía. Ese sería el caso de una investigación a pedido o de la producción de objetos, fórmulas y demás productos en un régimen de demanda o co-producción. Gran parte de la injerencia es mediada e implica una apuesta a mediano plazo. Esto se observa en los esfuerzos por imponer perfiles más técnicos a los planes de estudio, en la venta de servicios educativos, pero también en las formas de disciplinamiento del trabajo y en la instalación de la identidad del consumidor por sobre la del ciudadano, que de hecho se tiende a expandir entre los estudiantes. Es aquí donde, junto con Lukács, señalamos que si bien los procesos de cosificación remiten a la expansión de la forma mercancía y a las tendencias estructurales del modo de producción capitalista, están vinculados con fenómenos particulares que tienen derivaciones específicas en el plano de la subjetividad.

De este modo, yendo a los procesos concretos, podemos decir que a menos financiamiento público menos autonomía institucional y menos libertades académicas

30 En este marco, si bien va más allá de los propósitos de este trabajo, habrá que profundizar en el análisis de las contradicciones y los conflictos que en el caso argentino viene generando la aplicación de las reformas mercantilistas en las universidades públicas. A las resistencias y contradicciones propias de los últimos 15 años habrá que sumarle las que surgen actualmente en un escenario caracterizado por ser producto de la crisis de hegemonía que explotó en 2001 y estar marcado por las características que asumió su posterior recomposición. En ese marco, es trascendente pensar las contradicciones que se evidencian en el ámbito universitario argentino vinculadas al intento de llevar a cabo un proyecto de “capitalismo nacional” por parte de los dos últimos gobiernos nacionales. Esas contradicciones se ponen en evidencia cuando –en un escenario donde por lo menos discursivamente ya no se ataca a la educación pública– el desfinanciamiento crónico y la continuidad de mecanismos de precarización laboral y de instancias de evaluación y acreditación externa se conjugan con otros elementos como son el mantenimiento de la gratuidad, la promoción de ciertas carreras y el aumento en la cantidad de becarios e investigadores en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (Ver Miradas al Sur 19/04/09). Esas contradicciones se explican en parte a la luz de un proyecto político que intenta articular conocimiento y modelo productivo, aunque vale remarcar que se trata de un modelo basado en los agronegocios, la exportación de productos primarios y una inserción en el mercado mundial que no entra en contradicción con el papel asignado por los países ricos a los del Tercer Mundo.





y, con ello, más influencia del capital y menos condiciones para la autorreforma y el pensamiento crítico. O sea, menos influencia de los sectores con demandas sociales. Parafraseando a Bourdieu podemos sostener que a más subordinación al poder político y económico, y mayor relajamiento de los criterios de valoración y normas internas, menos condiciones para fortalecer una institución que a priori aparece como una de las pocas instancias sociales capaces de generar una mirada crítica sobre la propia sociedad.

Del mismo modo, los criterios cuantitativistas y productivistas de la racionalidad técnica que se impone en un marco de escasos recursos potencian los elementos de competencia entre los agentes y la tendencia a la burocratización del campo académico; en términos weberianos, las prácticas se inclinan claramente hacia un tipo de acción con arreglo a fines. La puesta en cuestión de la autonomía institucional, sumada a la precariedad laboral, genera una actividad cada vez más enajenada respecto del conocimiento nuevo y los contenidos a transmitir, y cosifica, al profundizar las relaciones mercantiles, las relaciones entre universidad y sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Agosti, Héctor, 1956, *Para una política de la cultura*, Buenos Aires, Ediciones Procyon.

Basualdo, Eduardo, 2000, *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*, Buenos Aires, UNQui.

Boron, Atilio, 2008, *Consolidando la explotación. La academia y el Banco Mundial contra el pensamiento crítico*, Córdoba, Espartaco.

Bourdieu, Pierre, 1999, *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, EUDEBA.

Feldfeber, Miriam y Saforcada, Fernanda, "Libre comercio y Educación Superior en América Latina. Notas sobre el caso argentino, disponible en http://www.foro-latino.org/flape/foros_virtuales/doc_fv_3/texto-discusion-lpp-feldfeber-sforcada.pdf

Gambina, Julio y Campione, Daniel, 2002, *Los años de Menem. Cirugía mayor*, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires.

Glavich, Eduardo, 2000, "UBAtec-UBA-CyT-UBAnet: UBA Sociedad Anónima", en AA.VV, *UBA Factory*, Buenos Aires, 2006.

Gramsci, Antonio, 2000, *Los intelectuales y la organización de la cultura*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Lukács, Georg, 1983, *Historia y conciencia de clase*, México, Grijalbo.





PERIFERIAS N° 18 SEMESTRE 2 | 2009

Marx, Karl y Engels, Friedrich, 1998, *El Manifiesto Comunista*, Barcelona, Fontana.

Marx, Karl, 1997, *El Capital. Libro I, Capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción*, México, Siglo XXI.

Marx, Karl, 2000, *El Capital*, Libro I, Tomo I, Madrid, Akal.

Marx, Karl, 2007, *Los debates de la Dieta Renana*, Barcelona, Gedisa.

Marx, Karl, 2008, *Introducción a la crítica de la economía política (1857)*, Buenos Aires, Luxemburg.

McCabe, Patricio, 1997, "Las estrategias del capital mundial para la educación argentina", en AA.VV, *UBA Factory*, Buenos Aires, 2006.

Rubinich, Lucas, 2001, *La conformación de un clima cultural. Neoliberalismo y universidad*, Buenos Aires, Centro Cultural Rojas.

FUENTES:

<http://www.agro.uba.ar/>

<http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2009/ley/ley2009.pdf>

<http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-122183-2009-03-27.html>

<http://www.uba.ar>

<http://www.ubatec.uba.ar>

Miradas al Sur 19/4/09.

Revista *Acción* N° 1022, segunda quincena de marzo de 2009.



APROXIMACIONES AL COOPERATIVISMO DE TRABAJO DEL SIGLO XXI

LÍMITES Y DESAFÍOS

Vanessa Ciolli y Gabriela Roffinelli***

INTRODUCCIÓN

En el nuevo siglo la iniciativa popular puso en marcha originales experiencias auto-organizativas de producción y consumo. En muchos casos estas experiencias han asumido la forma de cooperativas populares de trabajo, que se distinguen de las cooperativas tradicionales que existieron en la Argentina desde comienzos del siglo XX.

Dichas experiencias revalorizan principios de organización de la producción alternativos a la “dirección despótica” de las empresas capitalistas. Allí, se tejen relaciones sociales basadas en la solidaridad, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la democracia, donde los objetivos se configuran en función de la satisfacción de las necesidades humanas y el respeto por el medio ambiente.

No obstante, dichas experiencias deben garantizar su supervivencia y consolidación en el marco de un sistema socio-económico basado en la producción de cosas para el intercambio mercantil y no en la satisfacción de las necesidades humanas. Y, como tales, también expresan las transformaciones que se han venido

* Lic. en Ciencia Política. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Fac. Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), CONICET y de la FISyP.

** Lic. en Sociología. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Fac. Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires) y de la FISyP. Docente de la Fac. Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.





produciendo en el modelo de acumulación capitalista y, consecuentemente, en el mundo del trabajo.

Las próximas páginas se orientan a analizar las tensiones que se producen entre las prácticas participativas y autogestionarias desarrolladas por las cooperativas populares y los principios que rigen el mercado capitalista. El objetivo más amplio es desmenuzar los interrogantes que se presentan a las prácticas cooperativas que se inscriben en un horizonte de lucha social anti-capitalista.

1. DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO DE TRABAJO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

1.1 TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES Y EL MUNDO DEL TRABAJO

En Argentina, la expansión del cooperativismo de trabajo o de producción –bajo nuevas y variadas modalidades– está relacionada directamente con las transformaciones que se han producido en el modelo de acumulación capitalista y en el mundo del trabajo.

Según los datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en 2009 existen 13.620 cooperativas de trabajo en todo el país. Como se observa en el siguiente cuadro, la cifra expresa un fenómeno cuyo despegue

CUADRO 1: CANTIDAD DE COOPERATIVAS POR OBJETO SOCIAL				
Objeto social	1984	1994	2004	Mayo 2009
Agrarias	1.282	1.305	2.264	2.243
Trabajo	409	2.632	9.261	13.620
Provisión	342	631	1.867	2.458
Vivienda	392	1.365	2.839	3.373
Consumo	209	106	219	220
Crédito	287	200	296	394
Seguros	57	55	34	34
Servicios públicos	1.100	1.270	1.784	1.780
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INAES y Andrea Levín, Griselda Verbeke.*				

* Levín Andrea; Verbeke Griselda, (1997), “El Cooperativismo Argentino en Cifras: tendencias en su evolución: 1927 –1997”, Revista *Realidad Económica*, N° 152, Buenos Aires, IADE, p. 18. A estas cifras, habría que sumarle la proliferación de un conjunto muy amplio de emprendimientos asociativos que se desarrollan en la informalidad jurídica.





se produce durante la década del '90. Donde las cooperativas de trabajo crecen en términos absolutos y con respecto de las de otro tipo de actividad.

Desde una perspectiva que busca situar la experiencia de las cooperativas de trabajo en el marco del capitalismo actual, resulta oportuno repasar algunos de los procesos socio-económicos que forman parte de la reestructuración del modelo de acumulación de capitales producida en las últimas décadas a nivel mundial¹.

A los fines de nuestro análisis, se destacan:

- a. Desmantelamiento del entramado productivo de la ISI.
- b. La flexibilización o precarización de las condiciones de trabajo
- c. Implementación de modalidades de trabajo toyotistas.

a) En Argentina, dichos cambios comenzaron –a partir del shock económico conocido como el “Rodrigazo” de junio de 1975– con el progresivo desmantelamiento del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).²

Se diseñó una estrategia alternativa de valorización del capital y distribución del ingreso, centrada en las actividades financieras³ y de servicios. El ritmo de las transformaciones se aceleró hacia la década del '90 con la implementación de las reformas estructurales promovidas por el Consenso de Washington⁴.

1 La crisis de rentabilidad del capital de los años 70 origina la necesidad de los capitales de reorganizarse y modificar sus estructuras productivas, con la finalidad de volver a los niveles de rentabilidad de la posguerra.

2 A partir de la crisis de 1929 las dificultades para importar productos industrializados alentaron el crecimiento de industrias que avanzaron –sin competencia externa– en el abastecimiento del mercado interno. Con la llegada del gobierno peronista este modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) se volvió predominante hasta su desmantelamiento en la década del 70.

3 “Se trata del predominio que ejerce la valorización financiera como eje ordenador de las relaciones económicas. Por cierto, la misma no alude únicamente a la importancia que adquiere el sector financiero en la asignación del excedente sino a un proceso más abarcativo que revoluciona el comportamiento microeconómico de las grandes firmas y consiste en la inusitada gama de activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etc.), tanto en el mercado interno como en el internacional. Este proceso, que irrumpe y es predominante en la economía argentina desde fines de la década de los años 70, se expande debido a que la tasa de interés interna, y la diferencia marcadamente positiva de la misma con respecto a la tasa de interés internacional, supera la rentabilidad de las diversas actividades económicas, y a que el acelerado crecimiento del endeudamiento externo opera como una masa de excedente valorizable en el mercado interno.” Basualdo, Eduardo (2000), *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*. Buenos Aires, Editores FLACSO, Universidad de Quilmes, IDEP.

4 Disciplina fiscal para eliminar el déficit público; reorientación del gasto público hacia educación y salud; reforma tributaria (ampliación de las bases); liberalización financiera; tipo de cambio garantizado por el





La desregulación asimétrica y la apertura del mercado local a la importación de bienes de consumo expuso a las pequeñas y medianas industrias –que durante la ISI eran grandes generadoras de empleo– a competir con tecnología obsoleta. Por lo tanto, muchas cerraron y expulsaron trabajadores al desempleo.⁵

La gran industria logró una mayor productividad gracias a la incorporación de adelantos tecnológicos y de nuevos procesos organizativos de la producción, así como también aprovechó las nuevas modalidades precarizadas de contratación. De ese modo, también se transformó en gran expulsora de mano de obra.

En este marco, la privatización de las grandes empresas públicas, también, se tradujo en despidos masivos.

De modo que en la pasada década del 90 el fenómeno del desempleo apareció con fuerza en Argentina. Índices históricos de desocupación se hicieron sentir entre la población trabajadora; millones de personas se quedaron fuera del “mercado laboral”. Para el 2001, la desocupación alcanzó –según datos oficiales⁶– el 21,5% de la población económicamente activa, y la subocupación llegó al 18,6%. En conglomerados urbanos como Gran Catamarca rondó al 25,5%, en Gran Córdoba 25,3%, en Gran Rosario 24,3% y en el GBA 22%.

b) El desempleo masivo constituyó un escenario favorable para la *flexibilización* o *precarización* de las condiciones laborales de los que permanecieron ocupados.⁷

En primer lugar, la precarización *de hecho*, es decir, el trabajo no registrado (*en negro*), aumentó enormemente.

En segundo lugar, la desregulación del mercado laboral abrió la puerta a la legitimación de dichas modalidades de trabajo precario. La nueva Ley de Empleo,

mercado y competitivo; liberalización comercial; inversión extranjera directa; privatización de empresas públicas; desregulación económica; garantía de los derechos de propiedad.

5 Según los resultados del Censo Nacional Económico 94, de un total de 96.377 locales censados (manufactureros) en todo el país, 69.057 tienen hasta 5 personas empleadas, 11.850 tienen entre 6 y 10 empleados y sólo 2.457 locales tienen más de 25 personas ocupadas. Cfr. CNE 94 Avance de Resultados. Informe n° 2, INDEC.

6 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), www.mecon.gov.ar.

7 Según la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), el 47,5% de la población económicamente activa, estimada en 15,5 millones de las personas ocupadas, trabaja en negro. A su vez, el 27,6 % de los puestos de trabajo se concentran en el sector servicios, que incluye a la administración pública y a los beneficiarios de planes sociales, el 23,2 % está empleado en comercios, restaurantes y hoteles, el sector bancos y servicios financieros tiene el 10% de los empleados, la construcción el 7,9 % y el servicio doméstico el 7,7 %. La industria manufacturera ocupa escasamente al 14 % del total de trabajadores activos.





sancionada en 1991, introdujo cuatro modalidades contractuales por tiempo determinado (de fomento del empleo, por lanzamiento de nueva actividad, de práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación).

Otra modalidad de precarización laboral –que, como veremos, es de suma importancia para el análisis propuesto– se presenta bajo formas de relación de dependencia encubiertas, a través de la tercerización, el cuentapropismo o el falso trabajo autónomo (facturación, contratos de locación de obra, etc.).

Asimismo, con el argumento de “preservar el empleo” se morigeraron los requisitos y costos de los despidos. Como resultado, se inicia un proceso de individualización de las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo.

c) Los grandes triunfadores del nuevo orden económico (los concentrados grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros⁸) impusieron nuevos procesos de organización del trabajo.

Donde el cronómetro y la producción en serie son sustituidos por la flexibilización de la producción, por modalidades de desconcentración industrial [y desindustrialización en Argentina], por patrones de gestión de la fuerza de trabajo, de los cuales los procesos de “calidad total” son expresiones visibles, por nuevos patrones de búsqueda de productividad, por nuevas formas de adecuación de la producción a la lógica del mercado. En plena sintonía con el mundo japonés y también con varios países del capitalismo avanzado y del Tercer Mundo industrializado. El “toyotismo” penetra, se mezcla e incluso sustituye, en varias partes, el patrón taylorismo-fordismo.⁹

Las grandes empresas, especialmente, las transnacionales impusieron –en el país– un proceso de producción flexible (Toyotismo), con horarios y ritmos diferentes

8 “Resulta de interés destacar que es bajo un gobierno constitucional, el iniciado en 1989, que se consolidan los objetivos de última instancia de la dictadura militar. La coalición social que se impone en 1976 (el capital más concentrado de origen local y extranjero, la banca internacional, los organismos financieros internacionales) sigue comandando el rumbo social de la Argentina, con ajustes y contradicciones, pero los componentes fundamentales del bloque siguen siendo idénticos. Ha cambiado de modo drástico el régimen político (de dictadura militar a democracia representativa) y la distribución del poder al interior del Estado (Las FFAA perdieron espacio en una media impensable dos décadas atrás), pero no el dominio del gran capital sobre los ámbitos sociales fundamentales, dentro y fuera del aparato estatal”. Cfr. Campione y Gambina, 2003, *Los años de Menem. Cirugía mayor*, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, p.11.

9 Antunes, Ricardo, 1998, “La centralidad del trabajo hoy”, revista *Herramienta*, N° 8, Buenos Aires, Ediciones Herramienta.





en función de una demanda específica; por lo tanto, se dejaron de generar puestos de trabajo tendientes a la masividad y la homogeneidad. De esta forma, se desestructuró el mercado de trabajo, es decir, cualitativamente se fragmentó y se volvió, cada vez, más heterogéneo y segmentado. Al mismo tiempo, la producción dejó de estar orientada a un gran mercado interno de origen asalariado.

A su vez, las empresas combinaron este proceso de producción flexible (Toyotismo)¹⁰ con la tercerización u “outsourcing”: sobre la premisa de que no existe una empresa que sea realmente productiva en todas sus actividades, se identifica una porción de actividades que podrían ser desempeñadas más “eficiente” o “eficazmente” por otra empresa a subcontratar (ya sea producir alguna pieza específica o realizar tareas como mantenimiento general, limpieza o vigilancia).

El sociólogo Ricardo Antunes sostiene que:

Como resultado de las transformaciones y metamorfosis en curso en las últimas décadas, particularmente en los países capitalistas avanzados, con repercusiones significativas en los países del Tercer Mundo dotados de una industrialización intermedia, el mundo del trabajo vivió múltiples procesos: de un lado, se verificó una desproletarización del trabajo industrial, fabril, en los países del capitalismo avanzado. En otras palabras, hubo una disminución de la clase obrera industrial tradicional. Pero, de otro lado, paralelamente, ocurrió una significativa subproletarización del trabajo, consecuencia de las formas diversas del trabajo parcial, precario, tercerizado, subcontratado, vinculado a la economía informal, al sector de servicios, etc. Se comprobó, entonces, una significativa heterogeneización, complejización y fragmentación del trabajo.¹¹

En síntesis, el desempleo, la subocupación y la precariedad laboral o informalidad se vuelven fenómenos estructurales y funcionales a la nueva articulación capitalista denominada neoliberal.

1.2 EL COOPERATIVISMO DE TRABAJO EN LOS '90.

El Censo Nacional Económico de 1994 demostró que la proliferación de las cooperativas de trabajo estaba condicionada por los mencionados cambios en el proceso productivo y en las condiciones de trabajo. La evidencia más

¹⁰Esto no significa que el modelo taylorista - fordista haya desaparecido totalmente.

¹¹*Ibid.*





clara es que las mismas se concentran en actividades relacionadas con servicios empresariales, especialmente en ramas que las grandes firmas tercerizaron.

Las cooperativas de servicios empresariales representan la cuarta parte del total de las cooperativas de trabajo y más de la mitad de los trabajadores. Están incluidas allí las cooperativas de seguridad, de limpieza y las agencias de trabajo, acompañadas en menor medida por estudios contables, de ingeniería, consultoras y otros servicios profesionales equivalentes. Este conjunto tiene un valor de producción de 65 millones de pesos y un valor agregado de 30 millones de pesos. Este valor agregado está constituido mayoritariamente por los ingresos de los asociados. Las cooperativas concentran el 11% de los trabajadores de las empresas de seguridad en el país, las de limpieza el 4,3% en su actividad.¹²

Los trabajadores desocupados organizaron cooperativas de trabajo para desempeñarse en algunas actividades tercerizadas. No obstante, muchas veces, esta organización no formaba parte de un proceso voluntario y autónomo de los trabajadores, sino que se encontraba bajo la dirección y tutela de empresarios, que de esta forma aprovechaban estos *nichos* para hacer negocios e incrementar su competitividad en el mercado reduciendo los *costos laborales*.

Tal es así, que, en noviembre de 1994, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 2015/94, que prohibió la constitución de cooperativas que se vinculaban a actividades de agencias de colocaciones, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia y servicios eventuales. La medida se justificó señalando que la estructura formal cooperativa era utilizada para obtener ventajas impositivas y eludir las obligaciones de la Seguridad Social, según el ex presidente Menem, pues “generan una competencia desleal respecto de las empresas comerciales que brindan servicios similares”. Posiblemente esto era así, pero a la luz del proceso de precarización creciente de las condiciones de trabajo, esta afirmación resulta paradójica o cínica.

Las federaciones cooperativas sostuvieron que la competencia desleal provenía de los *lobbys* empresarios, advirtiendo que tanto la subocupación como la ocupación *en negro* no eran patrimonio exclusivo de las cooperativas de trabajo, aunque eran las únicas que enfrentaban las embestidas del Estado por ese tema.

¹² Basañes, Cesar, 2003, *Las cooperativas en el Censo Nacional Económico 1994*, INAES, Buenos Aires, en www.inaes.gov.ar.





Por otro lado, las propias empresas, en sus procesos de reorganización de los procesos productivos, impulsaban la conformación de cooperativas de trabajo por ex empleados altamente capacitados y calificados para tercerizar procesos productivos específicos. Por ejemplo, la ex YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), cuando fue privatizada, tercerizó diversas actividades, que pasaron a ser realizadas por ex-trabajadores asociados en cooperativas de trabajo, como la cooperativa *Taller Naval de Berisso*, que efectúa la reparación de buques industriales, y la cooperativa de trabajo *Active*, que realiza el tratamiento de aguas, de redes de gas y agua potable.¹³

Todo parece indicar que –en nombre de la eficiencia y la eficacia empresariales– la forma jurídica del cooperativismo de trabajo se adaptó admirablemente a las nuevas modalidades de acumulación de capital.

Una de las “supuestas ventajas” que presenta el sistema de producción flexible (Toyotismo) y del outsourcing es que promueven la aparición de toda una compleja red de empresas pequeñas y medianas y de cooperativas proveedoras de insumos o prestadoras de servicios. En lugar de integración vertical, rigidez y monopolios, ahora habría flexibilidad, desintegración y desconcentración.

Sin embargo, lo que generó realmente fue más flexibilización y precarización de las condiciones de trabajo. Los trabajadores formalmente ocupados o cooperativizados debían asumir la responsabilidad de alcanzar los objetivos de *calidad total* que impone la empresa, y asumir los riesgos y costos empresarios si no querían engrosar las frías cifras de la desocupación.

2. RESIGNIFICACIONES MÚLTIPLES EN EL NUEVO SIGLO

Hacia finales de la década, en el marco de una espiral ascendente de la lucha social, se originó un proceso de apropiación y de resignificación de las prácticas cooperativas y autogestionarias por parte de diversas organizaciones sociales. Distintos movimientos de trabajadores desocupados (MTDs), movimientos campesinos, movimientos de *sin techo* y asambleas barriales encontraron en las prácticas cooperativas un camino para resolver diversos problemas vinculados a la situación de desempleo que atravesaban sus miembros.

Se trata de prácticas socio-económicas orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas a través del asociativismo, la cooperación y el esfuerzo propio. En

¹³ En muchos casos los trabajadores aceptaban renunciar y pasar a ser asociados de cooperativas de trabajo para desarrollar las mismas tareas que antes realizaban bajo relación de dependencia. De esta forma, las empresas se apropiaban del dinero que deberían abonar en concepto de indemnizaciones y se desligan de “las cargas sociales” que ahora asumen los asociados coopereativizados.





términos generales, el punto de partida estuvo constituido por la inexistencia de maquinarias, herramientas, insumos, etc., y la falta de experiencia laboral de los más jóvenes. Se organizaron emprendimientos basados en la elaboración artesanal de alimentos (panificados, dulces artesanales, huertas orgánicas, etc.) y de bienes de consumo durables, escasamente tecnificados, como ropa y serigrafía. En este sentido, en términos generales, el horizonte de desarrollo de este tipo de emprendimientos se mantuvo en el plano marginal y sus mecanismos de comercialización se constituyeron en torno a redes de distribución informales.

Estas iniciativas autogestivas fueron creciendo y ganando legitimidad y apoyo social, pero no lograron establecer mecanismos que garantizaran la satisfacción de los perdidos derechos laborales.

A pesar de las limitaciones, constituyeron verdaderos esfuerzos por recomponer articulaciones sociales solidarias, demostrar que los trabajadores podían autogestionar democráticamente la producción, distribución y comercialización sin necesidad de la dirección *despótica del capital*. La solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación y la participación democrática volvieron a constituirse en valores esenciales para estos trabajadores.

Asimismo, cabe destacarse el fenómeno de recuperación de empresas quebradas o por cerrar por parte de sus propios trabajadores. Algunos empresarios, por diversas razones, abandonaron la actividad económica, cerraron la fábrica o empresa o, peor todavía, la dejaron a su suerte con los activos fijos en su interior “con el fin de intentar desentenderse de las responsabilidades patrimoniales del caso (pago de indemnizaciones laborales por despidos, pagos de saldos a los proveedores, pago de impuestos adeudados)”¹⁴. Otros realizaron un verdadero vaciamiento al momento del cierre o incluso progresivamente. El resultado derivó en el desempleo gradual o total de los trabajadores asalariados.

A partir de las distintas maniobras empresarias, los empleados se encontraron con la fábrica cerrada de un día para el otro y sin noticia previa alguna. O con varios meses de sueldos atrasados, sin perspectivas de cobro.

Los trabajadores respondieron con la ocupación de la empresa a los efectos de recuperar la actividad, conservar los activos fijos y la fuente laboral. Se trató de

¹⁴Echaide, Javier, 2008, *Empresas Recuperadas: situación sobre las expropiaciones*, Publicación Virtual del Observatorio Social de Empresas Recuperadas Autogestionadas, Buenos Aires, 2008, <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/Echaide.pdf>





una *actividad defensiva* del trabajo; incluso de defensa de la empresa, no así del empresario.¹⁵

A partir de la ocupación, se inicia un complejo proceso de lucha en varios frentes. Por un lado, la resistencia física a la represión y el desalojo y las intervenciones en el plano jurídico-legal. Por otro lado, el esfuerzo de re-organizar el trabajo bajo una gestión democrática y participativa.

Algunos de los casos más renombrados por su nivel de conflictividad son la fábrica de cerámicas Zanón, en Neuquén; la gráfica Chilavert, el hotel Bauen y la textil Brukman, en Capital Federal; el ex supermercado Tigre, en Rosario, etc.

Entre las fábricas recuperadas predominaron las metalúrgicas, seguidas por las alimenticias y, en menores proporciones, textiles, gráficas y otros rubros industriales y de servicios. A su vez, en el 65% de los casos las empresas recuperadas (unas 219 en total) son del parque industrial previo a los procesos de reconversión productiva que comenzaron a ensayarse a partir de 1976, mientras que sólo un 26% de las empresas recuperadas son de un parque industrial más moderno. De estas, sólo el 12% corresponden a empresas creadas durante la década del 90:

En síntesis, el fenómeno de las Empresas Recuperadas ocupa a una cantidad importante de establecimientos, que si bien no representan una porción significativa del aparato productivo nacional ni un porcentaje relevante de la PEA, no dejan de ser por ello un movimiento social y políticamente importante, no tanto por su dimensión cuantitativa, sino por su irrupción como una práctica económica novedosa de respuesta a la crisis por parte de los trabajadores, una modalidad de lucha de los trabajadores que busca dar respuesta en forma colectiva al problema de la desocupación y del cierre de unidades productivas y como un ejemplo de superación por parte de sus protagonistas de las formas de producción y de gestión tradicionales en el capitalismo.¹⁶

15 Gambina, J; Racket, M; Echaide, J; Roffinelli, G., 2006, "Las resistencias latinoamericanas del siglo XXI. Empresas recuperadas en Argentina", en Ceceña, Ana Esther (Comp.), *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*, Buenos Aires, CLACSO.

16 Programa Facultad Abierta, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, "Informe del Segundo Relevamiento", <http://www.recuperadasdoc.com.ar/Publicaciones%20propias/Las%20empresas%20recuperadas%20en%20Argentina.%20Informe%20del%20segundo%20relevamiento.pdf>.



Más allá de los duros desafíos que enfrentan, los emprendimientos asociativos expresan experiencias cualitativas que hacen visible la potencialidad de las relaciones sociales basadas en la autogestión, la democracia, la participación, la solidaridad y la autoayuda para enfrentar el problema del desempleo, la pobreza, la marginación y la explotación.

Las prácticas organizativas de los sectores populares devinieron en un espacio de disputa por el entramado de resignificaciones múltiples que enuncian. El Estado también entró en juego con sus políticas públicas orientadas al fomento de emprendimientos asociativos y/o cooperativos.

A partir del 2003, con el Gobierno de Néstor Kirchner se desplazó el problema del desempleo al área de las políticas sociales. Con el fin de lograr la llamada *inclusión social*, se implementaron programas y subsidios orientados a la constitución de cooperativas de trabajo centradas en actividades de construcción y producción a pequeña escala (especialmente, textiles).

Desde el Estado Nacional se está desarrollando una política social, a través de diferentes programas, destinada a consolidar una red de inclusión social y asegurar una mejor calidad de vida en el país (...) se trata de que amplios sectores de la población encuentren en el cooperativismo, a través de sus valores y principios, una nueva forma de organización y la herramienta que les permita su reinserción económica y social".¹⁷

Los considerandos de dichas políticas públicas expresan que los sectores sociales más vulnerables podrán integrarse al crecimiento económico, a través del desarrollo local y el fortalecimiento de la economía social.¹⁸

Según datos del INAES, en el marco de los mencionados programas sociales entre 2003 y 2008 se constituyeron alrededor de 4.000 cooperativas de trabajo en casi 500 municipios y comunas del país.¹⁹ Aunque no se brindan datos acerca de cuántas de esas cooperativas continuaron trabajando una vez que finalizó el programa que les dio origen.

17 INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), "Las Empresas Cooperativas. Aspectos doctrinarios, normativos e institucionales de las cooperativas de trabajo en el marco de la resolución 2038/03", Buenos Aires, Editorial INAES, 2005.

18 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. <http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/>

19 INAES. "Las cooperativas y las mutuales en la República Argentina", Buenos Aires, Editorial INAES, 2008.





3. DEMOCRACIA, AUTOGESTIÓN Y AUTONOMÍA EN LA PRÁCTICA

Como queda expresado, la proliferación de cooperativas de trabajo está relacionada con las modalidades que asume la articulación capitalista de fin de siglo.

Encontramos que las experiencias cooperativas analizadas²⁰ han reformulado con mayor o menor éxito la organización del emprendimiento. Dentro de las cooperativas se ensayan modalidades de organización socio-productiva que buscan maximizar las instancias democráticas y los márgenes de acción para la autogestión. Sin embargo, se plantean modelos idealizados que difícilmente puedan materializarse como tales. Dichos ideales funcionan más como motores de búsqueda que como realidad palpable; por ello, se trata de experiencias de aprendizaje.

Un conjunto decisivo de las dificultades y problemas que tienen las cooperativas a la hora de profundizar la autogestión y la democracia no responde a sus mecanismos organizativos internos, sino a los límites que le presenta el contexto socio-económico, político e ideológico. Dichos límites, entonces, representan desafíos a la hora de pensar a las cooperativas como alternativas a las relaciones sociales vigentes, dentro de la sociedad actual.

Para ello, planteamos tres dimensiones de análisis:

1. Participación democrática en la toma de decisiones.
2. Autogestión de la producción.
3. Autonomía política.

3.1 DIMENSIONES DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Para describir las prácticas de las cooperativas en relación a la democracia, debemos empezar caracterizando el proceso de toma de decisiones.

Sabemos que, en términos formales, la democracia de las cooperativas consiste en la igual capacidad de decisión de todos los asociados, más allá de los recursos aportados por cada uno (un hombre = un voto). Sin embargo, dicho principio formal no asegura, por sí mismo, la participación democrática de todos, ya que en dicho proceso intervienen un conjunto complejo de dimensiones.

En el contexto de desprestigio de la política como espacio de referencia para dirimir los asuntos comunes y de la democracia representativa (tanto en las instancias

²⁰El presente análisis está basado en los talleres de reflexión con grupos cooperativos desarrollados por el equipo de investigación de FISyP en el proyecto "Organizaciones populares y construcciones alternativas".





estatales como en sindicatos, partidos políticos, etc.), las cooperativas populares buscaron superar las instancias formales. De este modo, se encaminaron a un tipo de organización de democracia directa, a través de prácticas asamblearias frecuentes y en algunos casos espontáneas.

Cada año tenemos la asamblea, y para tomar decisiones nosotros lo hacemos permanentemente. O sea, cuando hay algún problema, no sale el trabajo, hacemos una asamblea y discutimos por qué tenemos problemas en tal o cual parte. (Gastón²¹, Coop. Desde el Pie)

No obstante, la frecuencia y la informalidad de las asambleas no significó, por sí mismo, la superación de ciertos obstáculos a la profundización democrática. Se advierte que, entre las dificultades más usuales se encuentra la falta de participación de una parte importante de asociados.

¿Qué procesos intervienen en esta problemática?

El principio de democracia participativa que buscan practicar las cooperativas se contrapone al tipo de democracia representativa que caracteriza la vida política y social de nuestras sociedades. En la sociedad actual, la política se presenta separada de las instancias económicas y productivas. Ante una realidad que se presenta naturalizada y fragmentada, que tiende a cristalizar el *statu quo* como única forma de organización social posible, la propia capacidad de acción y transformación no forma parte del horizonte de lo posible para los sujetos. Se conforma, así, un *habitus* que implica una actitud pasiva y desresponsabilizada de los individuos frente a los problemas sociales.

En primer lugar, el implicarse personalmente en aquello que tiene algún interés social depende de percepciones y valoraciones subjetivas. Alentar el compromiso y gestar posibilidades concretas de involucramiento en los asuntos comunes corresponden, en todo caso, al territorio de la lucha ideológica y política, pues raramente emergen de una conciencia abstracta ni, menos aún, de la experiencia individual directa.²²

²¹ Los nombres mencionados son ficticios.

²² Thwaites Rey, Mabel, 2004, *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*. Buenos Aires, Prometeo, p.31.





Desde este lugar, se construye un sentido común que fortalece el individualismo, ya que ante una realidad inmodificable, el único margen de libertad se encuentra en la elección individual entre las opciones existentes. No se trata de modificar las condiciones de reproducción de la vida de todos, sino de cambiar la posición que cada uno ocupa en un sistema social desigual e injusto.

Al respecto, “[Zigmun] Bauman sostiene que el presente está signado por una contradicción: la sensación de que los miembros de la sociedad gozamos cada vez de mayor libertad individual, pero contamos con menos posibilidades de transformar el mundo.”²³

El sentido común es el resultado del juego que se establece entre los mensajes y acciones (explícitas e implícitas) de los sectores dominantes y los “valores organizados prácticamente por significados específicos y dominantes en un proceso social vivido de manera contradictoria, incompleta y hasta muchas veces difusa.”²⁴ El resultado es, pues, la generalización de la cultura de las clases dominantes a toda la sociedad –creando una falsa totalidad, en la cual los intereses particulares de una clase se presentan como el interés general. De este modo, el sujeto ordena y explica las problemáticas y circunstancias que se le presentan en la vida cotidiana, sin alterar el orden social vigente y, en consecuencia, reproduce dicho orden en sus acciones cotidianas.

Lo aquí expuesto atenta contra las motivaciones a la participación. Aquel *habitus* se traslada a la participación en la cooperativa, hay quienes no sienten la necesidad de participar en las decisiones. No sienten que su opinión valga la pena o que comprometerse traiga algún beneficio.

[...] la participación muchas veces está atada al miedo, que no hablo porque tengo miedo de que lo que yo diga sea tomado mal...digamos como yo no sé, no puedo hablar porque hay alguien que sabe más que yo.” (Carlos, Coop. MTL La Brava)

²³De Piero, Sergio, 2005, *Organizaciones de la sociedad civil. Tensiones de una agenda en construcción*, Buenos Aires, Paidós, p. 44.

²⁴Kohan, Néstor, “Antonio Gramsci y la filosofía de la praxis”, publicación electrónica en Portal Rebelión: www.rebelion.org.





De esta manera, las prácticas sociales y políticas arraigadas en la sociedad establecen límites a los procesos democráticos que se busca desarrollar en las cooperativas.

Sin embargo, el sentido común no es homogéneo, ni cerrado, ni permanente, por lo que pueden surgir experiencias o problemáticas que trasciendan al propio sentido común dominante y que lleven al sujeto a plantear una crítica a las bases sobre las que aquel se asienta. El horizonte de las cooperativas es, entonces, buscar mecanismos a través de los cuales cada asociado tenga la capacidad de decidir, capacidad que ha sido negada e inhibida a través del tiempo y que sólo se recupera cuando se desnaturaliza la obediencia acrítica.

Uno puede conseguir la plata que le hace falta para su vida a través de su trabajo, pero a través de la asociación se empieza a decidir a dónde va esa plata. Es algo que lo favorece a uno porque empieza a participar, a involucrarse. La participación genera democracia, que es la democracia que no encontramos en la sociedad. Y esta democracia genera concientización. (Marcos, Cooperativa MTL La Brava)



La preocupación por la participación no obedece a cuestiones de orden moral o ideológico, sino que implica dificultades a la hora de asumir responsabilidades y comprometerse con los proyectos colectivos. Así como también dificulta la consolidación del sentido de pertenencia al grupo.

Una organización democrática debe asegurar la igualdad en las posibilidades de llevar adelante cada una de las tareas. Pero este proceso no es lineal, sino que da lugar a diferentes formas de apropiarse de la capacidad de reflexión-opinión-acción. La interacción entre los asociados se da de manera peculiar, se establecen relaciones de autoridad y liderazgo, donde se ponen en juego personalidades y experiencias de vida diversas que hacen que cada uno de ellos se comporte de manera diferente ante las mismas situaciones.

En algunos casos se manifiesta una relación asimétrica entre los dirigentes de las cooperativas y los demás asociados. Dicha asimetría no se refiere a las posibilidades de acceso a los roles de decisión, sino a las acciones concretas (formas de actuar) de unos y otros. A partir de la falta de ejercicio o autoconfianza para decidir de algunos miembros, éstos delegan este mecanismo a los que consideran *más capacitados*.





Asimismo, la ansiedad de *los dirigentes* por resolver situaciones concretas hace que no reconozcan los tiempos que otros necesitan para procesar las circunstancias. De esta manera, los modos de percibir y llevar a cabo el proceso decisonal se cristalizan y se trasladan a nuevas situaciones, lo cual restringe la plena participación. Este tipo de relación no es intencional sino que se establece de manera inconsciente. Es una relación de ida y vuelta en la que tanto unos como otros establecen tal asimetría, y que dado el transcurrir cotidiano y urgente de la cooperativa, no suele discutirse.

Porque, por ahí el compañero que tiene más empuje puede armar un proyecto y en la falta de comprensión le trasladan el tema como si él fuese el dueño de la empresa. Y no es así, esto es una empresa social donde todos tienen la responsabilidad y el compromiso de representar.
(Gustavo, Coop. MTL La Brava)

Es así como aparecen situaciones en las cuales la capacidad de iniciativa de un dirigente redundan en su posición privilegiada a la hora de decidir sobre ese tema. Es común que ocurra que algunos asociados no se sientan en condiciones de rebatir los argumentos expuestos por el impulsor del debate y por ello acatan la decisión sin plantear su punto de vista, lo que está relacionado con la responsabilidad y el compromiso con el que se asume la tarea. Este tipo de situaciones plantea la necesidad de fortalecer el espacio de diálogo que muchas veces se saltea en la dinámica de trabajo, con el afán de agilizar las discusiones para no detener la producción.

-Adrián: Después, como otro problema, vimos la falta de delegación de responsabilidades... Desde los dos puntos porque a veces a uno le dan la responsabilidad y no la quiere aceptar y a veces ellos no la quieren delegar.

-Coordinador: ¿Qué prevalece más, que no quieren largar o que no quieren aceptar?

-Adrián: Que no quieren aceptar.

-Betty: Eso se complementa con la falta de pertenencia, porque el no aceptar es no sentirse parte del grupo, y decir bueno, yo como parte del grupo asumo la responsabilidad, y ahí tenemos un problema, el sentirse parte de un grupo.





De esta manera, nos encontramos con dinámicas informales que reproducen relaciones de paternalismo. Donde no hay víctimas y victimarios, sino un tipo de relación interpersonal arraigada en la cultura dominante, contra la cual se debe luchar en los espacios de trabajo cotidiano.

Este tipo de dinámicas remite a lo que se ha identificado como *límites subjetivos*. Pero también existen *límites por carencia*, que en esta dimensión están relacionados por la desigualdad en las oportunidades de acceso a la educación o a la información. Así como también los recursos que se distribuyen entre la población más vulnerable a través de mecanismos clientelares con el fin de mantener la hegemonía de los sectores dominantes.

Estas carencias no son atributos que les faltan a las personas sino consecuencias de un sistema social y de un patrón de poder.

Pero el problema está, precisamente, en cómo se conforma, se construye, se avanza hacia una sociedad en la que todos sus miembros tengan capacidades reales de involucramiento equivalente, en términos de disposición de información y actitud de discernimiento equiparable en algún punto.²⁵

A partir de la experiencia realizada, se torna evidente que una de las herramientas que las cooperativas tienen para trabajar sobre las limitaciones aquí mencionadas es el fortalecimiento de las instancias de educación, formación y capacitación, las cuales deberán apuntar tanto a los aspectos técnicos orientados a incrementar el conocimiento de los procesos productivos y sus posibilidades de mejoramiento, como a los procesos socio-políticos, orientados a la desnaturalización de las desigualdades y a la ruptura de los límites subjetivos e ideológicos para la plena participación democrática.

3.2 DIMENSIONES DE LA AUTOGESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

A través de sus prácticas cotidianas, las cooperativas buscan defender ciertos valores que parecen ausentes de los procesos económico-productivos tradicionales.

²⁵ Thwaites Rey, *op.cit.* p.30





En las cooperativas, tanto el esfuerzo del trabajo como su producto, se distribuyen de manera equitativa. Por tal razón, en principio parece no haber explotación del trabajo ajeno.

A su vez, la autogestión de la cooperativa significa la posibilidad de establecer los modos, ritmos y tiempos de trabajo, así como también las prioridades de la organización, y el tipo de bienes y servicios a producir.

De esta manera, la autogestión apunta a reunificar el trabajo manual y el trabajo intelectual. En la cooperativa, el trabajo intelectual se des-concentra en cada uno de los trabajadores. El conocimiento del proceso del trabajo, su planificación y control, se lleva a cabo de manera colectiva, es decir, que cada trabajador recupera estas actividades que forman parte del proceso productivo y, de esta manera, encuentra nuevo sentido a su esfuerzo físico cotidiano. Desde este punto de vista, las cooperativas constituirían una modalidad de organización productiva alternativa a la explotación y el despotismo del capital.

Sin embargo, los problemas más frecuentes de las cooperativas son la falta de recursos, el atraso tecnológico, la competitividad y la comercialización. Todos aspectos relacionados entre sí, que presentan límites a la capacidad autogestoria de los trabajadores cooperativistas.

Esto trae aparejado el tema costos, la comercialización, la estructura de manejo, la falta de control en la gestión porque la mayoría sabemos cómo hacer las cosas pero en el tema este del manejo comercial, de la especulación, de los números, no estamos preparados. Eso nos impide el tema competitividad, donde a veces lo vemos como a un monstruo al que no podemos entrar porque tenemos que competir con empresas que están subsidiadas de alguna forma o que son de la empresa privada donde tiene como variable de ajuste el salario de la gente que está en relación de dependencia. Bueno, la productividad viene a la par de esto. La productividad es la misma historia. (Leandro, Coop. MTL La Brava)

Si bien la capacidad de autogestión del proceso productivo aparece como un aspecto de organización interna y de relaciones interpersonales entre los asociados, las decisiones que se toman no están al margen del proceso de circulación de los productos del trabajo. Su relación con el resto de la producción global los enfrenta a las relaciones mercantiles fetichizadas, que tienen consecuencias directas en el proceso productivo.





Esta interacción parece establecer una contradicción entre las prácticas autogestionadas y solidarias que se desarrollan dentro de la cooperativa y los mecanismos de competitividad, donde priman relaciones de fuerza.

Si bien en términos formales la propiedad de los medios de producción y del producto del trabajo está en manos de las cooperativas, la intensidad del trabajo, la calidad y cantidad de trabajo por unidad de producto están determinadas por fuera de la unidad productiva.

De este modo, la cooperativa asume como propios problemas tales como la dotación de tecnología, así como la necesidad de achicar los tiempos de trabajo por producto. Lo que suele suceder es que las cooperativas reemplazan las falencias tecnológicas y financieras con la extensión de la jornada laboral o la imposición de tiempos de trabajo intensos que repercuten en una degradación de las condiciones de trabajo respecto del asalariado formal.

A partir de ello, surgen un sinnúmero de problemáticas y de debates en torno a la disciplina en el trabajo, a la extensión de la jornada laboral y a la contemplación de casos excepcionales que ameriten establecer condiciones de trabajo especiales para los compañeros que así lo requieran.

Surge, así, la pregunta en torno al alcance de la autogestión, sobre qué aspectos son realmente autónomos y sobre en qué aspectos cuentan con márgenes de acción acotados.

Cuando se habla de las condiciones de precariedad laboral que se desarrollan en las cooperativas, sus detractores hablan de que se trata de una forma encubierta de autoexplotación. Desde el punto de vista aquí esbozado, la imposición de tiempos, procesos y ritmos de trabajo intensos, no responde a decisiones autónomas de las cooperativas, ni tampoco son ellos mismos los que se apropian del esfuerzo colectivo.

En el caso de las cooperativas la producción está formalmente subsumida a las decisiones que se toman democráticamente en ellas. Sin embargo, las medias sociales establecidas por las vigentes relaciones sociales capitalistas son las que ponen en relación las mercancías en el ámbito del mercado. De modo que, a través de los mecanismos del intercambio desigual los sectores del capital más concentrado logran absorber el plusvalor producido por unidades productivas menos competitivas.

Los productos generados en las cooperativas –como los de cualquier unidad productiva– continúan subsumidos a la lógica que imponen las relaciones sociales capitalistas; por lo tanto, no se trata de procesos aislados y autónomos





en los cuales los trabajadores de la cooperativa deciden autoexplotarse. Por el contrario, la extensión de la jornada laboral y la intensificación de los ritmos de trabajo se imponen desde la competencia, condición ineludible para la subsistencia del emprendimiento.

Ante este conjunto específico de limitaciones parecen cerrarse las posibilidades de transformación dentro de los actuales marcos del modelo de producción a escala planetaria. Evidenciar este tipo de procesos permite a las cooperativas arribar a debates que problematiquen alternativas viables sin caer en falsas ilusiones, sabiendo los riesgos que cada decisión significa.

3.3 DIMENSIÓN DE LA AUTONOMÍA POLÍTICA

En los últimos años, las cooperativas han recibido recursos del Estado y de organizaciones internacionales, que ven con buenos ojos que los trabajadores desempleados asuman la responsabilidad de salir de la propia situación de *pobreza o exclusión*²⁶ a través de su propio esfuerzo. Desde este punto de vista, ya no es necesario transformar el orden social vigente, ya que éste le da oportunidades a todos aquellos que sepan aprovecharlas. Se construye así una fragmentación de los sectores populares, a través del cual los *pobres buenos y exitosos* se contraponen a los *pobres peligrosos*, criminalizando aquellas acciones que se inscriban en una lucha social de mayor conflictividad.

De este modo, las cooperativas que inscriben sus experiencias en un horizonte de transformación social se enfrentan a un dilema: Por un lado, los subsidios constituyen una oportunidad para garantizar la subsistencia de los miembros de la cooperativa (lo cual no es un hecho despreciable), constituyéndose a su vez como una herramienta de lucha (por la redistribución estatal de la riqueza social o para su utilización como instancia organizativa de poder popular). Pero, por otro lado, constituyen límites claros a la autonomía en sus prácticas políticas.

Con lo cual, para su comprensión, deberíamos expandir y tener la capacidad de relativizar las categorías de autonomía, dependencia, institucionalización o cooptación, que usualmente se utilizan para clasificar (y, a veces, descalificar) las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil.

²⁶Pobreza, exclusión, marginalidad, vulnerabilidad son conceptos contruidos para reificar, fragmentar y deshistorizar las consecuencias de la explotación capitalista. No es el objetivo del presente trabajo argumentar esta tesis. Pero resulta necesario aclarar el uso que aquí se da a dichos conceptos.





El Estado capitalista es una relación social compleja, caracterizada por una determinada forma de Estado que cristaliza en un determinado aparato de Estado. La relación que las luchas sociales guardan con el Estado depende así (a) de la forma de Estado que enfrentan y (b) de qué elemento específico de esa forma de Estado enfrentan.²⁷

Ante este tipo de limitaciones, las construcciones sociales contra-hegemónicas –y no solo las cooperativas– se ven en la necesidad de analizar sus acciones en el marco de la correlación de fuerzas existentes, teniendo en cuenta el aporte (o no) que las distintas iniciativas e interacciones constituyen para la construcción popular.

4. LOS DESAFÍOS

El crecimiento cuantitativo del cooperativismo de trabajo en las últimas décadas se origina como consecuencia de estrategias contrapuestas frente a la rearticulación del modo de acumulación del capital globalizado. Por un lado, los trabajadores desocupados o empleados precarizados encontraron en la asociación cooperativa una alternativa para contrarrestar la desocupación, la pobreza y la exclusión. Por otro, los empresarios, en su búsqueda constante por aumentar la productividad, bajar los costos de producción y competir ariosos en el mercado, manipularon en su favor la organización de cooperativas por parte de los trabajadores, que de esta forma a) asumen el compromiso con el aumento de la productividad, la eficacia y la eficiencia que requiere la empresa que terceriza, b) además, se autocontrolan y se autodisciplinan para cumplir con dichos acuerdos y c) toman en sus propias manos las contribuciones a la seguridad social y al fisco. Por último, las políticas públicas destinadas a *amortiguar los costos sociales*²⁸ de las políticas económicas impulsan a que los *vulnerables* desarrollen sus actividades de subsistencia dentro de los márgenes de la denominada economía social.

Las experiencias de las cooperativas populares encierran un gran potencial simbólico, porque demuestran diariamente que los trabajadores asociados y cooperando

27 Bonnet, Alberto, 2008, "Las relaciones entre el Estado y las luchas sociales recientes: un planteo del problema". Publicación electrónica en Memorias de las "Jornadas Interdisciplinarias de Problemas Latinoamericanos: Los movimientos sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectivas" [CD-ROM], Mar del Plata, septiembre de 2008, p.2.

28 Auyero, Javier, 2007, "Introducción. Claves para pensar la marginación", en Wacquant, Loic, *Parias Urbanos*. Edit. Manantial. Buenos Aires, p.15.





entre sí pueden desarrollar relaciones de producción autónomas. Los trabajadores, en su osadía de sortear el desempleo y la precarización laboral, a través de la organización cooperativa, demostraron que es posible producir *sin patrones*. Y asumieron el desafío de constituir una organización del trabajo democrática procurando que, a su vez, sea sustentable en términos económicos.

Pero para que la lógica capitalista no diluya, una vez más, la radicalidad y potencialidad que encierran los emprendimientos cooperativos es imprescindible avanzar en el conocimiento de la propia realidad social... para transformarla.

En el marco de un sistema social desigual y excluyente, democracia y autogestión encierran una potencialidad radical que se construye en la praxis de los trabajadores autoorganizados que cooperan. Potencialidad que irá concretándose en la medida en que logre profundizarse un modo de organización colectivo, con independencia de clase, que avance en la construcción social contra-hegemónica que subvierta el orden social vigente.

BIBLIOGRAFÍA

Antunes, Ricardo, 1998, "La centralidad del trabajo hoy", revista *Herramienta* N° 8, Buenos Aires, Ediciones Herramienta, 1998.

Arancibia, Inés, 2005, "Hacia la construcción de otra economía desde el trabajo y los trabajadores", Espacio de Economía Social de la CTA, Documento de Trabajo, Marzo de 2005, Buenos Aires, CTA.

Auyero, Javier, 2007, "Introducción. Claves para pensar la marginación", en Wacquant, Loic, *Parias Urbanos*, Buenos Aires, Manantial.

Basañes, Cesar, 2003, "Las cooperativas en el Censo Nacional Económico 1994", INAES, Buenos Aires, www.inaes.gov.ar

Basualdo, Eduardo, 2000 *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*, Buenos Aires, Editores FLACSO, Universidad de Quilmes, IDEP.

Bonnet, Alberto, 2008, "Las relaciones entre el Estado y las luchas sociales recientes: un planteo del problema". Publicación electrónica en Memorias de las "Jornadas Interdisciplinarias de Problemas Latinoamericanos: Los movimientos sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectivas" [CD-ROM], Mar del Plata, septiembre de 2008.

Ciolfi, K; Ciolfi, V; Cornes, L; Dominguez Font, P, 2005, "Subjetividad y praxis Cooperativa". Publicación electrónica en el Portal del Centro Cultural de la Cooperación. www.centrocultural.coop.





Cortés, Martín, (2008), “Movimientos sociales y Estado en la Argentina: entre la autonomía y la institucionalidad”, publicación electrónica en Memorias de las “Jornadas Interdisciplinarias de Problemas Latinoamericanos: Los movimientos sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectivas” [CD-ROM], Mar del Plata, septiembre de 2008.

De Piero, Sergio, 2005 *Organizaciones de la sociedad civil. Tensiones de una agenda en construcción*. Buenos Aires, Paidós.

Echaide, Javier, 2008, “Empresas Recuperadas: situación sobre las expropiaciones”, Publicación Virtual del Observatorio Social de Empresas Recuperadas Autogestionadas, Buenos Aires, <http://www.iigg.fsoc.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/Echaide.pdf>.

Gambina, Julio C. y Campione, Daniel, 2003, *Los años de Menem. Cirugía mayor*. Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

Gambina, J.; Racket, M.; Echaide, J.; Roffinelli, G., 2006, “Las resistencias latinoamericanas del siglo XXI. Empresas recuperadas en Argentina”, en Ceceña, Ana Esther (comp.), *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*, Buenos Aires, CLACSO.

Gramsci, Antonio, 2000, *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*, Buenos Aires, Nueva Visión.

Gramsci, Antonio, 2001, *Antología*, Buenos Aires, Ediciones Siglo XXI.

Guía Latinoamericana de Empresas Recuperadas. Programa Facultad Abierta, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. www.recuperadas.com.ar.

Holloway, John, 2003, “La Rosa Roja de Nissan”, en *Keynesianismo una peligrosa ilusión. Un aporte al debate de la teoría del cambio social*, Buenos Aires, Ediciones Herramienta.

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. www.desarrollosocial.gov.ar.

INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) *Las Empresas Cooperativas. Aspectos doctrinarios, normativos e institucionales de las cooperativas de trabajo en el marco de la resolución 2038/03*, Buenos Aires, Editorial INAES, 2005.

INAES, *Las Empresas Cooperativas. Aspectos doctrinarios, normativos e institucionales de las cooperativas de trabajo en el marco de la resolución 2038/03*, Buenos Aires, Editorial INAES, 2005.

INAES, *Las cooperativas y las mutuales en la República Argentina*, Buenos Aires, Editorial INAES, 2008.





PERIFERIAS N° 18 SEMESTRE 2 | 2009

INDEC, “Censo Nacional Económico 94”, www.indec.gov.ar

Kohan, Néstor, “Antonio Gramsci y la filosofía de la praxis”, publicación electrónica en Portal Rebelión: www.rebelion.org.

Levín, Andrea; Verbeke, Griselda, (1997), “El Cooperativismo Argentino en Cifras: tendencias en su evolución: 1927 –1997”, en revista *Realidad Económica*, N° 152, Buenos Aires, IADE.

Marx, Karl, 2002, *El Capital: El proceso de producción del capital*, Tomo I, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, <http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/>

Nun, José, 1987, “Gramsci y el sentido común”, en Lechner, Norberto (comp.), *Cultura política y democratización*, Buenos Aires, Ed. FLACSO.

Programa Facultad Abierta, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. “Informe del Segundo Relevamiento”, <http://www.recuperadasdoc.com.ar/Publicaciones%20propias/Las%20empresas%20recuperadas%20en%20Argentina.%20Informe%20del%20segundo%20relevamiento.pdf>.

Rozitchner, León, 1996, “La izquierda sin sujeto”, en *Las desventuras del sujeto político. Ensayos y Errores*, Buenos Aires, Edit. El Cielo por Asalto.

Thwaites Rey, Mabel, 2004, *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*, Buenos Aires, Prometeo.

Wacquant, Loic, 2007, *Parias Urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*, Buenos Aires, Ed. Manantial.



ESTADO Y POLÍTICA EN ARGENTINA.

ALGUNAS NOTAS TEÓRICO-POLÍTICAS A
PROPÓSITO DE LOS HECHOS DEL 2001*

*Marcelo Barrera***, *Gonzalo Cáceres****
y *Leandro Gielis*****

INTRODUCCIÓN

En el contexto de los cambios sociales producidos por el capitalismo de época¹, y más específicamente, a partir del punto de inflexión social, político e institucional que representa en Argentina diciembre de 2001, en este artículo se reflexiona sobre ciertos elementos y categorías analíticas consideradas útiles en el estudio tanto de lo sucedido en “aquel diciembre” como sobre el devenir sociohistórico pos-2001. Estas categorías proponen dar cuenta de, en primer lugar, cómo las disputas de los actores sociales se cristalizan en proyectos políticos de distinto signo, ya sea para sostener, reformar o transformar el orden social capitalista. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, el sentido que adopta

* El presente artículo refleja el trabajo del eje de investigación sobre Estado y política en Argentina en el marco del programa de investigación trianual de la Fisyp.

** Sociólogo, maestrando de la UBA (Buenos Aires) bajo la dirección de Graciela Infesta Domínguez. Investigador de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp), Buenos Aires.

*** Politólogo, doctorando de la UFC (Besançon, Francia), bajo la dirección de Alain Bihr y de la UBA, bajo la dirección de Beatriz Rajland. Investigador de la Fisyp, Buenos Aires.

**** Sociólogo, doctorando de la UBA, bajo la dirección de Inés Izaguirre. Investigador de la Fisyp, Buenos Aires.

1 Referimos a los cambios estructurales operados a partir de mediados de la década de los setenta a nivel mundial. Los mismos tienen en el continente al denominado “Consenso de Washington” como su decálogo fundacional. Para su caracterización, ver Boron, 1995, y Gambina y Campione, 2002.





la acción colectiva de acuerdo con los intereses sociales y su representación en la orientación política de sus protagonistas. Por último, al situar las acciones de los actores, se abre el análisis sobre su carácter procesal o disruptivo, las condiciones y los resultados de su emergencia. Este triple nivel de análisis es relevante, desde nuestro punto de vista, tanto en términos teóricos como políticos.

Políticos, dado que el período a estudiar estimula particularmente la reflexión sobre la praxis de los movimientos sociales y los partidos políticos que se autodenominan de izquierda y sus posibilidades para articular una fuerza social anticapitalista. En tal sentido, ¿cuáles son los elementos movilizados en la construcción de una alternativa política al orden dominante? Este interrogante implica, a su vez, pensar dos dimensiones imbricadas en la supervivencia del orden actual. Por un lado, las prácticas de los movimientos sociales y partidos políticos que reproducen (no necesariamente de modo consciente) el orden imperante: ¿cuáles son los elementos que contribuyen a la reproducción del status quo? Por otro lado, la ininterrumpida acción política de los partidos, organizaciones, instituciones, etc., que representan los intereses de los sectores dominantes. En tal sentido, ¿cuáles son las disputas entre las fracciones sociales dominantes? ¿Cómo impactan tanto en las políticas de gobierno como en la posible conformación de alianzas que involucren actores de los sectores dominantes y de los dominados? Estos dos grupos de interrogantes invitan a pensar la estrategia desplegada por el conjunto de la izquierda durante el período ante el orden social sostenido por las fracciones dominantes.

Teóricos, dado que la experiencia excepcional de diciembre de 2001 y los años que sucedieron, impulsa a pensar las distintas categorías de forma diversa a la que hasta el momento había sido concebida. Mientras que usualmente se escinde en el análisis las esferas de lo social y lo político, traduciéndola casi automáticamente en una división entre movimientos sociales y partidos políticos, nuestra propuesta es imbricar estas categorías para dar cuenta de la posibilidad de construcción de un proyecto social alternativo pensando, a su vez, la forma en que se manifiesta la acción colectiva. Al mismo tiempo, centrar la discusión sobre el alcance de tal proyecto, el sentido de la acción colectiva y su temporalidad introduce de lleno la reflexión sobre los sujetos sociales colectivos, las nuevas formas de subjetividad y la articulación de ambos a través de proyectos políticos capaces de federar identidades. Las transformaciones socio-históricas del modo de producción capitalista y la crisis de legitimidad política de las últimas décadas, han dado lugar a nuevos actores sociales que todavía no han encontrado la plataforma común de culturas de izquierda que permita la construcción de un proyecto político emancipador, superador de los problemas sociales contemporáneos.





¿FIN DE ÉPOCA? CRISIS DE DICIEMBRE DE 2001

Antes de pasar al análisis de las categorías, demos un breve repaso de los hechos que consideramos caracterizan el período a estudiar. Las jornadas de diciembre de 2001 suscitaron gran interés por la emergencia en la escena pública de actores sociales que suponían un cambio radical respecto de lo anterior, tanto en su forma de apropiarse del espacio público como en el contenido de sus propuestas. Sin embargo, ellos son herederos de las luchas anteriores. Imposible, en el mismo sentido no asociar esto a una confluencia de elementos estructurales y las acciones de los sectores dominantes que otorgan entidad al proceso disruptivo de diciembre de 2001. Por ello, proponemos a continuación un breve repaso de los hechos desde esta perspectiva.

HACIA EL 2001, INICIO DEL CICLO NEOLIBERAL ARGENTINO

En Argentina, las reformas de corte liberal conservador², llamadas neoliberales, son visibles a partir de 1976, cuando devienen el corpus de las políticas aplicadas por el gobierno dictatorial. Luego del sexenio de Alfonsín, llega su profundización a partir de la presidencia de Carlos Menem en 1989. Ésta supone una serie de reformas políticas, económicas y sociales que, por un lado, enajenan el patrimonio público a favor del capital concentrado y, por otro lado, afectan directamente la situación de la clase trabajadora.

Así, las grandes empresas públicas pasan a manos de empresas transnacionales o a empresas públicas de las grandes potencias mundiales, al tiempo que se favorece al capital nacional mediante la inclusión en los holdings que ganan las privatizaciones. El gobierno reduce las barreras arancelarias del comercio internacional, suprime las presiones impositivas sobre las transacciones financieras y sobre la renta de los sectores más dinámicos económicamente, financiando la economía mediante el endeudamiento externo³.

2 En la tradición política argentina, los sectores dominantes asociados al campo tienen históricamente una posición liberal en materia económica y conservadora en materia social. Un ejemplo es Martínez de Hoz. Ver Vazeilles, 1985.

3 Refiriéndose a las políticas pro-mercado impulsada por los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.) para los países del tercer mundo, el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, comenta: "Latinoamérica fue tal vez el alumno más aplicado de estas políticas. Se adhirió a las reformas con convicción y entusiasmo; y ahora se enfrenta a las consecuencias: medio decenio de estancamiento, un porcentaje de su población bajo el umbral de la pobreza, desempleado y sin subsidios. (...) [El] país considerado modélico en cuanto a la aplicación de las reformas, el alumno sobresaliente, Argentina, tal vez sea el que más ha padecido". Stiglitz, Joseph, (2003), *Los felices 90. La semilla de la destrucción*, Buenos Aires, Alfaguara, p. 63 (destacado nuestro).





A su vez, el gobierno justicialista recorta los derechos laborales y sociales fundamentales que equilibraban las relaciones de fuerza entre el trabajo y el capital. Al mismo tiempo, aplica ajustes sistemáticos en las áreas del presupuesto nacional destinadas a las políticas sociales universales y aumenta la presión impositiva sobre los sectores de menores recursos mediante los impuestos al consumo.

Desde el punto de vista legal, el ajuste estructural de la economía Argentina se materializa a través de tres leyes nacionales: de Emergencia Económica (ley 23.697), de Reforma del Estado (ley 23.696) y de Convertibilidad de la Moneda (ley 23.928). Éstas constituyen el marco legal que posibilita la privatización de las empresas públicas, la reducción de los servicios públicos brindados por el Estado y la profundización de la desregulación económica y financiera.

A modo de síntesis, la década de los 90 se caracteriza por un proceso de concentración y centralización del capital que asegura la obtención de elevados márgenes de ganancia a un reducido conjunto de grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales⁴. Los efectos de este proceso configuran un escenario social caracterizado por una alta tasa de desempleo, de pobreza e indigencia, realidad que contrasta con la promesa mesiánica de ideólogos y mentores de un *derrame de riquezas* que sobrevendría una vez consolidada la dinámica de integración social sostenida en la lógica de la competitividad empresarial.

En este esquema, el Estado se reduce a la producción de los mecanismos asistenciales⁵, jurídicos y represivos que contengan las desestabilizaciones sociales y políticas producto de la aplicación de las políticas neoliberales. Con ello, se pretendía crear las condiciones favorables para el desembarco de las inversiones extranjeras, y otorgarle estabilidad al mercado.

Dicho régimen de acumulación entra en crisis a partir de 1998, acelerándose a partir del año 2000 con las medidas del gobierno de la Alianza (1999-2001) que tuvieron como objetivo sostener las bases estructurales del régimen de acumulación neoliberal. Entre las mismas, la principal apunta a mantener la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, promoviendo un estricto cumplimiento del pago de los vencimientos de la deuda externa, para mantener así la “credibilidad” y la “confianza” de los mercados financieros y el acceso al financiamiento internacional. Los dos instrumentos legales constituidos a tal efecto fueron la

⁴ Al respecto puede consultarse Basualdo, 2000.

⁵ Se ilustra con el pasaje de las políticas sociales universales a las políticas focalizadas. Al respecto ver Danani y Grassi, 2008.





llamada “ley de déficit cero” (25.453 del 30 de julio del 2001) y el decreto 1570/01 denominado “corralito financiero”.

Sin embargo, el descontento de los sectores populares y medios frente a una situación social que fue empeorando a lo largo del período referido hace que las políticas de gobierno encuentren resistencia. Lejos de pensar la política en términos de juegos de interés entre elites e individualidades, el proceso de diciembre de 2001 restituyó una dimensión colectiva de resistencia que marcó políticamente los acontecimientos al tiempo que reconfiguró los debates en torno a la forma en la cual se piensa la política. En lo que sigue haremos una breve genealogía de aquellas protestas que contribuyen a la destitución del gobierno de la Alianza, centrándonos específicamente en las movilizaciones sucedidas tanto *previas* como *en* las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

LOS HECHOS “DESDE ABAJO”

En la noche del domingo 2 de diciembre de 2001⁶, el entonces presidente Fernando de la Rúa junto con el (ex)ministro de Economía Domingo Cavallo, anunciaron formalmente por cadena oficial un conjunto de medidas económicas. Entre ellas, se destaca la limitación para el retiro de dinero de las cuentas bancarias por el o los titulares (medida denominada popularmente como “corralito”)⁷. Al día siguiente, y por un plazo máximo de 90 días –según la vigencia anunciada en la medida–, sólo podían retirarse 250 pesos convertibles semanales o 1.000 mensuales por cuenta bancaria. El “corralito” no sólo abarcaba los ingresos, ahorros e inversiones de los pequeños propietarios sino también los salarios, dado que la bancarización decretada con anterioridad imponía realizar todas las transacciones económicas por medio de las entidades bancarias. Asimismo, la situación de los trabajadores era dramática: los del sector público recibían sus sueldos con retraso, los del sector privado en pequeñas cuotas, y los desocupados sobrevivían con subsidios que no cubrían la canasta básica.

6 No es nuestra intención realizar en los párrafos que siguen un inventario exhaustivo de todos los hechos gestados en diciembre de 2001. Este apartado tiene como objetivo contextualizar el análisis posterior con el fin de dotar de una suerte de “hoja de ruta” al lector que no se encontrara familiarizado con los hechos de diciembre. La (re)construcción de los hechos del mes de diciembre de 2001 se realizó a partir de tres diarios de circulación nacional (Clarín, Página/12 y La Nación). Para un análisis pormenorizado de las acciones de protesta ocurridas en diciembre ver Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006, Fisyp, 2002, y Fisyp, 2003.

7 Las otras medidas anunciadas fueron: 1) Dolarización voluntaria de los plazos fijos a su vencimiento. 2) Dolarización voluntaria de los créditos bancarios. 3) Imposibilidad de cobrar o pagar las tasas de interés en pesos mayores que en dólares. 4) Todos los nuevos créditos debían ser instrumentados en dólares. 5) Las transferencias al exterior que no correspondieran a operaciones de comercio exterior o al pago de consumo de tarjetas de crédito emitidas en la Argentina debían ser autorizadas por el Banco Central.





En ese contexto, “las protestas de diciembre fueron, en lo inmediato, la respuesta al corralito, que recibió un repudio generalizado no sólo de los ‘ahorristas de clase media’ [...], sino también de organizaciones sindicales como la CTA⁸ y ambas CGT⁹”. De hecho, Hugo Moyano (en aquel entonces Secretario General de la CGT disidente, hoy Secretario General de la CGT) afirmó que “confiscaron los salarios y los depósitos de todos los argentinos. Esta confiscación a favor de los bancos transforma a la usura financiera en beneficiaria del esfuerzo de los argentinos” (*Clarín*, 4 de diciembre). El 5 de diciembre ambas CGT convocaron a una huelga general (a la que la CTA adhirió) para el día 13 de ese mes. La CGT “disidente”, por su parte, también convocó a un acto en contra de la usura para el jueves 6 de diciembre. Mientras que el día 11 de diciembre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) convocaba para el día siguiente a la realización de concentraciones en distintos puntos del país en repudio de las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno, y llamó a realizar un apagón de protesta.

El 12 de diciembre¹⁰ se realizaron actos, movilizaciones, cortes de calles y de rutas en todo el país. El mismo día se llevó a cabo el apagón propuesto por la CAME. La CGT “disidente” realizó un acto frente al Congreso Nacional en el que definió la postura de la CGT frente a la convocatoria al diálogo político y social propuesta por el gobierno de la Alianza. Lo propio hace la CTA, organizando un acto para articular y “unificar” fuerzas y criterios de cara a la huelga general propuesta para el día 13.

Ese día se concreta la séptima huelga general contra el gobierno, convocada por las tres centrales sindicales (las dos CGT y CTA) en reclamo del fin de la política

8 En la Argentina existen dos centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo (CGT), fundada en la década del treinta. A partir del primer peronismo (1946-1955) se convirtió en la columna vertebral del movimiento. Hacia fines de 1992 surge una central sindical de nuevo tipo, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). La misma, desde su conformación asumió dos objetivos estratégicos: en primer lugar, constituirse como una organización sindical alternativa, y en segundo lugar, conformarse como una organización que supere el marco estrecho que asume toda estructura clásica de representación de intereses sectoriales. Al respecto ver Armelino, 2005.

9 En esos años la CGT se encontraba dividida entre la CGT llamada “disidente”, liderada por Hugo Moyano y la denominada CGT “oficialista” conducida por Rodolfo Daer. Iñigo Carrera y Cotarelo 2006: 53.

10 Para el análisis, partimos del 12 de diciembre en tanto los hechos desarrollados ese día son preparatorios de la huelga general contra el gobierno. En tal sentido, concordamos con la tesis que sostiene que: “a partir del 13 y hasta el 20 las distintas manifestaciones o formas protagonizadas por excluidos del poder político (huelga, saqueos, manifestaciones, cacerolazos, choques y combates callejeros) ya no constituyeron hechos yuxtapuestos, sino que se articularon. Por ello delimitamos el hecho entre el 13 y el 20 de diciembre”. Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006: 54.





económica; la adhesión a nivel nacional se estima entre el 60 y el 90%¹¹. En este marco, se registró una gran variedad de hechos de protesta en todo el país, siendo el Gran Buenos Aires, Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Pergamino (provincia de Buenos Aires), Neuquén y Córdoba, los sitios con el mayor número de hechos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alrededor de cien militantes de la juventud peronista e integrantes del gremio de camioneros, pertenecientes a la CGT disidente, se manifestaron frente al domicilio del entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, en el barrio de Palermo, con el objeto de repudiar el plan económico. La manifestación incluyó una olla popular.

En el interior del país, diversos movimientos sociales realizaron cortes de ruta en varios puntos de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Formosa y en el centro de la ciudad de Mendoza. Juntamente con los cortes de ruta, se realizaron actos y marchas en las ciudades de Rosario (provincia de Santa Fe), Mar del Plata, Córdoba capital y San Miguel de Tucumán (provincia de Tucumán). En las provincias de Neuquén y Córdoba, las marchas y actos culminaron con enfrentamientos y luchas callejeras entre los manifestantes y las policías provinciales. En la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, manifestantes del sindicato de Luz y Fuerza atacaron con piedras los edificios del diario “La Mañana de Córdoba” y los bancos Galicia y Francés.

Cerca del anochecer, en Guaymallén, municipio cercano a la ciudad de Mendoza, alrededor de 50 habitantes (hombres y mujeres con sus hijos) de un barrio carenciado saquearon una sucursal de la cadena de supermercados “Átomo”, una de las primeras acciones de diciembre. Retiraron mercaderías de las góndolas sin que se produjeran hechos de violencia. En la localidad de Godoy Cruz, en la misma provincia, unas cien personas que reclamaban alimentos frente a un supermercado de la firma “Vea” fueron dispersadas por la fuerte custodia de las tropas de infantería y seguridad privada del local. En la misma localidad, treinta personas intentaron saquear una sucursal de un supermercado “Átomo”, pero la policía mendocina lo impidió. Ante los hechos, el gobierno provincial distribuyó mercaderías y alimentos.

En los días subsiguientes, los saqueos se repiten en las mismas ciudades y se extienden a Rosario (provincia de Santa Fe), Concordia (provincia de Entre Ríos) y, sobre todo, en el conurbano bonaerense, en los partidos de Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Moreno, entre otros. Con el correr de los días la dinámica de los saqueos fue *increscendo* “hasta alcanzar, según estimaciones periodísticas, la cifra

¹¹ *Ibid.*, p. 55.





de 800 a 1.000¹², al punto que el 19 de diciembre los saqueos se generalizaron en todo el país. Asimismo, se registraron otras formas y acciones de protesta, como la ocupación pacífica de edificios públicos, cuando, por ejemplo, un grupo de docentes de SUTEBA¹³ y de empleados estatales enmarcados en la CTA ocupó la sede central del Banco Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El mismo día, se realizaron marchas y manifestaciones tanto contra los distintos gobiernos provinciales y municipales como contra el gobierno nacional, en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, en el Congreso, diputados y senadores se disponían a aprobar el decreto del Poder Ejecutivo para instaurar el estado de sitio.

Este acto desata la movilización de manifestantes hacia la Plaza de Mayo desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, en abierto desafío al gobierno, este tipo de manifestación se repetía en las principales ciudades del país. En la ciudad de Buenos Aires se produjo un enorme cacerolazo al que se suman las bocinas de los autos extendiendo así la protesta a toda la ciudad¹⁴. Pero estas manifestaciones no concluyeron ese mismo día, pues el cacerolazo del 19 continuó durante la madrugada del 20.

Los centros políticos nacionales –la Plaza de Mayo y la Plaza de los Dos Congresos, en la ciudad de Buenos Aires– son escenarios de diversos tipos de movilizaciones y manifestaciones. Los manifestantes golpean sus cacerolas y otros “elementos”, al tiempo que cantan el Himno Nacional. Poco después de la una de la madrugada, mientras los miles de manifestantes festejaban la renuncia del ministro de Economía Cavallo, la Policía Federal iniciaba la primera “ola” represiva de la jornada con gases lacrimógenos para despejar la Plaza de Mayo. Ante el avance de las fuerzas represivas, los manifestantes abandonaron la Plaza de Mayo, desplazándose hacia la Plaza Congreso.

Esta última también fue un centro de congregación de los manifestantes. A las 4 de la madrugada, ante una nueva embestida represiva de las fuerzas policiales –en la que un manifestante resultó herido de bala– los manifestantes se desconcentraron. En la mañana del 20 de diciembre, cerca de las 9:30 horas, se produjo un nuevo ataque policial para dispersar nuevamente a los manifestantes. Miembros de distintos organismos de derechos humanos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo, se acercaron a la plaza. A partir de ese momento, los manifestantes resistieron la represión policial. No sólo en Plaza de Mayo, sino que en todo el

¹² Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006: 2.

¹³ Sindicato que nuclea a los docentes de la provincia de Buenos Aires.

¹⁴ Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006: 76-77.





centro político de Buenos Aires se desarrollaron unas veinte horas de combates callejeros entre la policía y múltiples actores que se manifestaban (organizaciones de desocupados, estudiantes, motoqueros, los diversos partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, entre otros).

A las 14 horas se inicia la segunda “ola” represiva en Plaza de Mayo y en las calles adyacentes a la misma. Estas acciones se extenderán a lo largo de toda la tarde, y serán más violentas que las de la mañana. Más tarde empezó a circular la noticia de la renuncia de de la Rúa. Incluso, “A las 16:30 horas, renunciados todos los ministros, de la Rúa había hablado por televisión llamando a un acuerdo y ofreciendo al justicialismo, con mayoría en ambas cámaras, participar en un gobierno de unidad nacional: el PJ lo rechaza”¹⁵. Simultáneamente, ambas CGT, oficial y disidente, convocaron a un paro general. Mientras la CGT oficial liderada por Rodolfo Daer convocó a un paro por 36 horas a partir de las 18.00, la CGT disidente liderada por Hugo Moyano convocó a un paro por tiempo indeterminado. Por su parte, la CTA convocó a un paro extendido hasta el 21 de diciembre. Finalmente, presionado por la movilización popular, al no lograr un acuerdo con el partido justicialista y con los grupos económicos que pugnaban por la devaluación del peso, el gobierno de la Alianza debió renunciar. En aquellas jornadas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del Estado en todo el territorio nacional 33 personas.

EL INMEDIATO POS-2001: LA PUJA INTERBURGUESA

La destitución del gobierno de la Alianza llevó a un contexto sociopolítico en que se abrió una puja interburguesa en torno al rumbo que debía adoptar la política económica en general, y el tipo de cambio en particular. Los sectores económicos interesados en devaluar la moneda, compuestos por la Unión Industrial Argentina (UIA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Asociación de Bancos Privados y Públicos de la Argentina (ABAPRA), y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Estas fracciones de la gran burguesía, agrupadas en el movimiento *Grupo Productivo*, propusieron la devaluación de la moneda, medida apoyada activamente por las dos CGT¹⁶.

La otra fracción de la gran burguesía que disputaba la salida de la crisis pretendía mantener el tipo de cambio. Entre sus actores figuraban el Consejo Empresario

¹⁵Ibid., p. 85.

¹⁶El día 13 de diciembre de 2001, durante el paro general convocado por la CGT, el propio Hugo Moyano pidió al gobierno “que dé al peso su nivel real y deje la ficticia paridad del uno a uno con el dólar”. Al respecto ver *Página/12*, 2001.





Argentino (CEA), organización compuesta por algunos sectores de la banca internacional y de las empresas de servicios públicos privatizadas que operan en la Argentina¹⁷.

La naturaleza de la puja interburguesa radicaría en los intereses contrapuestos de los dos sectores más poderosos de esta clase. Por un lado, los grupos económicos locales que buscaban la devaluación para valorizar sus capitales fugados, al tiempo que licuaban sus deudas en pesos; por otro lado, los capitales extranjeros que buscaban mantener la convertibilidad para no disminuir el valor de sus activos fijos¹⁸.

Se trató de una coyuntura en que se desplegaron contradicciones entre las fracciones de las clases dominantes y movilizaciones masivas de las diferentes fracciones de las clases subordinadas, que se manifestaron contra la legitimidad detentada por los representantes del sistema político institucional en su conjunto¹⁹. En este contexto, el Partido Justicialista, también dividido, impuso a Eduardo Duhalde como presidente interino de la Nación. Gracias al triunfo electoral obtenido en 17 distritos provinciales el 14 de octubre de 2001, dos meses antes de la caída del gobierno de De La Rúa, el Partido Justicialista dominaba el Poder Legislativo, pudiendo así imponer el próximo presidente de la Nación. Puede pensarse que la división interna del partido justicialista entre el “menemismo” y el “duhaldismo” expresó la disputa de la cúpula económica entre los “dolarizadores” y los “devaluadores”²⁰. Los discursos pro-dolarización del ex presidente Menem, así como en el énfasis puesto por Duhalde en la recuperación de la industria nacional y la competitividad de la economía Argentina a partir del “sinceramiento” del tipo de cambio sustentan esta idea.

En sintonía con el proyecto del “grupo productivo”, el gobierno de Duhalde (2002-2003) derogó la ley de convertibilidad, devaluó la moneda y pesificó la

17 Un vocero del Consejo Empresario Argentino declaraba lo siguiente: “Hay compañías a las que les conviene más la dolarización y otras están más cerca de la devaluación. Entre las primeras están las privatizadas, las que tienen grandes deudas en el exterior, los bancos locales y parte de las entidades europeas. Entre las segundas, algunos bancos extranjeros, y parte de las empresas afiliadas al Grupo Productivo, formado por la UIA, la Cámara de la Construcción y Confederaciones Rurales”. Al respecto ver *Clarín*, 2001.

18 Ver Basualdo, 2000 y Basualdo y Kulfas, 2000.

19 El principal lema de los sectores movilizados es “que se vayan todos”, refrendado por desocupados, ahorristas, comerciantes de clase media y los llamados “nuevos pobres urbanos” (capas medias pauperizadas). Para un acercamiento a la problemática de la crisis de representación ver Rajland, 2000.

20 En tal sentido, recordemos que en las elecciones presidenciales de 1999 la posición de la Alianza se centraba en mantener el régimen de convertibilidad de la moneda, mientras que el candidato del PJ, Duhalde, tenía un discurso a favor de la producción y el empleo.





totalidad de las deudas del sistema financiero, beneficiando así a los grandes grupos económicos. La alianza entre el gobierno y el llamado grupo productivo se consolidó con el nombramiento de José Ignacio de Mendiguren, presidente de la Unión Industrial Argentina y principal impulsor de la devaluación y pesificación de las deudas,²¹ como ministro de Producción.

HACIA LAS CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS

En las páginas que anteceden se ensayó una lectura de los hechos que configuraron las jornadas de diciembre de 2001. Ellos dan cuenta del complejo entramado de actores e intereses que lejos de reducirse a la emergencia de un nuevo y original momento político, presentó una dialéctica entre las viejas y nuevas formas del devenir social a partir de las acciones que *las fracciones de clase* despliegan de acuerdo a sus intereses y a las condiciones sociales en las que se encuentran. Pero, ¿cómo interpretarlo? Como señalamos en la introducción, postulamos la existencia de tres dimensiones de análisis para interpretar la complejidad del fenómeno aquí tratado:

1. Un primer nivel compuesto por la noción de hegemonía y contrahegemonía como par conceptual para poder ordenar los proyectos políticos en función del orden social dominante.
2. Un segundo nivel, articulado por las nociones de lo político y lo social como dimensiones inescindibles (o necesariamente imbricadas) que otorgan un sentido particular a la acciones colectivas en función del conjunto social y la relación de los colectivos que la producen con el resto de los actores sociales, sean estos antagonistas o posibles aliados.
3. Un último nivel, que da cuenta de la temporalidad e historicidad de la acción de estos colectivos a través de las nociones de proceso e irrupción.

El concepto de hegemonía ha sido utilizado como herramienta práctica de construcción política por Bujarin, Lenin, y Gramsci, entre otros, por lo que históricamente presenta diversas acepciones. Los autores Buci-Glucksmann, Anderson o Laclau han dado cuenta de la polisemia que encierra el término²². Siguiendo a Buci-Glucksmann, podemos distinguir una primera acepción utilizada ya por los bolcheviques antes de la Revolución de Octubre. Para ellos, la hegemonía remite a una dirección de clase que implica que la clase obrera se posiciona y se cons-

²¹ En 2001, las cien empresas más grandes del país y las que dominan los mercados oligopólicos se benefician con la pesificación. Ver Rodríguez Diez, 2003.

²² Ver sobre el tema: Buci-Glucksmann, 1975, Anderson, 1981 y Laclau, 2000.





tituye en fuerza política autónoma e independiente; por ello la necesidad de un partido de vanguardia²³. Por el contrario, para Gramsci la hegemonía incorpora una dimensión que trasciende los límites de la concepción leninista. El aporte estriba en la separación entre la hegemonía y la toma del poder estatal. La primera reenvía en Gramsci a un proceso de construcción política, intelectual y moral, que antecede a la toma del poder, la posibilita y la sustenta: “se puede y se debe tener una hegemonía política incluso antes de asumir el gobierno, y no se debe contar con el poder y la fuerza material que éste da *para ejercer la dirección* o hegemonía política”²⁴. Como afirma Campione, Gramsci “extiende la noción de hegemonía desde su aplicación original a las perspectivas de la clase obrera, que es la de Lenin, a los mecanismos de la dominación burguesa sobre la clase obrera en una sociedad capitalista estabilizada”²⁵. En este sentido, *la ausencia previa de una hegemonía de nuevo tipo (de raigambre emancipatoria) permite entender, desde nuestro punto de vista, la imposibilidad del cambio social en el marco del 2001*.

A su vez, el análisis debe realizarse atendiendo a la dimensión particular de la acción de los diferentes colectivos sociales y políticos que intervinieron en las jornadas de diciembre de 2001. Ello implica pensar las nociones de lo social y lo político como fundamentos de la inscripción de la acción de un colectivo en el complejo entramado de interacciones sociales. Es precisamente en esta inscripción que el colectivo se definirá frente a los otros y en función de los otros para poder constituirse como actor relevante de la dinámica socio-política en la cual actúa. Esto nos invita a pensar en los diferentes modos de individuación que se originan en la inscripción del sujeto en el marco de una acción colectiva particular. Esta dimensión específica del análisis reflexiona sobre nuevas formas de subjetivación política en el marco del capitalismo contemporáneo. Ello permite comprender el modo en el cual la realidad socio-histórica, al tiempo que cambia por la acción de los actores en conflicto, moldea la forma en la cual se generan estas identidades. Estas nuevas subjetividades políticas son el soporte fundamental de la construcción de un proyecto político alternativo. Al mismo tiempo, que se revela una cuestión teórica de importancia se observa su relevancia política. La presencia de movimientos sociales y diversos actores políticos en las jornadas de diciembre de 2001 dan cuenta de una acción eminentemente política que se presenta en contraposición con el orden hegemónico. La definición de lo social y lo político, como momentos escindidos y mutuamente excluyentes de

23Buci-Glucksmann 1975, p. 210. Sobre la base del texto de Lenin, *Dos tácticas...*, t. IX, p. 139.

24Buci-Glucksmann, 1975, p. 216, del “Cuaderno 1”, fragmento 44.

25Campione, 2008: 43.





la praxis social, limitan las potencialidades de las experiencias colectivas, ya sea porque reducen sus acciones al reivindicarlas en el plano de lo social descuidando su contenido político, o, a la inversa, se reivindicán las acciones estrictamente políticas desatendiendo su necesaria base social. Estas prácticas parcializadas impiden un planteamiento estratégico sobre los problemas, limitaciones y posibilidades reales de construcción de una alternativa contrahegemónica a las fuerzas sociales capitalistas. En suma, la posibilidad de construcción de una fuerza social contrahegemónica que cristalice en un proyecto político alternativo es lo que se encuentra ausente tanto en las jornadas de 2001 como en las posteriores²⁶.

Por último, es en la temporalidad de estas acciones que vemos el peso de la historia de las luchas sociales. Como lo señalamos en el cuerpo del texto, la crisis de 2001 conlleva los elementos que se prefiguraron a partir de la dictadura militar de 1976. Las jornadas de 2001 no tienen un carácter de revuelta popular espontánea como se las caracteriza en ciertos análisis. El peso de las estructuras políticas de ciertos sectores del justicialismo, la larga y aguerrida resistencia de los sectores populares, con piquetes y otras modalidades de lucha desde mediados de los noventa, hacen que diciembre de 2001 sea la resultante de un proceso histórico mucho más amplio. Al mismo tiempo, hay una dialéctica insoslayable en la irrupción de diferentes elementos coyunturales en una crisis que, dada su confluencia en un momento particular, hacen que exista una diferencia no ya de orden cuantitativo, por la mera sumatoria de ellos, sino una diferencia cualitativa que otorga al evento político un cariz completamente diferente. Irrumpe algo cualitativamente nuevo, con elementos de lo viejo, dando así lugar a una relación inseparable entre estos dos últimos conceptos.

De esta manera, cuando la transformación social se da en forma de acontecimiento, se critica el orden dominante de forma radical, emergiendo indefectiblemente la política como producto de un desacuerdo sobre un orden social que preexiste. A su vez, cuando el desacuerdo que lleva al acontecimiento político es saldado, da origen a un momento cualitativamente diferente, y su potencialidad de cambio desaparece. La rigidez de este movimiento intelectual está en que permanece preso entre dos acontecimientos, o crisis espontánea u orden total. Así, lleva a considerar a uno u otro como cuadros que caracterizan de forma absoluta la realidad social: por un lado, un orden donde todo tiene su lugar; por el otro el momento del acontecimiento en el cual los fenómenos sociales generan una política total. En este esquema, los sujetos políticos son figuras ex-novo producto

²⁶ Ver Fisyp, 2002 y Fisyp, 2003, para consideraciones sobre la ausencia de un proyecto alternativo capaz de conformar una propuesta frente a la crisis de aquel momento.





de las fisuras que dieron origen a la crítica del orden contingente en el momento mismo que surge la política.

Por el contrario, al interpretar la transformación social como una dinámica permeable y continua, la constitución de sujetos políticos es producto de la contingencia del orden hegemónico que busca sobrepasar constantemente sus contradicciones. Se da un proceso subyacente en todo orden hegemónico en el cual se gestan, a través de luchas de distinto tipo, subjetividades políticas que dan cuenta de la contingencia de este orden como de los elementos que permiten pensar un nuevo tipo de orden social.

El punto de vista esgrimido es entonces el de reconstituir la dialéctica compleja que las fracciones sociales desarrollan a partir de sus confrontaciones sociopolíticas, y el análisis del orden social resultante de las mismas, en función de una estrategia para la constitución de un proyecto político alternativo.

BREVES CONCLUSIONES

A lo largo del artículo reflexionamos en torno a los elementos y categorías teórico-políticos que permiten dar cuenta de la complejidad de los hechos del 2001. En tal sentido, las “enseñanzas” teóricas, pero fundamentalmente políticas, que los mismos deparan a la hora de pensar en relación a proyectos que tengan como objetivo la superación del orden social capitalista, giran en torno tres dimensiones fundamentales.

A través de la lectura de los hechos, hemos resaltado la dimensión colectiva que configuró la forma en la cual se elaboró la política en aquellos días. La movilización política de amplios sectores de la población excede con mucho la posibilidad de dar cuenta de ella a partir de un esquema que reduzca la política al juego de las elites y grandes personalidades. En este sentido, entendemos que la acción colectiva, como dimensión ontológica propia, tiene la capacidad de entregar nuevos elementos a la comprensión de la dinámica política tanto en el contexto de 2001 como en los años posteriores. La temporalidad de las acciones y el debate acerca de la insurrección espontánea debe ser también un elemento central para comprender la forma en la cual se produce el cambio político, en particular en aquellos momentos, pero en general en sociedades en las cuales parecería que las formas no institucionalizadas dominan. Así, reconstruir la dimensión de proceso por sobre lo espontáneo apela a dar cuenta de historias y recorridos militantes que permiten comprender cómo se da la acción colectiva en un contexto de crisis hegemónica.





En lo relativo al par hegemonía-contrahegemonía, la pronta dilución de las energías populares convergentes en el mes de diciembre de 2001 ilustra sobre sus dificultades para construir una dirección “intelectual y moral” que trascienda los particularismos (más allá del debate en torno a la ausencia de lazos entre las experiencias populares que hacen foco en lo social y/o en lo político) y que amalgame una fuerza social emancipatoria. Ha sido la ausencia de esta alternativa política de masas una de las claves para comprender los límites que cercaron la experiencia del 2001, que también son las limitaciones del campo popular en la actualidad.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y ARTÍCULOS

Acuña, Miguel; Calot, Fernando; Di Gioia, Flavio; Gielis, Leandro; Gundín, Mirta; Morgavi, Martín; Prividera, Guido y Villagra, Constanza, 2004, “Cronología de los Hechos de Diciembre de 2001”, mimeo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Armellino, Martín, 2005, “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA”, en Schuster, Federico; Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Prometeo.

Basualdo, Eduardo, 2000, *Concentración y Centralización del capital en Argentina durante la década del noventa*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Basualdo, Eduardo y Kulfas, Miguel (2000), “Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina”, en *Realidad Económica*, N° 173, Buenos Aires.

Boron, Atilio, 1995, “El experimento neoliberal de Carlos Saúl Menem”, en *Peronismo y Menemismo. Avatares del populismo en la Argentina*, Buenos Aires, Ediciones del Cielo por Asalto.

Buci-Glucksmann, Christine, 1975, *Gramsci et l'État, pour une théorie matérialiste de la philosophie*, Paris, Fayard.

Campione, Daniel, 2008, *Para leer a Gramsci*, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

Danani, Claudia y Grassi, Estela, 2008, “Ni error ni omisión. El papel de la política de Estado en la producción de las condiciones de vida y de trabajo”, en Fisyp, 2002, *Rebeliones y puebladas. Diciembre de 2001 y enero de 2002, viejos y nuevos desposeídos en Argentina*, Buenos Aires, Fisyp.





Fisyp, 2003, *Argentina, un año después...*, Buenos Aires, Fisyp.

Gambina, Julio y Campione, Daniel, 2002, *Los años de Menem. Cirugía Mayor*, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

Godio, Julio, 2002, *Argentina: en la crisis está la solución. La crisis global desde las elecciones de octubre de 2001 hasta la asunción de Duhalde*, Buenos Aires, Biblos.

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia, 2006, "Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina", en Gerardo Caetano (comp.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, Buenos Aires, FLACSO, Colección grupos de trabajo.

Lindenboim, Javier (comp.), *Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI*, Buenos Aires, Eudeba.

Rajland, Beatriz, 2000, "La crisis de la teoría de la representación política", en Campione, D., Rajland, B., Constante, L. y Unzué, M., *Estado y Sociedad*, Cap. II, Buenos Aires, Eudeba.

Rodríguez Diez, Alejandro, 2003, *Pesificación y Devaluación*, Buenos Aires, Bifronte editores.

Stiglitz, Joseph, 2003, *Los felices 90. La semilla de la destrucción*, Buenos Aires, Alfaguara.

Vazeilles, José G., 1985, *La ideología oligárquica y el terrorismo de Estado*, Buenos Aires, CEAL.

LEYES Y DECRETOS

Decreto N° 214/2002 del Poder Ejecutivo Nacional.

Ley N° 25.713/2003 del Poder Legislativo Nacional

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS

"Balance de un día. Hugo Moyano: Devaluación y cambios", *Página/12*, diciembre 14 de 2001, p. 12.

"Cavallo, Menem y los gurúes de la city contra la devaluación", *Clarín*, diciembre 14 de 2001.

Krakoviak, F., "Morfonos", *Página/12*, suplemento *Cash*, abril 2 de 2006.





LA CINCUENTENARIA PROYECCIÓN EXTERNA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA:

NUESTROAMERICANISMO VS. PANAMERICANISMO

*Luis Suárez Salazar**

El 3 de junio de 2009, la XXXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), efectuada en San Pedro de Sula, Honduras, tomó la decisión, por aclamación, de derogar incondicionalmente la ilegal resolución que, en enero de 1962, había excluido al gobierno revolucionario cubano de los principales órganos del Sistema Interamericano¹. En particular, de la OEA y de la Junta Interamericanas de Defensa (JID), fundada en 1942 y “subordinada” desde 2006 a esa organización hemisférica.

Como han destacado diversos analistas y altos funcionarios gubernamentales, en esa “histórica resolución” de San Pedro Sula influyeron diversos factores. Entre ellos, la unidad de propósitos evidenciada por la mayor parte de los 32 gobiernos latinoamericanos y caribeños actualmente integrantes del Sistema Interamericano², y la profunda crisis moral que afecta la política de bloqueos y

* Doctor Sc. Escritor. Profesor universitario

1El Sistema Interamericano está conformado por un entramado de diversas instituciones políticas, jurídicas, político-militares y económico-sociales. Dentro de estas últimas, la más importante es la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la cual el gobierno cubano nunca fue expulsado. Por el contrario, como reconocimiento a la labor favorable a la salud pública de su población y de otros pueblos latinoamericanos y caribeños, los representantes oficiales cubanos han ocupado diversos cargos de dirección de esa organización, incluida una de sus vice-presidencias.

2 En 1962, la OEA sólo estaba integrada por los gobiernos de Estados Unidos y de 20 países de América Latina y el Caribe, incluido el de Cuba. De ahí que la resolución que expulsó al gobierno cubano solo requirió el voto favorable de 14 de los 21 gobiernos entonces integrantes de esa organización





agresiones contra el pueblo cubano, desplegada –salvo excepciones que confirman la regla– por las diez administraciones demócratas y republicanas instaladas en Estados Unidos desde 1959 hasta el 20 de enero de 2009.

También se ha destacado “la flexibilidad” demostrada por la Secretaría de Estado de la recién estrenada administración de Barack Obama, Hillary Clinton, para sumarse –a última hora– al consenso que habían logrado elaborar los cancilleres y los dos presidentes de los países entonces integrantes u observadores permanentes de la ahora llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (Alba-TCP), que participaron en esa cita³.

Sin embargo, pocos analistas y funcionarios oficiales han destacado que la antes referida resolución de la XXXIX Asamblea General de la OEA fue, por sobre todas las cosas, uno de los tantos frutos de la consistente y consecuente proyección externa de la Revolución Cubana⁴. Y, en particular, de las diversas estrategias desplegadas, desde 1959 hasta la actualidad, por sus sucesivos gobiernos⁵, al igual que por las organizaciones de base popular que actúan en la sociedad política y civil cubanas hacia el espacio geográfico, histórico y cultural que –desde fines del

3 En el momento en que se efectuó la XXXIX Asamblea General de la OEA, integraban el Alba los gobiernos de Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, eran observadores permanentes los gobiernos de Antigua y Barbudas, Ecuador, Paraguay y San Vicente y las Granadinas. Los dos mandatarios participantes en esa cita fueron Daniel Ortega y Manuel Zelaya, presidentes de Nicaragua y Honduras, respectivamente.

4 Como en otros de mis textos (El siglo XXI: posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2000) utilizo el concepto proyección externa, en vez de política exterior, para connotar acontecimientos y definiciones de la política interna, económica e ideológico-cultural que, sin dudas, han influido, influyen e influirán en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las interacciones de esa revolución con los diferentes sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, que actúan en el sistema y la economía del mundo. Igualmente, para incluir en mi análisis la actividad de las diversas organizaciones populares que actúan en la sociedad política y civil cubana. Estas, con independencia de la labor del Estado, participan en el diseño y la aplicación de la política internacional de la República de Cuba.

5 En la prolija literatura existente sobre la Revolución Cubana es usual mencionar en singular al gobierno cubano. Esas referencias desconocen que, desde el triunfo de la Revolución, en Cuba se han instalado nueve gobiernos: dos de ellos surgidos de las modificaciones que introdujo el Gobierno Revolucionario a la Constitución de 1940 y siete como fruto de las elecciones generales quinquenalmente efectuadas desde 1976 hasta la actualidad sobre la base de la Constitución de la República aprobada en 1976 y parcialmente reformada en 1992 y 2003. El primero de esos gobiernos fue presidido por el timorato magistrado Manuel Urrutia Lleó y el segundo por Oswaldo Dorticós Torrado. Luego de las elecciones generales de 1976, resultó electo por primera vez por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Fidel Castro, quien sucesivamente fue reelecto por el propio órgano luego de las elecciones generales realizadas en 1981-1982, 1986-1987, 1992-1993, 1997-1998 y 2002-2003. En las elecciones generales realizadas en 2007-2008, la ANPP eligió como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros al general de Ejército Raúl Castro.





siglo XIX– el Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, llamó Nuestra América. El presente ensayo va dirigido a presentar una síntesis lógico-histórica de las principales utopías que han guiado esas estrategias, así como a realizar una evaluación de sus resultados más destacados.

LAS UTOPIÁS NUESTRAMERICANAS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

Como he venido indicando desde hace más de dos décadas, con independencia de las diferentes etapas (algunas de ellas altamente conflictivas) por las que han atravesado las interacciones de la Revolución Cubana con los diversos gobiernos de América Latina y el Caribe, al igual que con diferentes destacamentos de sus ahora denominadas “izquierda histórica” y “nueva izquierda”, pueden identificarse diversas líneas de continuidad en las utopías y en las estrategias hacia ese continente diseñadas por el liderazgo político y estatal, al igual que por las organizaciones de raigambre popular que actúan en la llamada “sociedad civil socialista cubana”. Esas continuidades pueden expresarse como sigue:

Acorde con el legado libertario y unitario de los principales próceres, mártires y pensadores de las luchas por las que José Martí denominó “primera” y “segunda” independencia de Nuestra América –y en particular con su aldabonazo (contenido en su carta inconclusa del 8 de mayo de 1985 a su amigo mexicano Manuel Mercado) de “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”–, para el liderazgo político y estatal, así como progresivamente para la mayoría absoluta del sujeto popular cubano, siempre ha estado claro que la defensa y la consolidación de su Revolución forma parte intrínseca de lo que la *Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba* (aprobada en 1975) denominó “luchas por la genuina independencia”, así como por “la futura integración económica y la unidad política de los pueblos de América Latina y el Caribe”. Y que tales utopías no podrían convertirse en realidad sin la realización de profundos cambios reformadores y revolucionarios en los Estados nacionales, así como sin la independencia de los principales territorios coloniales o semi-coloniales que entonces existían y que, en algunos casos, aún perduran en ese continente⁶.

6 En el momento que se escriben estas líneas los territorios coloniales o semi-coloniales existentes en el continente americano son: Cayena, Guadalupe y Martinica (considerados como Departamentos Franceses de Ultramar); Aruba, Donaire y Curazao (bajo control de Holanda); Saint Marteen (bajo el control compartido de Francia y Holanda); Islas Vírgenes y Puerto Rico (bajo control de Estados Unidos); Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat e Islas Turcas (bajo el control de Gran Bretaña). A ellos se





Como solución de continuidad al Programa del Moncada, impulsado por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio; con los radicales cambios en la política exterior de la “república neo-colonial”, propugnados por el Partido Socialista Popular y por el Movimiento Revolucionario 13 de Marzo;⁷ con los postulados de la Primera y Segunda Declaración de La Habana, al igual que la Declaración de Santiago de Cuba refrendados por la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba en 1960, 1962 y 1964, respectivamente, así como uno de los frutos del análisis crítico de la teoría y la *praxis* (no exenta de errores) precedentes, realizadas por el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba efectuado entre el 17 y el 22 de diciembre de 1975, según consta en la primera Constitución socialista de la República de Cuba, aprobada por el 97,6 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años del país en el plebiscito realizado el 15 de febrero de 1976, esas utopías se sintetizaron en la aspiración del pueblo cubano “a integrarse con los países de América Latina y del Caribe, liberados de dominaciones externas y de opresiones internas, en una gran comunidad de pueblos hermanados por la tradición histórica y la lucha común contra el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo en el mismo empeño de progreso nacional y social”.

Aunque, a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, fue invirtiéndose la antes referida correlación entre “la integración” y “la liberación” de América Latina y el Caribe (de hecho, “la integración” se valoró como condición necesaria, aunque no suficiente, para “la liberación” del continente)⁸, esas utopías fueron ratificadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en las reformas constitucionales de 1992 y de 2003. Además del “irrevocable” carácter socialista de la Revolución incluido en esa última reforma, así como de otros fundamentos jurídicos de la política exterior de la República de Cuba, en la

agregan las Islas Malvinas, cuya soberanía viene siendo reclamada a Gran Bretaña por sucesivos gobiernos de la República Argentina.

7 El Movimiento 26 de julio, el Movimiento Revolucionario 13 de Marzo y el Partido Socialista Popular fueron las organizaciones revolucionarias que, después de haber participado en el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958), fundaron, en 1960, las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI). Luego de la crítica al sectarismo que caracterizó a algunas estructuras de dirección de las ORI, esas tres organizaciones se fusionaron en el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC), organización que en 1965 cambió su nombre por el de Partido Comunista de Cuba.

8 Desde “la batalla contra la deuda externa” (1985-1988) hasta la actualidad, Fidel Castro ha insistido, en más de una ocasión, en que “la integración política y económica de América Latina y el Caribe” es precondition para la realización de los cambios sociales, económicos, políticos e ideológico-culturales, internos y externos, que necesitaba y necesita ese continente. Incluso, llegó a afirmar que esa “integración”, aunque sea sobre bases capitalistas, es la única forma de que el continente sobreviva a los duros embates de la “globalización neoliberal” impulsada por las principales potencias imperialistas.





actual Constitución vigente en la República de Cuba aparecen expresos los principios antimperialistas, anti-colonialistas, anti-neocolonialistas, tercermundistas e internacionalistas que, desde los primeros años del triunfo de la Revolución, habían guiado la política exterior cubana. También se reafirma “su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y el Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo”.

De lo antes dicho se desprende que, en la teoría y la *praxis* de la proyección externa de la Revolución Cubana, siempre ha existido el propósito de estimular, apoyar y congregar los multiformes esfuerzos de todos aquellos sujetos sociales y políticos –estatales y no estatales– interesados en promover modificaciones más o menos radicales en el sistema de dominación político, diplomático, militar, económico e ideológico-cultural instaurado por las clases dominantes, los poderes fácticos y sucesivos gobiernos temporales de Estados Unidos (en alianza con sus correspondientes contrapartes hemisféricas y con otras potencias colonialistas europeas) sobre las naciones y los pueblos latinoamericanos y caribeños⁹.

Aunque la identificación y, sobre todo, el respaldo a los “actores” sociales y políticos convocados a esos empeños han sufrido ciertas variaciones en las diferentes etapas por la que ha atravesado la transición socialista cubana¹⁰, no hay dudas de que, desde el propio primero de enero de 1959, las autoridades político-estatales y las organizaciones populares de este archipiélago condenaron todas

9 En la literatura marxista, siempre se han diferenciado los términos Estado y gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socio-clasista de cualquier Estado-nación, el primero alude a lo que se denomina “la maquinaria burocrática-militar” y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el término “gobierno” alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente, la diferenciación entre los “gobiernos permanentes y temporales” fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a lo que, en ese texto, llamaban “grupos de poder y poderes fácticos”, mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales que se producen en diferentes países del mundo.

10 Por ejemplo, en la década de los sesenta, como consecuencia del respaldo de casi todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños a la política agresiva contra Cuba desplegada por los grupos dominantes en Estados Unidos, el liderazgo político cubano privilegió sus relaciones con aquellas organizaciones políticas o político-militares que se plantearon la lucha armada para tomar el poder político y emprender la construcción del socialismo. Sin abandonar el apoyo a esas organizaciones, al igual que a otros partidos y organizaciones de la izquierda que propugnaban esos cambios por vías pacíficas, esa situación cambió a partir de la década de los setenta. Sobre todo, después de que varios gobiernos latinoamericanos y caribeños emprendieron cambios reformadores, revolucionarios o reformistas, según el caso, en sus correspondientes países y paulatinamente comenzaron a restablecer sus relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Cuba.





las dictaduras militares entronizadas en las demás naciones de la que al Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, le gustaba llamar “nuestra súper patria común”. Esa actitud se expresó en su multifacética solidaridad con todos los sujetos sociales y políticos partícipes de las multiformes luchas contra las satrapías instauradas en Haití, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, al igual que contra las “dictaduras militares tradicionales” y los diversos regímenes de seguridad nacional (militares y civiles) que se instalaron entre 1962 y 1989 en la mayor parte de América Latina y en algunos países del Caribe. A partir de 1990, esa postura encontró continuidad en el rechazo cubano a los golpes de Estado o a las frustradas intentonas golpistas que se produjeron en Haití (1991), Guatemala (1993), Paraguay (1996) y, en abril de 2002, en la República Bolivariana de Venezuela (RBV). También en su condena a los intentos golpistas-separatistas que se produjeron en Bolivia en el 2008 y, en fecha más reciente, en su “firme condena” al golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya que se produjo en Honduras el 28 de junio del 2009.

Paralelamente, y en contraposición a los discursos de los representantes políticos y los intelectuales orgánicos de las clases dominantes latinoamericanas y caribeñas (al igual que de ciertos sectores de “la izquierda”), que le conferían y le confieren un valor absoluto a la “democracia burguesa representativa”, las autoridades gubernamentales cubanas han apoyado todos los procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares que se han producido en ese continente, con independencia de la extracción social y la pertenencia política de sus protagonistas civiles o militares, así como de las vías de lucha (armadas, desarmadas o electorales, institucionales o extra-institucionales) que hayan empleado para acceder al gobierno y a otros espacios del poder político, así como de su mayor o menor identificación con los ideales del socialismo.

Así se expresó en la solidaridad cubana con el gobierno de Cheddy Jagan (1961-1964), instalado por vías electorales en la ahora llamada República Cooperativa de Guyana, aún antes de que ese país obtuviera su independencia política de Gran Bretaña. También, con todas las fuerzas políticas, sociales e ideológico-culturales que respaldaron al gobierno la Unidad Popular chilena, encabezado por el martirizado “compañero-presidente” Salvador Allende (1970-1973), al igual que a los gobiernos encabezados o notablemente influidos por militares nacionalistas de Ecuador (entre 1972 y 1976), Panamá (entre 1968 y 1989) y Perú (entre 1968 y 1980). Asimismo, en el multifacético respaldo oficial cubano a las revoluciones populares granadinas (1979-1983) y sandinista (1979-1990). Igualmente, en las relaciones diferenciadas mantenidas por las autoridades cubanas con los gobiernos civiles reformistas y nacionalistas instaurados en otros





países de América Latina y el Caribe. En particular, con aquellos que progresivamente se integraron al Movimiento de Países No Alienados (MPNOAL), en cuya fundación, en 1961, sólo había participado el gobierno cubano, presidido por Oswaldo Dorticós Torrado.

Tal postura, solidaria con los variados procesos de cambio favorables a los intereses nacionales y populares antes mencionados, encontró continuidad en la actitud asumida por la Revolución Cubana frente a la Revolución Bolivariana y los gobiernos reformistas, reformadores, revolucionarios o simplemente progresistas, según el caso, instaurados desde 2003 hasta la actualidad en Argentina, Bolivia, Brasil, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, Uruguay, Paraguay y, más recientemente, en El Salvador. No obstante, dentro del más estricto respeto a los intereses y las posiciones de los protagonistas de todos esos procesos, así como a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, las formas específicas adquiridas por la solidaridad cubana hacia ellos han estado condicionadas a la voluntad de los sujetos sociales y políticos implicados, a la percepción oficial cubana acerca de la consistencia y consecuencia de estos, así como a su análisis de la correlación internacional o hemisférica de fuerzas existentes en cada momento histórico específico.

De manera convergente y a pesar de las discrepancias utópicas, axiológicas, programáticas, estratégicas y tácticas que han existido y todavía existen entre el liderazgo político cubano y diferentes organizaciones de las izquierdas política, social e intelectual de América Latina y el Caribe, desde su fundación en 1965, la máxima dirección del Partido Comunista de Cuba ha realizado consistentes esfuerzos para desarrollar sus multifacéticos vínculos de solidaridad recíproca y de respeto mutuo con todas esas organizaciones. Igualmente, con aquellos partidos de la otrora llamada “izquierda nacional-popular” o “social-demócrata”, que han mantenido una actitud respetuosa hacia la Revolución Cubana. Expresión de esa política fue la oportuna incorporación del Partido Comunista de Cuba como miembro asociado de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), fundada en México en 1979, al igual que su activa participación en las labores y los diferentes encuentros del llamado Foro de São Paulo, fundado a comienzos de la década de los noventa.

Previamente, en la segunda mitad de la década de los ochenta, el entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel Castro, había convocado a todas esas organizaciones de la plural izquierda latinoamericana y caribeña a unirse entre sí para librar “la batalla contra la deuda externa”. Del mismo modo que, durante la década de los noventa, las convocó a luchar con-





tra “la globalización neoliberal” y a impulsar “la integración latinoamericana y caribeña”. En el primer lustro del presente siglo, también llamó a esas y otras fuerzas sociales y políticas *nuestroamericanas* a librar una batalla común contra el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), así como a la formación de una amplia coalición contra la política belicista, hegemónica y “fascista” emprendida por la reaccionaria administración de George W. Bush al amparo de su llamada “guerra preventiva contra el terrorismo de alcance global”.

Esos empeños fueron precedidos o acompañados, según el caso, por las multifacéticas relaciones establecidas por las diferentes organizaciones de base popular (incluidas algunas de las más de dos mil ONG, fundaciones y asociaciones legalmente reconocidas) que actúan en la “sociedad civil socialista” cubana con los “viejos” y “nuevos” movimientos sociales latinoamericanos y caribeños, así como de otras latitudes. También por los esfuerzos desplegados por diversas instituciones culturales (en primer lugar la ahora cincuentenaria Casa de las Américas), profesionales y científicas cubanas, por estrechar sus relaciones con todos aquellos intelectuales *nuestroamericanos* que mantienen una conducta respetuosa hacia la Revolución Cubana. A ello se ha unido el sistemático (aunque no siempre eficaz) empeño desplegado por los periodistas cubanos y por los diferentes medios de comunicación masiva de este país (incluidas Prensa Latina, Radio Habana Cuba y, más recientemente, Cuba Visión Internacional) al igual que a través de TELESUR por romper “el monopolio de la palabra” detentado por los ahora denominados “medios de desinformación masiva”, cada vez más controlados por los más poderosos capitales corporativos transnacionales¹¹.

Por otra parte, los gobiernos y las organizaciones políticas, sociales y de masas que actúan en la sociedad cubana, desde 1959 hasta la actualidad, han condenado todas las intervenciones extranjeras (directas o indirectas, individuales o “colectivas”) en los asuntos internos de las naciones de América Latina y el Caribe. También han expresado la necesidad de eliminar los ya mencionados rezagos coloniales existentes en ese continente. En ese orden, han respaldado y continúan apoyando las luchas por la independencia del pueblo puertorriqueño. Asimismo, apoyaron todos los procesos de la descolonización negociada con Gran Bretaña y Holanda

¹¹ La expresión “monopolio de la palabra” pertenece al destacado intelectual *nuestroamericano*, oriundo de Brasil, Emir Sader; quien acertadamente indicó que las multiformes luchas que en la actualidad se desarrollan en América Latina y el Caribe, inevitablemente, tenían que confrontar los que llamó los monopolios de las armas, del dinero y de la palabra. A su vez, el término “medios de desinformación masiva” ha sido utilizado por Ignacio Ramonet y por otros intelectuales que critican el nefasto papel que desempeñan las cada vez más privatizadas y monopolizadas industrias informativas y culturales, que tienen sus casas matrices en las principales potencias del todavía llamado Primer Mundo.





que, hasta ahora, se han desarrollado en las mal llamadas Indias Occidentales. En la misma medida en que sus organizaciones sociales y políticas lo han demandado, el liderazgo político y estatal cubano también ha apoyado las contiendas por la independencia de los llamados Departamentos Franceses de Ultramar (DOM, por sus siglas en francés); en particular, Guadalupe y Martinica¹².

En correspondencia con todo lo antes dicho, desde los primeros meses del triunfo de la Revolución y aún antes de que el gobierno revolucionario cubano fuera expulsado en 1962 de la OEA y de la JID, su política exterior ha mantenido una consistente crítica al *panamericanismo*. Y, por ende, al funcionamiento de los principales órganos del Sistema Interamericano. Por ello, las autoridades políticas y estatales cubanas han reiterado, una y otra vez, que su retorno a esas organizaciones no ha formado, ni forma, ni formará parte de los objetivos actuales y futuros de su política hemisférica. En consecuencia, sucesivos gobiernos cubanos han mantenido una sostenida, aunque respetuosa crítica a los principales acuerdos de las cinco Cumbres de las Américas convocadas, primero, por la administración de William Clinton en 1994 y, luego, por los gobiernos de Chile (1998), Canadá (2001), Argentina (2005), así como Trinidad y Tobago (abril de 2009).

En ese contexto, las autoridades político-estatales y las organizaciones populares cubanas han criticado, de manera rigurosa, todas las tratativas que hasta la penúltima de esas cumbres se venían realizando para protocolizar el mal llamado Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), así como los Tratados de Libre Comercio, bilaterales o plurilaterales, firmados por los gobiernos de Estados Unidos y de diversos países latinoamericanos y caribeños. Igualmente, han criticado los demás componentes institucionales, jurídicos, políticos, económicos, militares, de seguridad e ideológico-culturales de lo que reiteradamente he llamado “el nuevo orden panamericano”.

En antítesis, los sucesivos gobiernos cubanos han respaldado todos los organismos y foros multilaterales de concertación política, cooperación e integración económica que –al margen de los diversos gobiernos temporales estadounidenses– se han fundado en América Latina y el Caribe en los últimos 48 años¹³.

12 Ese apoyo fue particularmente intenso en las décadas de los sesenta y los setenta, y disminuyó en la misma medida en que las organizaciones políticas y sociales de esas islas fueron modificando su programa independentista para sustituirlo por otros reclamos sociales, culturales y políticos al gobierno francés.

13 Desde mayo de 1959, el liderazgo político y estatal revolucionario cubano expresó su disposición a incorporarse a lo que entonces se llamaba un Mercado Común Latinoamericano y, por tanto, a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), fundada en 1960. Si esa incorporación no se produjo fue a causa de la hostilidad contra la Revolución Cubana de la mayor parte de los gobiernos que la fundaron.





En los casos en que han sido convocadas o admitidas, las autoridades oficiales cubanas han participado de manera constructiva en la fundación y el funcionamiento de esos foros. Así ocurrió con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), con las Cumbres Iberoamericanas, con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con las Cumbres Europa-América Latina-Caribe y con las Conferencias de Primeras Damas, Esposas y Representantes de Jefes de Estado y Gobiernos de las Américas. Igualmente, en fecha más reciente, con el Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, al igual que con la Primera Cumbre para la Integración y el Desarrollo de América Latina y el Caribe (CALC), realizada en San Salvador de Bahía, Brasil, a fines de 2008.

Del mismo modo, los gobiernos cubanos presididos por Fidel y Raúl Castro, respectivamente, han buscado (y continúan buscando) fórmulas para establecer relaciones de cooperación mutua con los diferentes proyectos de “integración económica” que funcionan en América Latina y el Caribe; en particular con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En función de ello, en 1993, el gobierno cubano encabezado por Fidel Castro estableció una Comisión Conjunta con la CARICOM y, tres años después, ingresó en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), formada en 1980 por los gobiernos de México y de diez países de América del Sur. Adicionalmente, en 2005 las autoridades estatales de la isla firmaron un Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur.

Sin embargo, acorde con sus críticas a las insuficiencias político-institucionales, sociales, económicas, ideológico-culturales y ecológicas que caracterizan a todos esos proyectos integracionistas, al igual que al Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como en correspondencia con sus referidas utopías latinoamericanistas y antiimperialistas, reformadoras y revolucionarias, la máxima expresión de esa voluntad integracionista ha sido el consistente respaldo de los antes mencionados gobiernos cubanos a la progresiva institucionalización, ampliación y profundización del Alba, impulsado desde 2001 por el presidente venezolano Hugo Chávez, y cuyas “bases cardinales” fueron establecidas en el encuentro de diciembre de 2004 entre este y el entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel Castro.

Esas “bases cardinales” se precisaron y ampliaron con el Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP), suscrito a fines de abril de 2006 entre ambos mandatarios y el entonces recién electo presidente boliviano Evo Morales; igualmente, en las sucesivas cumbres ordinarias y extraordinarias del Alba, efectuadas desde entonces hasta fines de junio de 2009. En esas citas se incorporaron sucesivamente, al ALBA-TCP, los





gobiernos de Nicaragua, Honduras, Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, así como de San Vicente y las Granadinas. Todos ellos –con excepción de Ecuador– también signatarios –junto con los gobiernos de Cuba, Guatemala, República Dominicana y Venezuela– de los acuerdos que dieron origen, en 2005, a Petrocaribe y al Fondo ALBA-Caribe, suscritos por la mayor parte de los gobiernos integrantes de la CARICOM, con excepción de Barbados y Trinidad y Tobago.

Paralelamente, desde el mismo comienzo del triunfo de la Revolución, las autoridades de la mayor de las Antillas han expresado su voluntad de mantener y desarrollar multifacéticas relaciones de mutuo respeto con todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños que, independientemente de su sistema político, económico y social, observaran en sus relaciones con Cuba las normas de convivencia entre los Estados establecidas por el Derecho Internacional Público contemporáneo. Si, en diferentes momentos de las más recientes cinco décadas y en correspondencia con los enunciados públicos de la Declaración de Santiago de Cuba de 1964, los gobiernos cubanos desconocieron tales normativas fue a causa de la participación de diversos gobiernos militares o civiles del continente en la agresiva política contra el pueblo cubano, desplegada por las diez administraciones demócratas y republicanas instauradas en Estados Unidos desde 1959 hasta el 20 de enero de 2009; con la única excepción de los dos primeros años del gobierno del demócrata-liberal James Carter (1977-1981).

En ese contexto, puede afirmarse que los únicos gobiernos latinoamericanos y caribeños con los cuales Cuba tomó la iniciativa de romper relaciones diplomáticas fueron la satrapía de Rafael Leónidas Trujillo (en ocasión de una frustrada “invasión” organizada por este en los primeros meses del triunfo de la Revolución) y, a comienzos de este siglo, con el gobierno panameño encabezado por Mireya Moscoso (1999-2004). En este último caso, a causa de la decisión de esa mandataria de indultar al convicto y confeso terrorista de origen cubano Luis Posadas Carriles, autor –entre otras fechorías– de la voladura en pleno vuelo de un avión civil de la compañía Cubana de Aviación (1976), prófugo de la justicia venezolana, planificador de un frustrado atentado dinamitero contra la comitiva cubana que –encabezada por Fidel Castro– asistió a la Cumbre Iberoamericana realizada en Panamá, en 2000, y ahora colocado bajo la virtual protección del gobierno del demócrata-liberal Barack Obama; quien –al igual que su antecesor republicano– sigue rechazando las solicitudes de extradición oportunamente presentadas al Departamento de Estado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (RBV).





No obstante, con independencia del estado de sus relaciones oficiales con uno u otro gobierno latinoamericano y caribeño, las autoridades político-estatales cubanas, desde 1960 hasta la actualidad, siempre han ayudado a cualquier país de ese continente que haya sido afectado por las catástrofes sociales derivadas de los fenómenos naturales (ciclones, terremotos) típicos de esa región¹⁴. También han contribuido al control de algunas pandemias (como el dengue hemorrágico, la hepatitis B y el VIH/SIDA), que afectan a varios países del continente americano. Desde 1998, esa postura humanitaria ha encontrado continuidad en el Plan Integral de Salud emprendido por Cuba en diferentes países del mundo subdesarrollado; entre ellos, Belice, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y la RBV. En tal plan han participado y participan miles de trabajadores y trabajadoras de salud, oriundos de la mayor de las Antillas.

Para garantizar la sustentación de ese y otros programas similares (como la “Operación Milagro”, dirigida a devolverles la vista a cientos de miles de hombres y mujeres de América Latina y el Caribe), en 1999 fue inaugurada en La Habana la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, conocida como la ELAM. Según la información disponible, hasta agosto de 2008 ese centro había graduado más de 6.000 estudiantes de 27 países del hemisferio occidental, la mayor parte ellos latinoamericanos y caribeños. Estos forman parte de los cerca de 50.000 estudiantes de 120 países que —mediante becas del gobierno cubano— culminaron sus estudios de nivel medio y superior en diferentes centros educacionales de este archipiélago. De ellos, más del 20 por ciento son latinoamericanos y caribeños. A ese grupo se agregan los y las profesionales de la salud de todo el continente que se están formando en la RBV, como parte de los acuerdos del ALBA-TCP. En ese contexto, adicionalmente, cientos de maestras y maestros cubanos han contribuido a la eliminación del analfabetismo en Bolivia, Nicaragua y la RBV. Tales acciones en el terreno educativo habían sido antecedidas por los esfuerzos de igual carácter emprendidos en la década de los ochenta por más de dos mil maestros cubanos en Nicaragua y, más recientemente, en Haití.

Por último, aunque no menos importante, desde 1959 hasta la actualidad, las autoridades políticas y estatales cubanas siempre han respaldado la búsqueda de soluciones políticas y negociadas de todos los conflictos interestatales existentes

¹⁴A comienzos de 1960 se produjo un violento terremoto en Chile. Según los registros históricos, esa fue la primera vez que Cuba envió —junto a otras formas de ayuda— una brigada médica a un país latinoamericano; práctica que, en la medida en que fue aceptada por otros gobiernos latinoamericanos, se mantuvo en los años sucesivos; incluso en el caso del terremoto que sacudió Nicaragua cuando ese país aún era mal-gobernado por la dictadura de los Somoza, participe directa —desde los primeros años del triunfo de la Revolución— en diferentes actos de agresión contra el pueblo cubano.





o subsistentes en el hemisferio occidental; en especial, los conflictos fronterizos o por la delimitación de las aguas territoriales o patrimoniales que involucran a diferentes Estados latinoamericanos y caribeños. Asimismo, cuando se lo han solicitado los actores políticos (estatales y no estatales) implicados, la diplomacia de la isla ha propiciado la culminación negociada de las guerras civiles (con componentes de liberación nacional y social) que se han desarrollado en América Latina y el Caribe. Los casos más significativos han sido la constructiva actitud asumida por las autoridades oficiales cubanas en la progresiva solución de la llamada “crisis centroamericana”, así como en la búsqueda de acuerdos aceptables para las partes involucradas en el cruento y prolongado “conflicto interno” que se desarrolla en Colombia¹⁵.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El espacio disponible para este artículo no me permite analizar los desiguales resultados de todas las estrategias antes referidas. Sin embargo, a modo de conclusión, es necesario señalar que –a pesar de todos los problemas objetivos y subjetivos que han afectado y continúan afectando su cultura, su axiología, su sociedad, su sistema político, su economía y sus relaciones políticas y económicas internacionales– las referidas continuidades de la proyección externa de la Revolución Cubana hacia Nuestra América han contribuido a garantizar que, cinco décadas después del primero de enero de 1959, “la patria de Martí” continúe siendo –como anticipó Fidel Castro en su alegato conocido como *La Historia me absolverá*– “un baluarte de libertad” en el hemisferio occidental.

En la realización de esa utopía, al igual que en la progresiva normalización de sus relaciones oficiales con todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños, ha tenido (y tiene) una decisiva importancia el heroísmo cotidiano del pueblo cubano, su masivo apoyo al liderazgo político del país, al igual que *la legitimidad de origen* de sus autoridades estatales¹⁶. En primer lugar, de los delegados a las Asambleas

¹⁵Aunque todavía son poco conocidos los detalles al respecto, la participación oficial cubana en la búsqueda de una solución política negociada de la cruenta guerra civil que se desarrolla en Colombia comenzó en 1983, en especial durante los primeros diálogos que se desarrollaron entre el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). Esa conducta continuó durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y luego durante los diálogos de paz desarrollados por el gobierno de Misael Pastrana Arango (1998-2002) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional, al igual que los desarrollados con esta última organización por el actual presidente colombiano Álvaro Uribe.

¹⁶Hasta 1976, la legitimidad del origen de las autoridades estatales cubanas estaba fundamentada en el respaldo de la población a las decisiones adoptadas por el Gobierno Provisional Revolucionario y por la máxima dirección del Partido Comunista de Cuba. Sin que la autoridad política e institucional de ese par-





Municipales y Provinciales del Poder Popular, de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y de los 31 integrantes del Consejo de Estado de la República de Cuba, incluidos sus sucesivos presidentes, Fidel y Raúl Castro. Sin dudas, como se verá en la tabla N° 1, esa legitimidad de origen se profundizó a partir de las elecciones generales de 1992-1993, en las que –por primera vez en la historia de la Revolución– se institucionalizó la elección directa y a través del voto secreto de sus correspondientes electores de los diputados y las diputadas a la ANPP; quienes, a propuesta de una Comisión de Candidaturas formada por ese parlamento, son los que eligen a todos los integrantes del Consejo de Estado, incluidos su presidente y sus cinco vice-presidentes.

El consistente respaldo popular a esas y otras instituciones del sistema político (en particular al Partido Comunista de Cuba y a las principales organizaciones sociales y de masas), y la participación de centenares de miles de cubanos y cubanas en todas las tareas vinculadas al desarrollo económico y social, así como a la defensa del país y a la seguridad ciudadana, ha sido suficiente para derrotar los persistentes propósitos de importantes sectores de las clases dominantes y del *establishment* de la política exterior y de seguridad estadounidense de derrotar (*roll back*) al régimen socialista cubano, al igual que de producir, con tal fin, su aislamiento político, diplomático, económico e ideológico-cultural respecto al mundo. Del mismo modo que la participación voluntaria de decenas de miles de cubanos y cubanas en las acciones de solidaridad y colaboración civil o militar desplegadas allende sus fronteras, objetivamente ha contribuido a garantizar el cumplimiento de muchos de los objetivos de la política internacional de la Revolución Cubana.

Como han reconocido algunos de sus principales protagonistas, esa solidaridad, junto a las realizaciones socio-económicas, políticas, ideológico-culturales y axiológicas de esa Revolución (positivamente contrastantes con el desastre ecológico, económico, político y social que produjo, en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, la contrarreforma y la contrarrevolución neoliberal generalizada en la década de los noventa), y la tenaz resistencia del pueblo cubano a todas las agresiones contra su Revolución, han sido estímulos para las multifacéticas e inconclusas luchas por “la segunda independencia” de América Latina y el Caribe; entre ellas las que, con mayor o menor consistencia

tido desapareciera en los años posteriores, a partir de 1976 comenzaron a realizarse las elecciones directas a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. Estos, a su vez, elegían a los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular y a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular; método de elección indirecta que –como está dicho– desapareció a partir de las modificaciones que se introdujeron en la Constitución y en la Ley Electoral, en 1992.





TABLA N° 1					
Votación registrada en las elecciones para diputados/as a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) del 2007/2008: comparación con los datos relativos de los comicios de 2002/3, 1997/98 y de 1992/93					
	Elecciones 2007/2008		Elecciones 2002/2003	Elecciones 1997/1998	Elecciones 1992/1993
	Cifras absolutas	%	%	%*	%
Potencial electoral	8.495.917				
Abstención	264.552	3.11	2.36	1.65	0.27
Votos emitidos	8.231.365	96.89	97.63	98.35	99.73
Votos en blanco	306.791	3.61	2.93	3.30	3.03
Votos nulos	85.216	1.00	0.84	1.63	3.97
Votos válidos	7.839.358	92.27	93.87	93.41	93.26
Voto unido**	7.125.752	83.87	85.75	88.22	88.15
Voto selectivo**	713.606	8.40	8.12	5.19	4.58
Suma de abstenciones, votos nulos y en blanco	656.559	7.73	6.13	6.58	7.27
* Como todos los porcentajes están calculados sobre la base del potencial electoral, se introducen algunas modificaciones en los datos relativos, difundidos por las autoridades de la isla. Estos se calculan sobre la base de los votos emitidos o de los votos válidos.					
** En el lenguaje electoral cubano se califica como "voto unido" al de aquellos ciudadanos y ciudadanas que sufragan a favor de todos los integrantes de la lista de diputados a la ANPP propuestos por la Comisión de Candidatura. Por consiguiente, los "votos selectivos" son aquellos que se emiten por algunos o algunas de los integrantes de la lista antes mencionada.					
Fuente: Confeccionado por Luis Suárez Salazar a partir de la información oficial aparecida en <i>Granma</i> .					

y consecuencia, despliegan los ya mencionados gobiernos progresistas, reformadores, reformistas o revolucionarios que se han venido instalando en diferentes países de ese continente, desde los dos últimos años del siglo XX.

Pese a las diferencias utópicas y programáticas existentes entre esos gobiernos y los cubanos, a partir de la década de los noventa, la absoluta mayoría de ellos han contribuido a profundizar la crisis política y moral que ha venido sufriendo la persistente agresividad de sucesivos gobiernos estadounidenses contra el pueblo cubano. Así ha quedado demostrado en el creciente apoyo latinoamericano y caribeño a la resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" que, desde 1992 y hasta la actualidad, ha venido aprobando la Asamblea General de la ONU. También en las constantes condenas del Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, de las Cumbres Iberoamericanas, de las Cumbres de la AEC, del





ALBA-TCP y, en fecha más reciente, de la primera Cumbre para la Integración y el Desarrollo de América Latina y el Caribe a las pretensiones extraterritoriales de las “leyes del embargo” promulgadas por diversos gobiernos de Estados Unidos; en particular a la llamada Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 por la administración del demócrata-liberal William Clinton (1993-2001).

La repulsa a ese instrumento jurídico y a las acciones coercitivas emprendidas por esa y otras administraciones estadounidenses también se reflejó, con una inusitada fuerza, en la V Cumbre de las Américas, realizada en abril de 2009 en Trinidad y Tobago. En ella, varios mandatarios del continente –encabezados por los de los países integrantes del Alba-TCP– le reclamaron al presidente Barack Obama la derogación de esa ley, como prueba de “los cambios” de política hacia el continente que había anunciado antes e inmediatamente después de ocupar la Casa Blanca. Tal demanda también se expresó en la ya referida XXXIX Asamblea General de la OEA, y es de esperar que se reitere en su próxima edición ordinaria, en tanto –como se recordó en una de sus resoluciones–, desde 1996, el Comité Jurídico Interamericano había concluido, de manera unánime, que “los fundamentos y la eventual aplicación” de la Ley Helms-Burton “no guardan conformidad con el derecho internacional”.

Como históricamente había demandado el liderazgo político y estatal cubano, en la base de las condenas y demandas antes referidas se encuentra la defensa de los principios de la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados que, por sus propios intereses y cada vez con mayor consistencia, han venido desplegando todos los gobiernos del hemisferio occidental, con excepción del estadounidense. Igualmente, la universalidad que, sobre esas bases, ya exhiben las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y culturales cubanas con los 32 Estados nacionales o plurinacionales actualmente existentes al sur del Río Bravo y de la península Florida. Expresión reciente del alto nivel alcanzado por esas interrelaciones fueron la Cumbre Cuba-CARICOM, efectuada en Santiago de Cuba a fines de 2008; la Cumbre del Grupo de Río de Janeiro y la primera CALC, celebradas en Brasil; así como las visitas realizadas a Cuba por nueve jefes de Estado y gobiernos latinoamericanos y caribeños en el primer semestre de 2009. A esto hay que agregar la destacada participación del presidente Raúl Castro en las Cumbres Extraordinarias del Alba-TCP, del SICA y del Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, efectuadas en Managua, a fines de junio de 2009, con vistas a expresar su reconocimiento y solidaridad con el depuesto gobierno constitucional hondureño y con “su único presidente”, José Manuel Zelaya.





Toda esa dinámica diplomática ha propiciado que, en los años más recientes, las autoridades estatales cubanas hayan logrado desarrollar sus relaciones económico-comerciales con casi todos los países latinoamericanos y caribeños; lo que – pese a las debilidades que les generan los abultados déficits que continúa registrando su comercio de bienes, su abultado endeudamiento externo y su alta concentración en sólo tres países (Venezuela, Brasil y México)– ha contribuido a la reorientación geográfica del comercio exterior cubano. En efecto, si en 1990 el intercambio de bienes entre Cuba y América Latina y el Caribe apenas llegaba al cinco por ciento del total de su comercio exterior, como se verá en la tabla N° 2, en 2008 había ascendido al 40.4 por ciento.

Según la metodología empleada por la Oficina Nacional de Estadísticas de la República de Cuba, la tabla N° 2 incluye las donaciones realizadas por el gobierno cubano, pero excluye las exportaciones de servicios profesionales que ha venido realizando la isla a diferentes países del continente, cuyos montos no aparecen delimitados en las estadísticas de la balanza de pagos. No obstante, en esos guarismos han tenido una enorme influencia las estrechas relaciones que se han venido desarrollando entre Cuba y la RBV, particularmente después de los acuerdos dirigidos a la aplicación del Alba, emprendidos por las autoridades de ambos países. También el incremento de las relaciones comerciales entre Cuba y Brasil. Es de esperar que, durante el 2009 estas registren un nuevo salto

TABLA N° 2					
Comparación en miles de pesos y posición relativa, tanto respecto al intercambio total, como al hemisferio occidental					
	1993	1995	2000	2005	2008
Total	3.164.878	4.374.164	6.470.872	9.786.712	17.928.820
Hemisferio occidental (HO)	1.050.100	1.792.429	2.630.128	4.885.194	9.468.741
Canadá	186.378	451.071	518.019	777.796	1.423.262
EEUU	0	0	0	476.311*	801.101*
Puerto Rico	2	3	88	969*	662*
América Latina y el Caribe	863.720	1.341.355	2.041.021	3.631.087	7.244.388**
% ALC/HO	82.25	74.80	77.60	74.30	72.40
% Canadá/total	5.89	10.31	8.00	8.00	7.9
* Esos guarismos se deben a la decisión del Congreso estadounidense de autorizar las ventas de alimentos a Cuba siempre que se paguen en efectivo y al contado. ** Incluye a Puerto Rico. Fuente: Confeccionado por el autor de este trabajo a partir de datos calculados por la Dra. Tania García Lorenzo a partir de los <i>Anuarios Estadísticos de Cuba</i> 2001, 2002 y 2007.					





cuantitativo y cualitativo, como consecuencia de los acuerdos suscritos durante la más reciente visita realizada a la isla en el 2008 por el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva. Igualmente, se presume que en los años venideros se incrementen las exportaciones cubanas hacia los países del Caribe insular, debido a las ventas de derivados del petróleo vinculadas a los acuerdos de Petrocaribe y a las inversiones que –con apoyo de la empresa venezolana PDVSA– se vienen realizando en la refinería de Cienfuegos, Cuba.

A lo dicho hay que agregar los lazos de cooperación económico-social que, no obstante algunas dificultades, se desarrollan entre Cuba y los diversos Estados miembros de la CARICOM; la activa participación cubana en las labores de Organización de Turismo del Caribe, de la Organización de Asociaciones Nacionales de Telecomunicaciones, del Banco de Desarrollo del Caribe (en el cual el Banco Central de Cuba participa como observador), del CARIFORUM (especializado en las negociaciones entre el Caribe y la Unión Europea), así como de la AEC. Igualmente, la suscripción por parte de autoridades gubernamentales cubanas de diversos Acuerdos de Alcance Parcial y de Complementación Económica con la mayor parte de los gobiernos integrantes de la ALADI; incluidos los ya referidos Acuerdos de Complementación Económica signados con el Mercosur.

A todos esos acuerdos se unen la decidida y decisiva participación del gobierno cubano en todas las labores que han conducido a la ya referida institucionalización, profundización y ampliación del Alba-TCP, así como al funcionamiento y la ampliación de los Estados integrantes de Petrocaribe y del Fondo Alba-Caribe. Objetivamente, ambas institucionales –y en particular las diversas empresas gran nacionales fundadas por el Alba– han abierto inéditas opciones de cooperación e integración económica sectorial entre Cuba, Bolivia y Venezuela, así como con algunos países centroamericanos (Guatemala, Honduras y Nicaragua) y caribeños, que participan en esos acuerdos. Además, han propiciado las activas gestiones que está realizando la diplomacia cubana para que, en la Segunda Cumbre para la Integración y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se realizará en México en febrero de 2010, pueda concretarse la formación de una Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños, totalmente independiente de las instituciones del Sistema Interamericano. A tal empeño también están contribuyendo –además del gobierno mexicano– los gobiernos de algunos de los Estados integrantes de la Unión Suramericana (UNASUR) y de la CARICOM, que mantienen fructíferas relaciones con Cuba. De hecho, según ha trascendido, la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores preparatoria de esa cumbre se realizará en Jamaica, antes de que finalice el presente año.





Merece significar que todas las dinámicas positivas de las interrelaciones interestatales antes referidas no han sido obstáculo para que el Partido Comunista de Cuba y las organizaciones sociales, de masas y profesionales, al igual que diversas ONG cubanas continúen desarrollando sus multifacéticos vínculos con sus contrapartes latinoamericanas y caribeñas. Así lo certifican su sistemática participación en los Congresos de los Pueblos del Caribe (cuya más reciente edición se celebró en La Habana, en junio de 2008), en las cuatro Cumbres de los Pueblos Latinoamericanos que hasta ahora se han realizado (la más reciente se celebró de manera paralela a la V Cumbre de las Américas, realizada en Trinidad y Tobago), en la Alianza Social Continental, en el Foro Social Mundial, al igual que en otros eventos internacionales donde participan las diversas organizaciones del hemisferio occidental que agrupan a los pueblos originarios, a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes y estudiantes, al igual que a ciertos sectores “clasistas” del movimiento obrero y sindical.

Algunas y algunos representantes de esos movimientos sociales también se vinculan a las batallas en defensa de la Humanidad emprendidas por importantes exponentes de “la izquierda intelectual” de todo el mundo, y en particular del hemisferio occidental, así como a las organizaciones y partidos de la “izquierda histórica” y de la “nueva izquierda” latinoamericana y caribeña que interactúan en el ya mencionado Foro de São Paulo. Pese a las críticas implícitas o explícitas que algunas de las organizaciones participantes en ese foro tienen hacia el que llaman el “socialismo estatista y unipartidista” instaurado en Cuba, en sus eventos, las posiciones cubanas encuentran un alto nivel de empatía con las de los plurales destacamentos políticos que en ellos participan. A tal grado que, en diversas ocasiones, los comportamientos de muchos de ellos están mucho más cerca de las posiciones del Partido Comunista de Cuba que de las que defienden otras fuerzas políticas de sus correspondientes países, incluidas las que encabezan los gobiernos de “izquierda” o “centro-izquierda” con los que el gobierno cubano mantiene un alto nivel de relaciones oficiales.

Todo lo antes dicho plantea, objetivamente, diversas oportunidades y amenazas a la proyección *nuestroamericana* de la Revolución Cubana, cuyo análisis trasciende el espacio destinado a este ensayo. No obstante, siempre será necesario resaltar que el adecuado empleo de esas oportunidades y la eficaz neutralización de esas amenazas siempre deberán ser tomadas en cuenta por las autoridades políticas y estatales cubanas; así como, en los casos necesarios, por las organizaciones de base popular que actúan en su sociedad política y civil. En tanto, como ha demostrado la historia, el porvenir de la transición socialista que desarrolla Cuba estará íntimamente vinculado al desenlace de la dinámica entre la revolución,





la reforma, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución que otra vez se está desplegando en América Latina y el Caribe.

Del mismo modo que la búsqueda de soluciones reformadoras y revolucionarias a las contradicciones, antagónicas y no antagónicas, que están afectando a la transición socialista cubana (agudizadas por el negativo impacto que están teniendo en su economía y su sociedad las superpuestas crisis que afectan al sistema capitalista mundial), tendrá una significativa importancia en la maduración de las condiciones subjetivas imprescindibles para la progresiva edificación en “nuestra súper patria común” del ahora llamado “socialismo del siglo XXI” y, por tanto, para llevar a vías de hecho los diversos proyectos “pos-neoliberales”, “pos-capitalistas” y antiimperialistas que, en la actualidad, se están desplegando en el continente americano.

En ese contexto, como demuestra el reaccionario y cruento golpe de Estado que se produjo en Honduras y las dificultades internas y externas (incluida la ambivalente actitud asumida por la administración de Barack Obama) que hasta ahora se han presentado para derrotarlo, cobra toda su importancia el llamado de José Martí en su célebre obra *Nuestra América*:



Estos no son tiempos para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas de almohada (...); las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra.



También su vigente convocatoria:

Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbando, según acaricie el capricho de la luz, o lo tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento y la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes.

De esa unidad en la diversidad de los pueblos, de su “nueva” y “vieja” izquierda política, social e intelectual, así como de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, más o menos reformadores, revolucionarios o simplemente progresistas, actualmente instalados en el continente, mucho dependerá que en el futuro





previsible la Revolución Cubana pueda cumplir sus utopías vinculadas a la liberación del continente de dominaciones externas y opresiones internas, así como, sobre todo, a la anhelada y cada vez más necesaria integración económica y política de Nuestra América.

La Habana, 6 de julio de 2009





NOTA PARA COLABORADORES

Las colaboraciones deberán ajustarse a las siguientes características de presentación:

1. Las colaboraciones serán enviadas por correo electrónico a periferias@fisyp.org.ar. Se agregará una página con nombre del autor, domicilio, dirección de e-mail, teléfono y breve información sobre su pertenencia institucional. En lo posible, se hará llegar una copia en papel.
2. Los artículos tendrán una extensión máxima de 40.000 caracteres (incluyendo espacios); las notas y comunicaciones hasta 10.000 y las reseñas bibliográficas hasta 10.000.
3. Los artículos de investigación incluirán abstracts de no más de cien palabras.
4. Se enviarán en formato de hoja A4, letra Times New Roman tamaño 12.
5. Las citas extensas irán en párrafo aparte, letra Times New Roman tamaño 10, con sangría, sin comillas. Las citas cortas se incluirán en el texto principal, entre comillas.
6. No se usarán negritas ni subrayados en ningún caso. Para destacar algún texto se usarán caracteres en itálica, indicando si el énfasis es propio u original.
7. Las notas irán a pie de página, ordenadas según el numerador automático. También las referencias bibliográficas que correspondan, en forma abreviada, que se incluirán completas en el listado bibliográfico.
8. La bibliografía se incluirá al final del texto, en orden alfabético de autor con el siguiente formato y orden:

a) libros: apellido y nombre del autor, (año de publicación), título del libro en itálica, ciudad de edición, editor. Ejemplo:

Lukács, George (1983), *Historia y conciencia de clase*, México, Grijalbo.

b) artículos de libros. Ejemplo:

Campione, Daniel (2005), "La política de Bush y el pensamiento de la izquierda", en Gambina, J. C., *Moloch Siglo XXI*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación.

c) artículos de revista o de diarios se entrecomillará el título del trabajo y en cursiva se consignará el nombre de la publicación, editorial y año/fecha de edición; en itálica el nombre de la publicación, número, volumen, serie y otros datos de identificación. Ejemplo:
Amín, Samir (2009), "Ser marxista hoy, ser comunista hoy, ser internacionalista hoy", en *Periferias*, N° 17, Buenos Aires, FISyP.

d) referencias a diarios. Ejemplo:

Página/12 (2009), Buenos Aires, 23 de agosto.

9. En caso de enviarse imágenes o fotos, quedará a criterio del Comité Editorial su inclusión, en razón de la calidad de impresión resultante. Una condición importante es enviarlas con resolución alta (por ejemplo, no son adecuadas las que se bajan de Internet).
10. En cuanto a los gráficos, se incluirán en los textos en el lugar correspondiente, pero se enviará un archivo en alguno de los programas usuales, por ejemplo el Excel. En el archivo que contiene la imagen gráfica deberán incluirse los datos que les dieran origen.

Nota: todas las colaboraciones recibidas serán examinadas por el consejo asesor de la revista

